

PANORAMA DE NECESIDADES HUMANITARIAS

EL SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS

CICLO DEL
PROGRAMA HUMANITARIO
2021
JULIO 2021



Sobre este documento

Este documento ha sido consolidado por OCHA en nombre de la comunidad humanitaria en los países y de los socios. En este se ofrece un entendimiento común de la crisis, incluidas las necesidades humanitarias más apremiantes y el número estimado de personas que necesitan asistencia humanitaria. También, representa una base de pruebas y ayuda a informar la planificación estratégica conjunta de la respuesta. Las designaciones empleadas y la presentación del material en el informe no implican la expresión de ninguna opinión por parte de la Secretaría de las Naciones Unidas en relación con la condición jurídica de ningún país, territorio, ciudad o zona o de sus autoridades, ni en relación con la delimitación de sus fronteras o límites. Este es un documento técnico y debe ser interpretado como tal sin implicaciones o connotaciones políticas.

Este documento se actualizará a finales de 2021.

FOTO DE LA PORTADA

Save the Children Guatemala

Las denominaciones empleadas y la presentación del material en esta publicación no implican la expresión de ninguna opinión por parte de la Secretaría de las Naciones Unidas en relación con la condición jurídica de ningún país, territorio, ciudad o zona o de sus autoridades, ni en relación con la delimitación de sus fronteras o límites.

Para obtener las últimas actualizaciones



OCHA coordina la acción humanitaria para garantizar que las personas afectadas por emergencias reciban la asistencia y la protección que necesitan. OCHA trabaja para superar los obstáculos que impiden que la asistencia humanitaria llegue de manera efectiva a la población afectada por emergencias y proporciona liderazgo para la movilización de la asistencia y los recursos por parte del sistema humanitario.

www.unocha.org/afghanistan
twitter.com/ochaafg

Humanitarian RESPONSE

Humanitarian Response es el sitio web central para las herramientas y servicios de gestión de la información, permitiendo el intercambio entre los clústeres y los socios del IASC que operan en una emergencia prolongada o repentina.

www.humanitarianresponse.info/afghanistan



Humanitarian InSight apoya a los tomadores de decisiones brindándoles acceso a datos humanitarios. La herramienta provee la última información verificada sobre necesidades, entrega de la respuesta humanitaria y las contribuciones financieras.

www.hum-insight.com



El Financial Tracking Service (FTS) es el proveedor primario de los datos reportados constantemente sobre el financiamiento humanitario global y contribuye a la toma de decisiones estratégicas identificando brechas y prioridades para una asistencia humanitaria eficaz, eficiente y basada en los principios humanitarios.

fts.org/appeals/2021

Tabla de Contenido

04 **Introducción**

10 **Parte 1: Impacto de la Crisis y Condiciones Humanitarias**

11 1.1 Contexto de la Crisis - Crisis convergentes y un aumento de las necesidades sin precedentes

22 1.2 Choques y sus impactos

33 1.3 Condiciones Humanitarias y Severidad de las Necesidades

38 **Parte 2: Análisis de Riesgos y Monitoreo de la Situación y Necesidades**

39 2.1 Análisis de Riesgos y proyección de las necesidades

41 2.2 Monitoreo de la Situación y Necesidades

42 **Parte 3: Análisis Sectorial (región NCA)**

43 3.1 Protección

48 3.1.1 Violencia basada en Género (VBG)

52 3.1.2 Protección a la Niñez

56 3.2 Nutrición

60 3.3 Seguridad Alimentaria

65 3.4 Agua, Saneamiento e Higiene

70 3.5 Salud

74 3.6 Recuperación Temprana

78 3.7 Educación

82 3.8 Alojamiento de emergencia

85 3.9 Coordinación y Gestión de Albergues

90 **Parte 4: Análisis de necesidades por país**

91 4.1 El Salvador

92 4.1.1 Contexto

92 4.1.2 Impacto y necesidades humanitarias de las crisis en personas y servicios

99 4.2 Guatemala

100 4.2.1 Contexto

101 4.2.2 Impacto y necesidades humanitarias de las crisis en personas y servicios

107 4.3 Honduras

108 4.3.1 Contexto

109 4.3.2 Impacto y necesidades humanitarias de las crisis en personas y servicios

115 **Parte 5: Anexos**

116 5.1 Fuente de los datos

120 5.2 Metodología para el cálculo del PIN

121 5.3 Vacíos de Información y Limitaciones

123 5.4 Acrónimos

Introducción

El Salvador, Guatemala y Honduras, países que conforman el Norte de Centroamérica (NCA), reúnen una serie de necesidades humanitarias impulsadas por condiciones compartidas de pobreza elevada, choques climáticos recurrentes, violencia crónica, acceso limitado a servicios de salud y flujos migratorios desde y dentro de sus países, entre otros factores. Las distintas necesidades producidas por estas condiciones de larga data han formado un tejido complejo de vulnerabilidades que la acción humanitaria ha buscado atender con abordajes intersectoriales desde hace varios años.

Pese a los logros en brindar respuestas holísticas a las necesidades multidimensionales en el NCA, la acción humanitaria en estos países se vio obligada a reconfigurarse, de manera drástica, en el 2020 ante los impactos de la pandemia de la COVID-19 y de la temporada de huracanes más activa jamás registrada. Además de generar sus propios escenarios de necesidades, la pandemia y las tormentas han agudizado las crisis existentes del NCA y aumentado la cantidad de personas en necesidad de asistencia humanitaria entre los tres países en un 60 por ciento entre el inicio del 2021 y mediados del 2021.

El impacto real de la pandemia y las tormentas del 2020 en las vulnerables existentes del NCA ya está siendo corroborado por indicadores publicados en el primer semestre de 2021. Tras declives alentadores en porcentajes de pobreza y pobreza extrema entre 2018 y 2019, especialmente en El Salvador y Honduras, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) proyecta que los porcentajes registrados en los tres países al cierre del 2020 superen las del 2018, así creando nuevos riesgos para cientos de miles de personas adicionales. Según informes de 2021 de la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (CIF), el porcentaje de hogares en Honduras con brechas en su acceso a alimentos es

de 21 por ciento comparado con el 8 por ciento previo a la pandemia, mientras 1 de cada 5 personas en Guatemala están sufriendo brechas críticas en su acceso a alimentos, brechas que están previstas persistir durante los próximos meses.

Consecuentemente, el desplazamiento interno y entre fronteras están mostrando fuertes incrementos. El Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés) indica que Honduras registró 937.000 nuevos desplazamientos internos causados por desastres en 2020, cifra que supera con creces el conjunto de desplazamientos por desastres y por conflicto en países como Sudán del Sur, Sudán o Afganistán. El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos informa de 375.000 detenciones de personas del NCA en la frontera entre México y EE.UU. entre octubre 2020 y mayo 2021, lo que supera el total de detenciones en todo el 2020. Las cifras de marzo y abril 2021, en particular, superaron los conteos de estos meses en 2019.

Frente a estas tendencias preocupantes, junto a tendencias similarmente preocupantes en materia de medios de vida, acceso a servicios de salud, agua, saneamiento e higiene, educación y protección, las poblaciones vulnerables del NCA, especialmente mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas en situación de movilidad humana, poblaciones indígenas y afrodescendientes, personas con discapacidad y miembros de la comunidad LGBTIQ+, requerirán que la comunidad humanitaria aborde la severidad y el alcance de sus necesidades bajo un entendimiento colectivo que permita la planificación estratégica de una respuesta en conjunto.

Mapa general

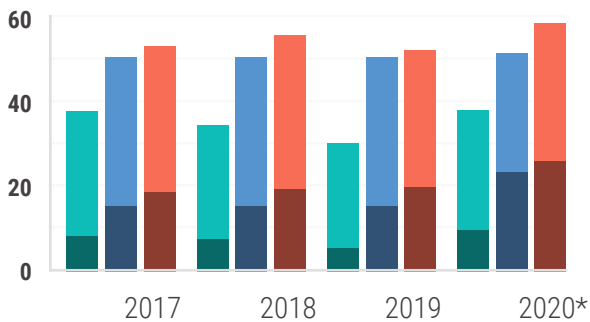


Las designaciones empleadas y la presentación del material en el informe no implican la expresión de ninguna opinión por parte de la Secretaría de las Naciones Unidas en relación con la condición jurídica de ningún país, territorio, ciudad o zona o de sus autoridades, ni en relación con la delimitación de sus fronteras o límites.

Cifras Claves

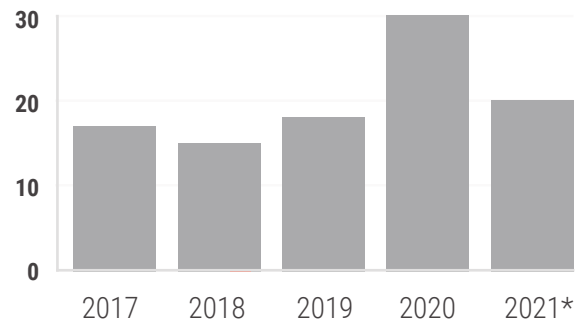
■ El Salvador ■ Guatemala ■ Honduras

Personas en situación de pobreza/extrema pobreza (%)¹



* proyecciones

Huracanes en el Atlántico - tormentas con nombre²

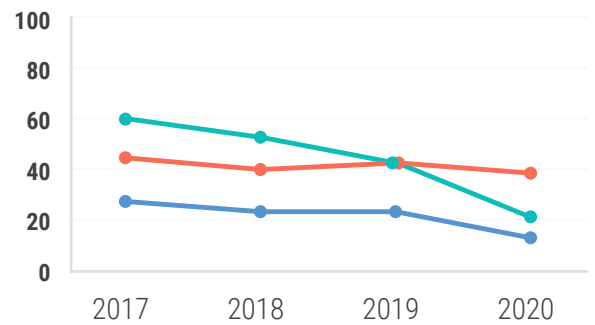


* proyecciones de NOAA

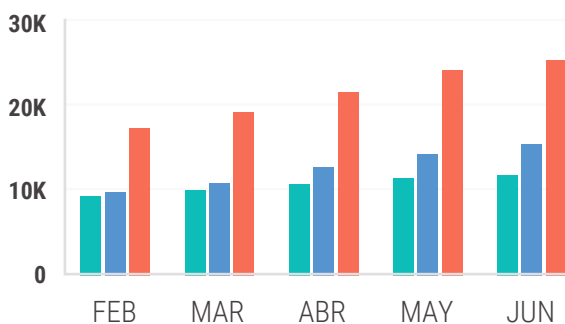
Personas en la fase 4 de la CIF 2021³



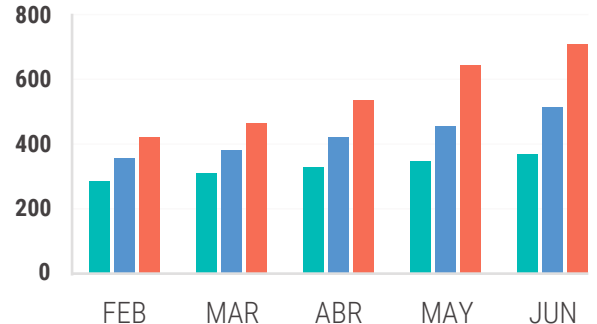
Homicidios por cada 100K⁴ personas



Casos de COVID-19 por cada 1M⁵ de personas

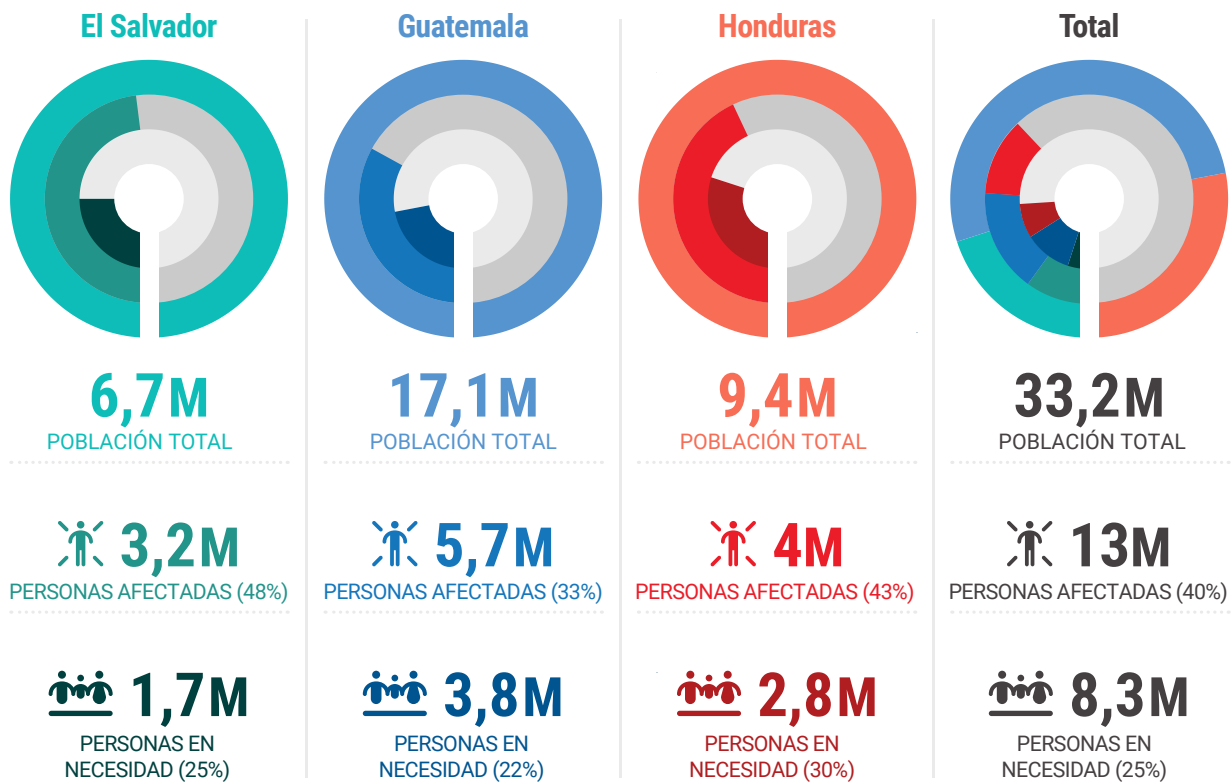


Muertes de COVID-19 por cada 1M⁶ de personas



Fuentes: 1. ECLAC - <https://bit.ly/3zFY2uB> / 2. Registros de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) / 3. SICA - El Salvador: <https://bit.ly/3iXg5Xe>, Guatemala: <https://bit.ly/3xta1tM>, <https://bit.ly/3vDQmWN>, Honduras: <https://bit.ly/3iWBv71> / 4. InsightCrime - <https://bit.ly/3xvArLf> / 5. Datos nacionales de casos de COVID-19 recopilados en: bit.ly/3q9J5N7 / 6. Datos nacionales de casos de COVID-19 recopilados en: bit.ly/3q9J5N7

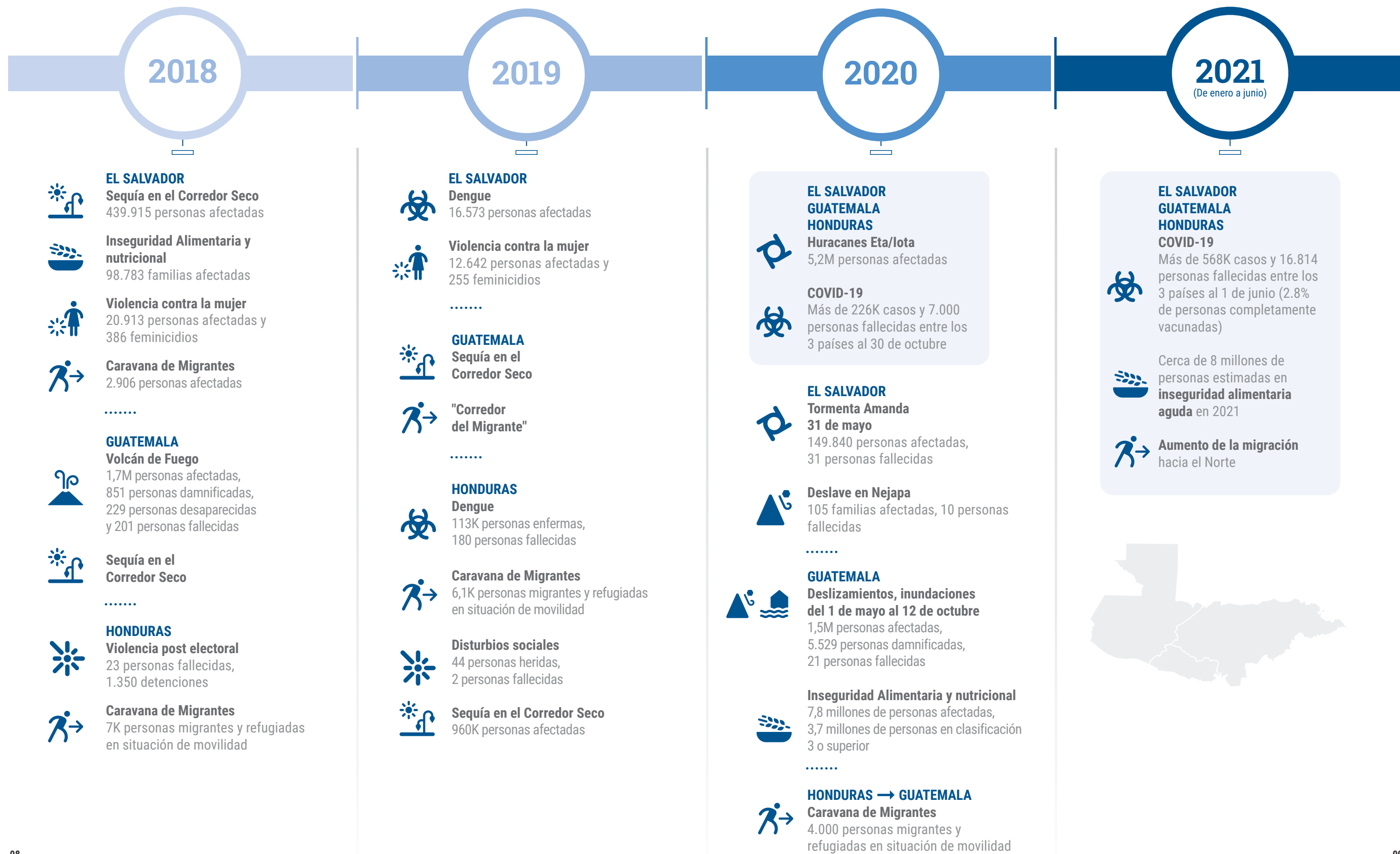
Análisis de necesidades por país



Análisis de necesidades por sector

Sector	Personas en necesidad (por país)			TOTAL
	El Salvador	Guatemala	Honduras	
Seguridad Alimentaria	1M	3,4M	3,2M	7,7M
Agua, Saneamiento e Higiene	808K	1,1M	2,5M	4,4M
Salud	998K	930K	2,2M	4,1M
Protección	756K	1,7M	942K	3,4M
Recuperación Temprana	944K	1,1M	1,1M	3,1M
Nutrición	236K	2,3M	530K	3,0M
Violencia basada en Género	605K	660K	637K	1,9M
Educación	792K	178K	369K	1,3M
Protección a la Niñez	*	601K	302K	903K
Alojamiento de emergencia	23K	254K	298K	567K
Coordinación y Gestión de Albergues	12K	*	95K	139K

Línea de Tiempo



Parte 1:

Impacto de la Crisis y Condiciones Humanitarias

DEPARTAMENTO DE LA PAZ, EL SALVADOR

Entrega de agua en insumos para higiene de letrinas en Isla la Calzada, como parte de las acciones de respuesta humanitaria ante la emergencia por las Tormentas Amanda y Cristóbal

Foto: Oxfam El Salvador/Alfredo Carías



1.1

Contexto de la Crisis - Crisis convergentes y un aumento de las necesidades sin precedentes

En los países del Norte de Centroamérica (NCA), El Salvador, Guatemala y Honduras, la combinación de problemas estructurales y coyunturales ha generado un impacto humanitario que está poniendo en riesgo la vida, la seguridad y el acceso a derechos y servicios básicos de millones de personas. El 2020 fue marcado por la convergencia del impacto de la pandemia COVID-19 y los efectos de los huracanes Eta e Iota, agudizando esta crisis multidimensional. Una crisis que es tanto humanitaria en su impacto, como de seguridad, protección y desarrollo en sus raíces, factores que obligan una respuesta integral y coordinada, para mitigar la creciente cantidad y severidad de las necesidades con el fin de ayudar a salvar vidas.

Hoy en día viven casi 8,3 millones de personas con necesidades humanitarias en el NCA, cifra que representa un incremento de 60 por ciento relativo a los 5,2 millones de personas con necesidades humanitarias identificadas en el Panorama de Necesidades Humanitarias a inicio del año 2020, antes de que la pandemia COVID-19 y los impactos de Eta e Iota multiplicaran las vulnerabilidades endémicas existentes. Los tres países comparten un perfil similar por la recurrencia cíclica de choques climáticos; altas tasas de exclusión, violencia, feminicidios, infanticidios, violencia sexual y violencia contra la niñez, los retos de protección que presentan estos escenarios; a su vez las limitaciones en la cobertura y acceso a agua segura y potable, servicios de salud, incluyendo salud sexual y reproductiva; altos niveles de desplazamientos, internos y transfronterizos; déficits cualitativos y cuantitativos de vivienda y hacinamiento; crecientes tasas de pobreza e inseguridad alimentaria; y falta de acceso a servicios educativos e internet.

La naturaleza estructural y multidimensional de esta crisis ha generado un impacto desproporcionado en la vida de las mujeres, quienes enfrentan la feminización de la pobreza, el desempleo, el desplazamiento y la migración, la reducción de su autonomía y el incremento de trabajo de cuidados. Así mismo, los niños y las niñas, pueblos indígenas, afrodescendientes, personas LGBTIQ+ y personas con discapacidad, entre otros grupos, se han visto particularmente afectados. En este contexto, efectuar una respuesta que reduzca la violencia, incluyendo la violencia basada en género (VBG), fortalezca la protección, la inclusión social y promueva la protección de derechos fundamentales y soluciones duraderas es tanto un imperativo como un reto.

La crisis de la COVID-19 sigue profundizando vulnerabilidades preexistentes, incluyendo las brechas en el acceso equitativo y disponibilidad de servicios de salud, entre otros los servicios de salud sexual y reproductiva, creando un conjunto de necesidades que seguirán agravándose durante los próximos 18 meses. El NCA, particularmente en el llamado Corredor Seco, registra, junto con Haití y Venezuela, el mayor aumento de la inseguridad alimentaria en América Latina y el Caribe durante la pandemia, lo que ha impulsado la proyección de que la región tendrá el mayor aumento relativo del mundo (+269 por ciento). La crisis COVID-19 y los huracanes Eta e Iota han exacerbado las desigualdades existentes en la educación en los tres países, tales como la deserción educativa, la falta de recursos educativos adecuados y la poca inversión en infraestructura educativa. Aunque son considerados países de renta media, El Salvador, Guatemala y Honduras fueron incluidos entre los 23 países del 2020 Global Report on Food Crises (GRFC) 2020, por cumplir con criterios que contemplan tener poblaciones en necesidad de asistencia humanitaria

por consecuencia de crisis climáticas o afectadas por violencia, conflictos e inseguridad. Según datos publicados en el GFRC 2021, 8,1 millones de personas en el NCA, Nicaragua y Haití estaban en crisis o peor en 2019, según la Clasificación Integrada en Fases de la Seguridad Alimentaria (CIF).

Así mismo, las restricciones impuestas para frenar la pandemia de COVID-19 han generado sus propios impactos humanitarios, además de afectar la implementación de planes de respuesta. Estas medidas crearon una mayor complejidad para las diferentes respuestas a la temporada de huracanes 2020, cuyas 30 tormentas lograron que fuera la temporada más activa en la historia.

El control, alcance y alto nivel de violencia ejercida por grupos delictivos son un fuerte impulsor de necesidades humanitarias y retos de protección. A pesar de una reducción colectiva del 30 por ciento en los homicidios registrados entre 2019 y 2020, los 1.842 homicidios en el primer trimestre de 2021 establecen una tendencia que podría superar las cifras de los dos años anteriores, despertando temores que la violencia del NCA podría recuperar los niveles de años anteriores.

La VBG, con sus consecuencias en la salud y la protección de las mujeres y niñas, sigue siendo una de las principales preocupaciones en el NCA. En Honduras, uno de los países más violentos contra las mujeres, niñas y personas LGBTIQ+, una mujer o niña es asesinada cada 27 horas (CEPAL) mientras que el 86 por ciento de las más de 3.400 denuncias de violencia sexual en 2019 fueron niñas y adolescentes entre 0 y 19 años. Según la CEPAL, la tasa más alta de feminicidio por cada 100.000 mujeres en América Latina se encuentra en Honduras (6,2), seguido por El Salvador (3,3) en segundo lugar y Guatemala (2,0) en cuarto.

Otros delitos y formas de violencia han incrementado durante la pandemia. Cabe destacar que la flexibilización de restricciones por la COVID-19 ha dado paso a que la extorsión y el narcotráfico recobran sus niveles prepandemia². Entre las casi 5.000 personas desaparecidas en 2020, El Salvador

reportó un promedio diario de 6 desaparecidos. Los casos de desapariciones reportadas durante el primer trimestre de 2021 ya alcanzan alrededor de 3.000. Aunque existen pocas cifras oficiales sobre el reclutamiento forzado o la explotación y utilización de niños, niñas y adolescentes, los análisis de estas cifras indican que casi el 60 por ciento de las desapariciones corresponden a la población adolescente.

Esta violencia generalizada, junto con carencias en oportunidades económicas, la desigualdad y la seguridad alimentaria además de los efectos de choques climáticos recurrentes, incide en el desplazamiento dentro y desde la región. Más de 549.000 personas de El Salvador, Guatemala y Honduras solicitaron asilo a nivel global. Las cifras sobre personas internamente desplazadas en El Salvador y Honduras oscilan entre 318.500 y 700.000 según la fuente. En Honduras, el impacto es mayor en mujeres quienes corresponden al 51 por ciento de las personas desplazadas.

Los países del NCA son países de origen y/o tránsito en el marco de los movimientos mixtos de personas migrantes y refugiadas a gran escala en ruta hacia el norte. Datos oficiales del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés) indican la detención de aproximadamente 350.000 personas migrantes en la frontera entre EE.UU. y México durante el primer trimestre de 2021, la cifra más alta desde 2001. Estas son cifras récord de niñas y niños no acompañados, con 18.000 arribos solo en marzo.

Brindar una protección efectiva para esta población conlleva una serie de graves desafíos por cuenta de las medidas de control y restricciones por la pandemia de COVID-19 y limitaciones en la identificación y atención de personas con necesidades de protección y/o asistencia, aunado a la falta de información y los movimientos irregulares. Estos desafíos incrementan a su vez el resto de los desafíos humanitarios que enfrenta la región.

Contexto demográfico y social

Los países del NCA tienen una población total de 33.260.056 habitantes, de los cuales 16.246.167 son hombres (48.9 por ciento) y 16.995.888 (51.1 por ciento) son mujeres. Con un 65 por ciento de El Salvador, 62 por ciento de Guatemala y 64 por ciento de Honduras siendo personas de entre 15 y 64 años, el NCA es una población relativamente joven.

La esperanza de vida ha ido en aumento y es mayor en las mujeres, situándose actualmente en 69 años para los hombres (H) y 78 años para las mujeres (M) en El Salvador, 72 años (H) y 78 años (M) para Guatemala y 72 años (H), 77 años (M) en Honduras. La tasa de fecundidad para los tres países se sitúa en 2 para El Salvador, 2.7 para Guatemala y 2.2 Honduras. Históricamente, la fecundación y la tasa de nacimientos entre adolescentes en la región ha sido alta y sin mayores cambios debido a las altas tasas de VBG, a los matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas (aproximadamente uno de cada tres embarazos en los países de NCA son en adolescentes). Las mujeres en edad reproductiva representan alrededor del 25 por ciento de la población en necesidad contando con necesidades específicas en salud sexual y reproductiva, y la población adolescente en particular requiere una especial atención. Las necesidades insatisfechas en planificación familiar se incrementaron al 24 por ciento en Honduras, 15 por ciento en Guatemala y 17 por ciento en el Salvador. Se estima que entre el 2,3 al 4 por ciento de la población en necesidad está en situación de embarazo.

La mortalidad materna sigue siendo una preocupación en los tres países del NCA, más tras la pandemia de COVID-19 y los recientes desastres naturales, por las demoras a la identificación y de acceso a servicios, siendo esta aún más elevada en poblaciones indígenas. Sobresale que El Salvador y Honduras registran 13 y 16 muertes infantiles por cada 1.000 nacidos respectivamente, cifras por debajo de la tasa global de 28. En Guatemala, el valor asciende a 23.

La mayoría de la población reside en entornos urbanos. Casi tres de cada cuatro personas en El Salvador viven en ciudades, tasa que pasa a casi seis de cada 10 en

Honduras y un poco más de la mitad en Guatemala. Además, en Guatemala y El Salvador, viven 12 y 15 mujeres más por cada 100 hombres respectivamente en áreas urbanas. La informalidad en áreas urbano-marginales, donde existe una escasez relativa de suelo urbano y falta de vivienda digna, suele ser la única opción viable para familias de recursos limitados.

La ubicación de una vivienda en los centros urbanos influye en el acceso a los puestos de trabajo, las escuelas, los centros de salud y los servicios públicos. La permanente exposición a deslaves, inundaciones, terremotos y otros fenómenos geo-climáticos, la ubicación y precariedad de asentamientos y la insuficiencia en servicios sanitarios y de gestión de residuos son multiplicadores de amenazas que amplifican las dimensiones humanitarias de cualquier emergencia. En las zonas rurales esta situación es más preocupante debido a que el acceso a los servicios básicos requiere viajar largas distancias y muchas familias no cuentan con los recursos económicos para cubrir estos traslados.

Las tasas de alfabetización de 89 por ciento en El Salvador para personas adultas mayores de 15 años, 81 por ciento en Guatemala y 87 por ciento en Honduras hacen que el NCA tenga algunas de las tasas más bajas de América Latina. Los valores son aún menores para mujeres adultas mayores, como en el caso de Guatemala, donde una de cada cuatro mujeres adultas no sabe leer ni escribir.

El NCA se caracteriza por una alta inequidad, propulsada por desigualdades sociales de género, étnico-raciales y territoriales, que influyen en las discrepancias en niveles de ingreso y acceso a los servicios básicos. Las mujeres y niñas, en especial indígenas y rurales, enfrentan mayor pobreza, desempleo, carga de trabajo de cuidados no remunerado y limitación de acceso a servicios de salud, condiciones que han empeorado durante la crisis de COVID-19 y el impacto de los huracanes. En Honduras las mujeres poseen solo el 12 por ciento de la tierra, en El Salvador 13 por ciento y en Guatemala 15 por ciento. Mientras que los hombres tienden a recibir más títulos de propiedad, las mujeres suelen no poder acceder créditos o propiedades por inestabilidad

e informalidad laboral, brecha salarial y/o roles de cuidado, en el que invierten de 4 a 15 por ciento más de tiempo que los hombres.

Entre las diversas poblaciones indígenas del NCA, un 44 por ciento de personas en Guatemala se autoidentifican como indígenas, en Honduras el 7 por ciento y en el Salvador menos del 1 por ciento. Los indicadores de desarrollo de estos grupos son, en términos generales, inferiores a las medias nacionales, lo que suscita una mayor vulnerabilidad al surtido de riesgos que existen en el NCA, y una dificultad mayor para acceder a la asistencia humanitaria, a la recuperación y al desarrollo. Las mujeres indígenas son el grupo poblacional que muestra mayores situaciones de desigualdad en todos los indicadores socio-económicos. Por ejemplo, aunque casi la mitad de la población en Guatemala es indígena, los esfuerzos de vacunación contra la COVID-19 se han concentrado en personas ladinas y que viven en las áreas urbanas, mostrando cómo la respuesta está influenciada por discriminaciones existentes pre-COVID 19.

Contexto económico - Una pobreza endémica

Si bien El Salvador, Guatemala y Honduras son países de renta media, alrededor del 70 por ciento de la población trabaja en la economía informal, caracterizada por ingresos bajos, y sin protección social ni los beneficios del limitado crecimiento económico de la región en los últimos años. Al contrario, el ingreso real per cápita para los sectores más vulnerables ha disminuido. Además, existe un desequilibrio por género, ya que, de cada 10 mujeres en El Salvador y en Guatemala, 7 tienen un empleo informal, una proporción que en Honduras corresponde a 8 de cada 10 mujeres en condiciones más precarias y peor remuneradas, situación que se pronuncia más en las trabajadoras domésticas. Para los hombres la relación es más baja con 5.7 y 7 de cada 10 respectivamente. Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) también representan un sector importante del mercado laboral.

Como consecuencia, muchas personas enfrentan dificultades para acceder a la seguridad social o

recibir subsidios u otro tipo de apoyo financiero por no aparecer en ninguna nómina. Resulta indicativo que, en Honduras, el Índice de Desarrollo de Género es de 0.611 y el Índice de Desigualdad de Género es de 0.479, por ciento por lo que la brecha de género es de 27.8, por ciento según el PNUD. En el caso de Guatemala el Índice de Desarrollo Humano es de 0.666, y el de Desigualdad de Género es de 0.481, generando una brecha de género de 27.5 por ciento.

Pese a algunos avances significativos y diferenciados por país, la pobreza, la pobreza extrema y las inequidades en el NCA siguen resultando en Coeficientes de Gini sobre la desigualdad en la distribución de ingresos entre los más altos del mundo. Casi la mitad del NCA vive en pobreza, condición que alcanza niveles críticos en comunidades rurales y afecta en mayor medida a la población indígena o afrodescendiente. Casi 8 de cada 10 personas en la población rural de Guatemala vive en situación de pobreza. Esta proporción es 6 de 10 en Honduras y casi 5 de cada 10 en El Salvador. Este determinismo socioeconómico exacerba la vulnerabilidad de estas poblaciones frente a los efectos del cambio climático, las epidemias u otros choques.

Sistemas de Protección Social y acceso a servicios

En respuesta a las secuelas socioeconómicas de la pandemia de COVID-19 y la temporada de huracanes 2020, los gobiernos han introducido transferencias monetarias temporales como los Bonos de Compensación en El Salvador, el Bono Familia en Guatemala y el Bono Único en Honduras, y/o han incorporado nuevos mecanismos de identificación, focalización y/o pago.

Pese a estas innovaciones los avances no han sido suficientes, y los efectos de la pandemia, el incremento en la pobreza y las aún importantes brechas de cobertura siguen afectando el valor de la transferencia como garante asistencia social. Algunas de las principales limitaciones de los sistemas están relacionadas a la limitada disponibilidad de recursos para expandir la cobertura especialmente en las zonas rurales, baja integración del enfoque de género e incrementar el valor de las transferencias, o a la

creciente pero aún limitada capacidad de adaptación de los sistemas nacionales.

La adopción de estrategias para reducir la pobreza y las políticas públicas eficientes para la recaudación fiscal, funcionan como eslabones básicos para construir sistemas de protección social cada vez más integrales. Existen gabinetes de gobierno especializados para coordinar el sector de políticas sociales y llevar los servicios de protección social “mínimos” al 100 por ciento de la población objetivo en estos países, población que contempla grupos prioritarios como la niñez y la adolescencia, adultos mayores, las mujeres y las personas con discapacidades. En Guatemala, la Política General de Gobierno 2020-2024, en Honduras la plataforma Vida Mejor y en El Salvador la Ley de Desarrollo y Protección Social funcionan como marcos implementadores generales de la política pública para la protección social.

Sin embargo, las inversiones públicas relativo a la cobertura social han sido históricamente bajas e insuficientes como para financiar la infraestructura o los servicios sociales. La ausencia de inversiones públicas sustantivas para fomentar el crecimiento seguirá ejerciendo presión para emigrar, además de perjudicar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Estas limitaciones se extienden a los sistemas de salud, los cuales tienden a concentrar servicios y médicos especializados en pocos centros urbanos.

Existe una deficiencia similar en los servicios de agua potable y saneamiento, incluso en zonas urbanas hacinadas. En Guatemala, la mayoría de las 917.000 personas en unos 307 asentamientos precarios requieren mejor acceso a estos servicios. En El Salvador, el 22 por ciento de la población se abastece de agua por medio de sistemas rurales mientras el 10.2 por ciento de los hogares carecen de acceso a servicio de agua por cañería y se abastecen de agua por medio de pozos y otras fuentes no mejoradas. Esto afecta particularmente a las mujeres, aumentando la carga de trabajo no remunerado. Durante la crisis COVID-19, las mujeres del Corredor Seco de Guatemala

reportaron invertir de 48 a 72 horas para recolectar 2 cántaros de agua de 3 litros cada uno.

Estas condiciones físicas y sociales juegan un papel determinante en la propagación o contención de enfermedades y la habilidad de protegerse de sus efectos o incluso contribuir a la mitigación. El hacinamiento, sobre todo en los asentamientos informales y en áreas urbano-marginales super pobladas, hace prácticamente imposible cumplir con las normas de distanciamiento físico y confinamiento implementadas para prevenir contagios. Estas condiciones, además de contribuir a la VBG y al deterioro de la salud psicosocial, también conducen a otros riesgos sociales y sanitarios en la pandemia COVID-19. Destaca el caso del lago de Amatitlán, cerca de la capital guatemalteca, que sufrió una contaminación de residuos sanitarios, mascarillas y guantes de látex, elevando el riesgo de infección y envenenamiento.

Marco legal

La concatenación de las crisis crea una presión cada vez mayor para responder con marcos legales que protejan contra las violaciones de los derechos humanos, los desplazamientos forzados y las crisis migratorias y que fortalezcan los sistemas de protección internacional y los sistemas de protección de las mujeres, niñas, niños (en especial no acompañados) y adolescentes.

Existen múltiples tratados y compromisos internacionales reconocidos en el NCA que fortalecen los marcos jurídicos para garantizar la protección de mujeres como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres de Belén do Pará y la Convención Sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, entre otros, la protección de la niñez mediante la Convención sobre los Derechos del Niño, así como la protección contra la delincuencia organizada transnacional; la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, entre otras.

Las leyes nacionales e iniciativas regionales han hecho esfuerzos importantes para promover una

migración segura, ordenada y regular y el fortalecer la protección de personas refugiadas. El Convenio Centroamericano de Libre Movilidad (CA-4) firmado por El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua (1991), por ejemplo, permite el tránsito de personas de los países signatarios sin necesidad de pasaporte y con trámites migratorios expeditos. Los países del NCA son Estados parte de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su protocolo de 1967, y cuentan con regulaciones que usan la definición de refugiado de la Convención de 1951 como la definición regional de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados (1984). Los tres países participan del Marco Integral Regional de Protección y Soluciones (MIRPS), un proceso que promueve un enfoque integral para abordar el desplazamiento en Centroamérica y México a través de la cooperación y la responsabilidad compartida establecida en el Pacto Mundial sobre Refugiados.

Sin embargo, la debilidad de los marcos legales e institucionales para prevenir y responder al desplazamiento forzado interno sigue siendo un reto.

El Salvador es el único país del NCA que cuenta con una legislación para abordar la prevención y protección con respecto al desplazamiento interno, aunque todavía restan pasos para asegurar su implementación efectiva. En el caso de Honduras, el Congreso Nacional sigue analizando un proyecto normativo sobre la prevención y la respuesta al desplazamiento interno.

Debido al impacto desproporcionado de la pandemia de COVID-19 en poblaciones más vulnerables como las mujeres, las personas LGBTIQ+ e indígenas, los marcos legales de protección y de derechos humanos son de fundamental importancia. Honduras estableció el Decreto No. 99 del 2020 que asegura medidas de prevención y atención para la violencia contra las mujeres y acciones. El NCA ha adoptado compromisos para la protección de otras poblaciones específicas tales como pueblos indígenas o personas LGBTIQ+.

Los tres países han hecho avances en sus marcos legales de gestión de riesgos en línea con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, avances que han fortalecido las capacidades de



DEPARTAMENTO DE YORO, HONDURAS

Foto: UNDAC

prevención, preparación, respuesta y recuperación ante emergencias, con un abordaje hacia la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (GIRD). Otras iniciativas GIRD se relacionan más a la resiliencia y el cambio climático como la Estrategia Agricultura Sostenible Adaptada al Clima para la región del Sistema de Integración Centroamericana (SICA): 2018-2030 (EASAC), que vincula el y la seguridad alimentaria y nutricional con el cambio climático.

La Dirección General de Protección Civil de El Salvador, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) de Guatemala y la Comisión Permanente de Contingencias de Honduras (COPECO), todas pertenecen a sus respectivos Sistemas Nacionales de Gestión de Riesgos, entes líderes de la respuesta interinstitucional bajo enfoques operativos de GIRD. Estas estructuras nacionales a su vez integran el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en América Central y República Dominicana (CEPREDENAC), la Secretaría especializada regional de GIRD del SICA con carácter intergubernamental. Tanto la CEPREDENAC como la Secretaría Ejecutiva de CONRED cuentan con políticas de igualdad de género que buscan el no dejar a nadie atrás y no profundizar el daño y las brechas de género preexistentes.

Cada país del NCA cuenta con un Equipo Humanitario de País (HCT, por sus siglas en inglés) que vela por la coordinación internacional de la asistencia humanitaria mediante protocolos acordados entre autoridades nacionales y sus socios para la GIRD. Estas redes incluyen agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas, ONG, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, el sector privado y otros actores, quienes colaboran en actividades coordinadas de preparación y respuesta a desastres. Aún con la presencia de estas instancias, los marcos legales internacionales de apoyo humanitario internacional a los países no dejan de funcionar bajo un enfoque de subsidiariedad y complementariedad, enfoque reflejado en la Resolución 46/182 de las Naciones Unidas y en los Principios Humanitarios de Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad e Independencia.

Contexto ambiental y cambio climático

El NCA es la zona de más alto riesgo de desastres en Centroamérica, siendo una de las áreas más afectadas por eventos geo-climáticos extremos como terremotos, inundaciones, huracanes y sequías, en particular a lo largo del Corredor Seco. Estos choques recurrentes son cada vez más intensos y tanto sus causas como sus efectos van de la mano del cambio climático, la migración y factores económicos, sociales, políticos y ambientales.

En los últimos años, las crecientes tendencias a sequías más prolongadas en ciertas zonas de los tres países, relacionadas al fenómeno climatológico de El Niño, y a lluvias cada vez más fuertes provenientes de depresiones o tormentas tropicales en otras partes, han tenido un efecto devastador e incurrido costos elevados. Guatemala y El Salvador ambos además tienen un historial de erupciones volcánicas y terremotos. Así mismo en los últimos 6 años las tormentas y huracanes se han incrementado en número y en el grado de destrucción.

Estos factores ambientales, tanto en poblaciones urbanas como rurales, son acompañados por la degradación ambiental, erosión y salinización de suelo como presiones sobre la salud y los medios de vida, especialmente en comunidades rurales, que inciden en el panorama humanitario y de desarrollo del NCA. El Salvador, por ejemplo, sólo cuenta con una cobertura boscosa del 3 por ciento. Semejante deforestación no solo limita las capacidades inherentes del ecosistema de amortiguar impactos de las tormentas, también cambian patrones de enfermedades y aumentan el riesgo de enfermedades zoonóticas. Estas inciden en la rendición agropecuaria y a veces cruzan hacia la población humanas, al punto que el 7 por ciento de los patógenos emergentes son de naturaleza zoonótica. Si bien el incidente más ejemplar de esta dinámica a nivel mundial ha sido la pandemia de la COVID-19, el A1N1 que surgió en México en 2009 y amenazó a la región mantiene una fuerte relevancia en el NCA.

Los factores geológicos aumentan la situación de vulnerabilidad de muchas comunidades que suelen estar entre las más afectadas en emergencias

recurrentes. Muchas tienen un suelo altamente inestable por múltiples fallas tectónicas, las cuales producen hundimientos, socavones y deslizamientos de tierra tras la caída de lluvias.

El desplazamiento de las comunidades debido a los megaproyectos de infraestructura y al cambio climático también son presiones dentro del contexto ambiental. La falta estructural de salvaguardas ambientales y la falta de infraestructura adecuada expone a la población a varias fuentes de contaminación. En muchas comunidades, los vertederos a cielo abierto son el único sistema de gestión de residuos que existe y presentan un riesgo persistente de incendios para las comunidades que viven codo a codo con estos basurales. Quienes trabajan informalmente como “recicladores” no tienen el equipo adecuado. Entre la ausencia de un diseño adecuado y el limitado control del personal en el sitio, las fuentes de agua subterránea están expuestas a la contaminación por los lixiviados.

La pobre calidad del aire en la región, parcialmente asociada con los incendios forestales y tala descontrolada, las prácticas de quemas agrícolas y la capa de humo y cenizas generada por erupciones volcánicas, es otro factor preocupante. En el marco de la pandemia de COVID-19, el riesgo por enfermedades pulmonares producto de estas amenazas es aún mayor.

Las consideraciones ambientales en las crisis antes mencionadas influyen en que las mujeres y a las niñas enfrenten mayores riesgos, impactos, consecuencias y desigualdades que resultan en niveles comparativamente elevados de mortalidad y morbilidad, pobreza, inseguridad alimentaria, residencia en viviendas inadecuadas, limitaciones en

el acceso a servicios de salud y educación, y menor participación de mujeres y niñas en programas y proyectos sobre cambio climático y reducción de riesgo de desastres.

Contexto de seguridad y protección - Una violencia crónica endémica de difícil control

Con una tasa de 25,9 homicidios por cada 100.000 habitantes, el NCA tiene más muertes violentas que casi cualquier parte del mundo. Esto obedece al mayor alcance, control y accionar de grupos delictivos, cuyas acciones han hecho que algunas ciudades en estos países figuren entre las más violentas del mundo durante las últimas dos décadas¹. Estas olas de violencia son cada vez más alarmantes. En la dimensión social, esta violencia relacionada con bandas criminales llamadas maras o pandillas afecta principalmente a adolescentes y jóvenes.

Aunque durante gran parte del 2020 se mostró un declive en actividades delictivas, presumiblemente por medidas de restricción COVID-19, la información disponible al cierre del año y en el primer trimestre de 2021 revela que la criminalidad, y sus impactos diferenciados por género, ha repuntado. En Guatemala, de acuerdo con el Ministerio Público, se registraron 452 feminicidios en 2020², mientras que en Honduras se registraron 296 muertes violentas y feminicidios^{3,4}, datos que sugieren que la violencia está repuntando e incrementándose en comparación a años pasados

La pobreza, las desigualdades socioeconómicas, así como la falta de acceso a la justicia, la desigualdad de género y los altos índices de impunidad, inciden en la persistencia y la severidad de la inseguridad. La expansión de las redes de narcotráfico y la creciente influencia de los grupos criminales ha puesto en jaque la estabilidad política, económica y social

1 <http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/sala-de-prensa/1596-boletin-ranking-de-las-50-ciudades-ma-s-violentas-del-mundo-2020>

2 Ministerio Público, ver <http://observatorio.mp.gob.gt/portal-estadistico/>

3 Observatorio de Violencia. Boletín Especial No. 85. Muerte violencia de mujeres y feminicidios. Honduras.

Ver: <https://iudpas.unah.edu.hn/dmsdocument/10800-boletin-especial-muerte-violenta-de-mujeres-y-femicidios-8-marzo-2021-ed-85>

4 REDLac, Boletín No. 13, Enero de 2021, disponible en: <https://boletinesredlac.com/wp-content/uploads/2021/03/BOLETIN-REDLAC-13-FINAL-04032021.pdf>

5 HNO Centro América. OCHA. 2020.

6 https://www.hrw.org/es/report/2020/05/19/deportacion-con-escala/fracaso-de-las-medidas-de-proteccion-que-establece-el#_ftn139

de estos países. Con operaciones que abarcan el reclutamiento forzado, amenazas, extorsión, despojos, desapariciones, desplazamientos forzados, trata de personas, violaciones, tortura y asesinatos, la influencia de estos grupos ha permeado el tejido social de estos países, perjudicando la viabilidad de subregiones enteras dentro del NCA.

Estas agresiones rutinarias han expuesto a los niños, niñas y adolescentes a la violencia armada, sexual e intrafamiliar. En Honduras, un 4.5 por ciento de las víctimas de los casi 3.500 homicidios reportados en 2020 eran menores de edad, mientras que Guatemala registró más de 8.200 delitos cometidos contra la niñez, siendo la mayoría casos de maltrato o de violencia sexual. En El Salvador, la violencia y la pobreza afectan el acceso a la educación de niños, niñas y adolescentes. La deserción escolar y el cierre temporal de las escuelas por la COVID-19 o por riesgo de desastre, representan la pérdida del entorno protector, aumentando los riesgos frente a la violencia, incluido la violencia sexual.

Violencia de género

El NCA es una de las regiones más violentas del mundo para las mujeres, con cada uno de los tres países entre los cinco países con mayor tasa de feminicidios por cada 100.000 habitantes en toda América Latina⁵. La VBG en estos países es estructural y se prolifera gracias a unas normas sociales basadas en un sistema patriarcal que conduce a un ejercicio desigual de poder por género, exacerbada por la violencia y la impunidad⁶. Como condición de violencia crónica, la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes aumenta en las situaciones de crisis endémicas al NCA, y permea las distintas esferas de la sociedad como el hogar, la escuela, el trabajo y la comunidad.

Las niñas y las mujeres sufren una doble discriminación y exclusión social, una por género y otra por la conjugación del género con factores

interseccionales como a la edad, la etnicidad, las discapacidades, la orientación sexual, la situación migratoria y la condición socioeconómica, entre otros. Además, el perfil de las sobrevivientes de VBG incluye cada vez más a las defensoras de los derechos humanos y las mujeres migrantes y refugiadas, lo que evidencia una creciente violencia contra proveedoras de servicios de VBG y contra actores de la sociedad civil que fomentan el empoderamiento e igualdad de género.

La intersección entre la desigualdad de género y los altos niveles de pobreza y violencia crónica conduce a una mayor vulnerabilidad frente a la VBG, lo que erosiona las capacidades de enfrentamiento de poblaciones y las autoridades. Este cruce de factores contribuye a que, en ciertas instancias, crezca el riesgo de ser víctimas de trata con fines de explotación sexual y laboral.

Las niñas, adolescentes y personas LGBTIQ+ sufren mayor exposición a riesgos de múltiples violaciones, ya que son objeto de delitos sexuales, desaparición, violencia intrafamiliar y muertes violentas⁷. Existe una correlación estrecha entre la violencia sexual y el embarazo adolescente. Por ejemplo, en el año 2016, El Instituto de Medicina Legal determinó la existencia de embarazo en 71 niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, mientras que en 2017 esta cifra aumentó a 136. Fuente (Según UNFPA, mapa de embarazo en niñas y adolescentes 2017).

En situaciones de embarazos no deseados, la falta de acceso a una interrupción de embarazo segura y gratuita puede resultar en interrupciones clandestinas, inseguras y costosas. Sin servicios especializados, seguros y confidenciales para las personas sobrevivientes de la VBG, la tendencia a no buscar ayuda no hace más que agravar los riesgos de las sobrevivientes.

La mayoría de las sobrevivientes de violencia sexual, principalmente a mano de hombres adultos, son niñas y adolescentes⁸. La mayor parte de estas violaciones

⁷ <https://infosegura.org/la-cara-escondida/assets/VCM.pdf>

⁸ Infosegura, UNDP, USAID. 2020. La cara escondida de la inseguridad. <https://infosegura.org/la-cara-escondida/assets/VCM.pdf>

se cometen contra mujeres que están en el rango de edad fértil, lo que puede llevar a un embarazo no deseado y luego a la maternidad forzada. Este proceso forma una especie de círculo vicioso que se reproduce dentro del marco de la pobreza generalizada del NCA, que a su vez desencadena otras formas de violencia y aún más marginalidad y dependencias en las niñas y adolescentes atrapadas en estos ciclos incesantes de violencia.

Protección de Niños, Niñas y Adolescentes

La situación de violencia e inseguridad que afecta a los países del NCA continúa exponiendo a niños, niñas y adolescentes a los efectos de la violencia criminal, sexual e intrafamiliar. En Honduras, un 4.5 por ciento de las víctimas de los casi 3.500 homicidios reportados en 2020 eran menores de edad, mientras que Guatemala registró más de 9.000 delitos cometidos contra la niñez, siendo la mayoría casos de maltrato o de violencia sexual. En El Salvador, la violencia y la pobreza trastocan el acceso a la educación de niños, niñas y adolescentes. La deserción escolar y el cierre temporal de las escuelas por la COVID-19 o por riesgo de desastre, representan la pérdida del principal entorno protector, que lo aumenta los riesgos frente a la violencia, abuso y explotación, incluido la violencia sexual, y los mecanismos negativos de supervivencia.

Desigualdad de género

La desigualdad de género existente en El Salvador, Guatemala y Honduras se ha agudizado con la llegada de la pandemia de COVID-19 y las tormentas Eta e Iota que han impactado desproporcionadamente a mujeres, niñas y personas LGBTIQ+, evidenciando los riesgos,

necesidades y capacidades de género para hacer frente a las emergencias. Según la CEPAL, los efectos económicos y sociales de la pandemia profundizan la desigualdad de género existente a mediano y largo plazo, generando un retroceso de una década en los niveles de participación laboral de las mujeres especialmente en sectores altamente feminizados en la región como el comercio, las industrias manufactureras, el turismo y el trabajo doméstico. Por ejemplo, el turismo emplea un 76,2 por ciento de mujeres en Honduras y un 74,8 por ciento en El Salvador⁹.

Los Análisis Rápidos de Género realizados en Honduras¹⁰ y Guatemala¹¹ llaman la atención sobre los efectos adversos específicos provocados en mujeres en cuanto al empeoramiento de la calidad de vida y el incremento de la pobreza, el mayor desempleo, trabajo informal y trabajo de cuidados no remunerado y su desprotección social asociada, así como mayor migración y desplazamiento, junto con la pérdida de ingresos y medios de vida, incremento de limitaciones para acceder a servicios como salud, incluyendo salud sexual y reproductiva, educación, agua, saneamiento e higiene y albergues.

Contexto de la Movilidad Humana

Los países del NCA se han consolidado como países de origen, tránsito y destino de personas en situación de movilidad humana¹². La gama de vulnerabilidades que caracteriza la subregión ha llevado a más de medio millón de solicitudes de asilo y refugiados provenientes del NCA al cierre de 2020, cifra que evidencia una situación general de desprotección.

Mientras siga aumentando la violencia dirigida, la falta de seguridad y de oportunidades económicas en sus comunidades y países, muchas familias seguirán

9 CEPAL, 2021. Informe Especial COVID-19 No 9: La autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad (cepal.org)

10 ONU Mujeres y CARE. Análisis Rápido de Género en Honduras. http://care.org.hn/analisis-rapido-de-genero-arg-un-panorama-frente-a-covid_19-eta-iota/

11 ONU Mujeres y CARE. Análisis Rápido de Género en Guatemala.

12 La mitad de los más de 30 millones de migrantes internacionales procedentes de Latinoamérica y el Caribe se origina en México y los países del NCA - CEPAL Plan de Desarrollo Integral El Salvador-Guatemala-Honduras-México pág. 39.

13 Grupo Sociedad Civil, Mesa Mujeres Migrantes y Desplazadas y ACNUR, 2021. ¿El desplazamiento forzado otro ejemplo de la feminización de la violencia en Honduras? Investigación sobre violencia sexual y feminicidios como causas del desplazamiento forzado.

https://gruposociedadcivilhn.org/wp-content/uploads/2020/12/Manual_VBG_DF-2.pdf

abandonando sus hogares. En Honduras, la violencia contra las mujeres, particularmente la violencia sexual y el feminicidio, son causas identificadas del desplazamiento forzado de mujeres y niñas, en especial para jefas de hogar y defensoras de derechos humanos sujetas a mayores riesgos de violencia política. Así mismo, las personas LGBTIQ+ enfrentan riesgos por discriminación, conflictos familiares y comunitarios por su orientación sexual e identidad de género¹³.

Las 623.600 personas del NCA detenidas cruzando la frontera EE.UU.-México en 2019 fueron más del doble del total de 2018 y la cifra más alta de una década. Si bien las restricciones de movimiento por la pandemia COVID-19 de 2020 redujeron los movimientos mixtos desde y a través del NCA hacia México y la frontera sur de los Estados Unidos, las cifras totales de 2021 hasta mayo superan todo el 2018. Las autoridades de frontera de los EE.UU., incluso ha reportado cifras récord mensuales en varios meses consecutivos en lo que va de 2021, hecho corroborado por el creciente número de encuentros con personas migrantes reportadas por las autoridades migratorias mexicanas. Este aumento vertiginoso implica un aumento similar en vulnerabilidades a atender en las personas migrantes y refugiadas, incluyendo el riesgo de retornos no voluntarios a países de origen.

Actualmente, la presencia de mayores controles y fuerzas de seguridad en las fronteras y la falta de información están impulsando cada vez más el uso de

rutas irregulares que no permiten una identificación y seguimiento regular como base para atender necesidades. Este uso de cruces clandestinos además aumenta los riesgos de protección por la exposición al crimen organizado y sus redes de trata de personas y tráfico ilícito, así como mayor VBG.

Cabe enfatizar el perfil cambiante de personas migrantes y refugiadas, que cada vez más incluye familias, niñas, niños y adolescentes viajando solos. Más de 12.000 niños y niñas (acompañados o no) del NCA fueron retornados a sus países desde EE.UU. y México durante 2020. Por su condición de no acompañados/as, este grupo enfrenta un riesgo extremo de violencia sexual, trata de personas y reclutamiento por grupos delictivos que operan en las rutas migratorias.



DEPARTAMENTO DE CORTÉS, HONDURAS

Un centenar de personas se preparan para iniciar el viaje de 3.000 kilómetros a pie a través de Guatemala y México hasta llegar a Estados Unidos.

Foto: PMA Honduras/Julian Frank

1.2 Choques y sus impactos

Enfermedades infecciosas con potencial epidémico y la pandemia de COVID-19

Los tres países del NCA sufrieron brotes históricos de dengue en 2019 que causaron impactos comparativamente más generalizados y letales que en los años previos tras aumentos en casos de 70 por ciento en El Salvador, 86 por ciento en Guatemala y 92 por ciento en Honduras relativo al 2018. El brote en Honduras, en particular, fue el peor en el país en más de 50 años. Estas alzas inéditas lógicamente derivaron incrementos en los saldos mortales, con Honduras registrando un balance de fallecidos 59 veces más alto que lo registrado en 2018. Estos aumentos fueron

de 75 por ciento en El Salvador y 200 por ciento en Guatemala.

Los primeros casos de COVID-19 en el NCA surgieron en marzo de 2020, el mismo mes en que la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió su declaración de pandemia global. Los tres gobiernos inmediatamente implementaron medidas como las restricciones de movilidad y el cierre de fronteras y aeropuertos para contener la propagación del virus SARS-CoV-2 y evitar el colapso de los sistemas de salud.

Pese a estas medidas, los tres países pronto enfrentaron transmisiones comunitarias confirmadas del virus, lo que ha resultado que, al 24 de junio de 2021, el NCA reúna casi 618.000 casos confirmados entre los 77.844 en El Salvador, 255.683 en Guatemala y 284.741 en Honduras. Estas cifras representan una tasa subregional de 18.011 casos por cada 1 millón de habitantes y tasas de 11.946 en El Salvador, 15.893 en Guatemala y 25.813 en Honduras. Tanto en El Salvador como en Honduras, las mujeres representan poco más de la mitad de los casos acumulados, mientras que, en Guatemala, las mujeres representan el 46 por ciento.

La pandemia COVID-19 ha cobrado más de 18.000 vidas en los tres países entre las 2.356 muertes confirmadas en El Salvador (361 por cada 1 millón de habitantes), 8.894 en Guatemala (488 por cada 1 millón de habitantes) y 6.879 en Honduras (684 por cada 1 millón de habitantes), lo que arroja una tasa colectiva de 528 muertes por cada 1 millón de habitantes. Los saldos nacionales de Guatemala y Honduras ocupan el 1er y 2do lugar, respectivamente, entre los países de Centroamérica y del Caribe.

Desde el inicio de las campañas nacionales de vacunación a finales de febrero 2021, el NCA ha administrado más de 4 millones de dosis de vacunas COVID-19 hasta el 24 de junio, alcanzando a 2,8 millones de personas con al menos una dosis - apenas 8,3 por ciento de la población del NCA. De esta población, 1,2 millones ya están completamente inmunizadas con ambas dosis, es decir, 3,8 por ciento de la población colectiva y 45,2 por ciento de la población alcanzada con vacunas siendo El Salvador el que representa el grueso de estas cifras con más de 2,5 millones de dosis administradas entre 1,5 millones de personas, mientras que Guatemala ha vacunado a unas 700.000 y Honduras unas 600.000.

Tormentas Tropicales y Huracanes

Las 30 tormentas nombradas durante el año ubicaron la temporada de huracanes del Atlántico del 2020 como la más activa jamás registrada, con sus 7 huracanes de categoría mayor igualando el récord establecido por la temporada del 2005. La temporada fue caracterizada por múltiples hitos relacionados a

la ocurrencia o fuerza de las tormentas relativo a las cronologías de temporadas anteriores. En efecto, 27 de las 30 tormentas de 2020 establecieron récords por ser las más tempranas jamás formadas relativo a su orden secuencial establecido por sus contrapartes ordinales en años anteriores.

La intensidad y fuerza atípica de la temporada, muestras del impacto real y por venir del cambio climático, dejaron secuelas demoledoras en cada uno de los países del NCA, secuelas que seguirán incidiendo en el rumbo de las consideraciones humanitarias por meses y años. En mayo 2020, El Salvador y Guatemala hicieron frente a la tormenta tropical Amanda, fenómeno nacido de los remanentes de una tormenta del Pacífico y que afectó a más de medio millón de personas entre ambos países. Por la severidad de sus impactos en El Salvador, Amanda es considerada la tormenta más devastadora en este país desde el huracán Mitch en 1998.

Posterior a sus formaciones históricas que marcaron la primera vez que dos huracanes de categoría 3 o mayor se formaran en la cuenca del Atlántico en un noviembre, los huracanes Eta e Iota tocaron tierra como tormentas de categoría 4 en las costas nororientales de Nicaragua con menos de dos semanas de diferencia, ambas siguiendo una trayectoria prácticamente idéntica por encima del norte de Honduras y partes de Guatemala. Con vientos de hasta 240 km/h y lluvias de hasta 600 mm, estas tormentas dejaron al menos 5,3 millones de personas en necesidad de ayuda humanitaria tras provocar una destrucción generalizada que sigue exacerbando las vulnerabilidades endémicas en estos países.

Impacto en las personas COVID-19

Aparte de los efectos directos de la COVID-19 en la salud, los confinamientos, toques de queda, cierres de frontera y/o limitaciones de aforo en operaciones comerciales y espacios públicos implementados por los gobiernos como medidas de prevención de contagio desencadenaron una gama de impactos socioeconómicos que siguen exacerbando las

vulnerabilidades características del NCA antes de la pandemia y afectando desproporcionadamente a poblaciones más vulnerables como las mujeres, niñas, niños y personas LGBTIQ+, poblaciones indígenas, entre otros grupos.

Entre estos impactos están tasas aumentadas de desempleo y las consiguientes reducciones o pérdidas de ingresos¹⁴, lo cual ha tenido un efecto más pronunciado en los más pobres y vulnerables. Concretamente, la región centroamericana sufrió la pérdida de 33,5 por ciento en horas laborables hasta septiembre 2020, según la Organización Internacional del Trabajo¹⁵.

Si bien las remesas hacia los tres países están alcanzando cifras récord en el 2021, la caída marcada de esta importante fuente de ingresos en 2020 por cuenta del desplome global en salarios y empleo¹⁶ redujo los medios de vida. Entre los más afectados por esta reducción generalizada están las familias monoparentales a cargo de mujeres¹⁷, para quienes las remesas pueden llegar a ser el único medio de vida. Las familias agricultoras, trabajadores informales y jornaleros agrícolas, especialmente los del Corredor Seco¹⁸, también han sufrido fuertes repercusiones económicas por la pandemia. Los hogares agrícolas han tenido dificultades para acceder a insumos, mermando su capacidad productiva para el autoconsumo y comercio y elevando su inseguridad alimentaria.

En general, los impactos socioeconómicos han sido desproporcionados en hogares con mujeres jefas de hogar, niños, niñas y adolescentes, según indican

los Análisis Rápidos de Género en Honduras¹⁹ y Guatemala²⁰. Esta discordancia es ejemplificada por las miles de mujeres que abandonaron el mercado laboral formal e informal, en contraste con el aumento del trabajo de cuidados no remunerado que en Guatemala pasó de 7.5 a 11.2 horas diarias en mujeres, aumento que para los hombres corresponde a pasar de 3 a 4.5 horas diarias en promedio. Las desigualdades por género en la participación laboral se han manifestado pese a las medidas de protección social implementada por los países²¹.

Los impactos socioeconómicos limitan aún más las opciones para personas desplazadas tanto como las capacidades de las autoridades nacionales de atender estas necesidades, lo que continuará impulsando la adopción de mecanismos negativos de supervivencia.

Temporada de Huracanes

La temporada de huracanes creó necesidades específicas para las comunidades afectadas a lo largo del NCA. Honduras y Guatemala contabilizan unos 7,3 millones de personas afectadas, entre ellas 3,5 millones de niños según UNICEF, alrededor de 140.000 viviendas afectadas o destruidas y, en la primera semana de diciembre 2020, unas 404.000 personas en albergues. Como muestra del impacto diferenciado en las mujeres, el 73 por ciento de las mujeres entrevistadas en Honduras por el Análisis Rápido de Género manifestaron que su vivienda sufrió un daño moderado o severo en Honduras, mientras que en Guatemala el 81 por ciento indicó daños de diferente magnitud en sus viviendas.

14 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20200616_HNO_CENTROAMERICA%20ADDENDUM.pdf

15 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_755917.pdf

16 El Banco Mundial prevé la mayor caída de remesas de la historia reciente. Banco Mundial, 22 de abril de 2020.

17 Según the Global Knowledge Partnership on Migration and Development (KNOMAD), en 2019 las remesas representan el 21% de PIB en El Salvador, el 13.1% en Guatemala, y el 22% en Honduras: <https://www.knomad.org/data/remittances>

18 El Corredor Seco Centroamericano es una zona de bosque tropical seco en la vertiente pacífica de Centroamérica que va desde la costa pacífica de Chiapas (México) hasta el oeste de Costa Rica y provincias occidentales de Panamá, pero donde los países más vulnerables y expuestos a los eventos climáticos son Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. <https://boletinesredlac.com/wp-content/uploads/2021/03/BOLETIN-REDLAC-13-FINAL-04032021.pdf>

19 ONU Mujeres y CARE. Análisis Rápido de Género en Honduras. http://care.org/hn/analisis-rapido-de-genero-arg-un-panorama-frente-a-covid_19-eta-iota/

20 ONU Mujeres y CARE. Análisis Rápido de Género en Guatemala.

21 <https://www.cepal.org/es/comunicados/pandemia-provoca-aumento-niveles-pobreza-sin-precedentes-ultimas-decadas-impacta>

En los albergues donde se ha hospedado la población afectada por las tormentas, se reportaron múltiples casos de violencia sexual, agresiones físicas y psicológicas y situaciones de explotación sexual, especialmente a niñas y adolescentes. A la par de esto, las mujeres y las adolescentes interrumpieron sus métodos de anticoncepción, por lo que el número de embarazos no deseados también aumentó junto con las consecuencias en la salud física y mental de las mujeres. La falta comparativa de acceso a la información, igual de reducida para mujeres y niñas, además llevó a que los Análisis de género identificasen que, de cada 5 mujeres entrevistadas en Guatemala, 4 tenían o poca o nada de información durante o después del impacto de Eta e Iota. Para Honduras, esta proporción pasa a 6 de cada 10 entrevistadas.

En Guatemala, al menos el 25 por ciento de la niñez de los 7 municipios más afectados por Eta e Iota continúa requiriendo seguimiento psicosocial. Los diversos estresores provocados directa o indirectamente por la pandemia han afectado la salud mental de las personas, especialmente la de la comunidad de profesionales de salud que han asumido mayor riesgo de contagio.

Impactos en Seguridad Alimentaria

Tanto Eta como Iota dañaron o destruyeron cultivos y cosechas que forman parte crítica de los medios de vida para muchas familias que ya se enfrentaban a dificultades económicas como resultado de la pandemia COVID-19. Guatemala perdió más de 119.000 hectáreas de cultivos, afectando los medios de vida y seguridad alimentaria de 267.000 familias, mientras que Honduras, país donde ya un 18 por ciento de la población se enfrentaba a la inseguridad alimentaria, sufrió la pérdida de 318.000 hectáreas²². A pesar de registrar daños comparativamente menores

por Eta e Iota, El Salvador igual sufrió daños extensos por la tormenta tropical Amanda que dejaron a unas 336.300 personas en inseguridad alimentaria²³.

Estos efectos profundizaron las vulnerabilidades ya provocadas o agravadas por las secuelas socioeconómicas pandemia COVID-19, que a su vez ya estaban produciendo efectos desafíos relacionados a la producción, los medios de vida y el acceso a alimentos. Entre estas poblaciones afectadas están aquellas en zonas en el Corredor Seco ya azotadas por años las sequías intensas de 2014-2015 y 2018. Utilizando las clasificaciones CIF como medida de inseguridad alimentaria, el porcentaje de hogares en Honduras con brechas en acceso a alimentos ya ha aumentado al 21 por ciento comparado con el 8 por ciento registrado antes de la pandemia COVID-19. En Guatemala, los reportes CIF más recientes indican unos 3,3 millones de personas en Fase 3 (Crisis) de la CIF y unas 174.000 en Fase 4 (Emergencia Humanitaria), lo que indica que 1 de cada 5 personas en Guatemala tiene brechas críticas en su acceso a alimentos que persistirán por los siguientes meses²⁴.

Las pérdidas agrícolas y económicas han perjudicado desproporcionadamente a las mujeres, en particular por los impactos de las pérdidas totales y o parciales en mujeres rurales productoras y la reducción consiguiente de ingresos, de accesos a servicios financieros y de autonomía física y socioeconómica²⁵, tanto por la profundización de la crisis de cuidados como trabajo no remunerado²⁶. Efectivamente, los Análisis Rápidos de Género en Honduras y Guatemala muestran que el 50 por ciento en Guatemala y el 47 por ciento en Honduras de las mujeres participantes no tenían alimentos asegurados porque perdieron sus granos y cosechas, o no tienen dinero, lo que evidencia las brechas por género en seguridad alimentaria.

²² <https://reliefweb.int/report/world/year-review-2020-regional-office-latin-america-and-caribbean>

²³ <https://reliefweb.int/report/el-salvador/el-salvador-tormenta-tropical-amandacrist-bal-covid-19-informe-de-situacion-no14>

²⁴ https://www.sica.int/documentos/informe-del-analisis-de-inseguridad-alimentaria-aguda-de-la-cif-guatemala-mayo-2021-enero-2022_1_127519.html

²⁵ <http://care.org.gt/index.php/noticias/noticias/99-eta-e-iota-profundizaron-la-violencia-y-desigualdad-de-las-mujeres>

²⁶ https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/45602/S2000313_es.pdf

Impactos en medios de vida

Estos deterioros de condiciones van de la mano con las repercusiones socioeconómicas que han incidido sobre las cifras de pobreza, pobreza extrema y desigualdad que marcó el cierre del 2020. La pérdida de ingresos y la reducción del poder adquisitivo, el acceso restringido a los mercados y el aumento de los precios de los alimentos y costos de su transporte ha reducido la disponibilidad y acceso a los alimentos de calidad en la región, tanto en las zonas rurales como urbanas²⁷. Por consecuencia, la calidad y cantidad de las dietas ha cambiado o incluso reducido, déficits que han impulsado protestas sociales²⁸.

Paralelamente, El Salvador sumó a su población en condiciones de pobreza por un 7,6 por ciento, Guatemala un 1,1 por ciento y Honduras un 6,3 por ciento, resultando en nuevas tasas donde 4,5 y 6 de cada 10 personas en El Salvador, Guatemala y Honduras.

Los impactos diferenciados que han tenido la pandemia COVID-19 y la temporada de huracanes también se pueden definir por divisiones entre contextos urbanos y rurales. Las medidas de restricción han coartado de manera significativa el acceso a fuentes de trabajo y alimentos para la población urbana en pobreza, lo que los expone al peligro de desalojo y crea riesgos de protección. Estos riesgos son especialmente relevantes para mujeres trabajadoras domésticas, jefes y jefas de familias monoparentales y personas migrantes, entre otras.

Impactos en poblaciones vulnerables

Las medidas de restricción han perjudicado la protección en el NCA, provocando un aumento del número de casos de VBG, especialmente violencia íntima de pareja y violencia sexual contra mujeres. En Honduras, desde principios de 2020 y abril de 2021 el Sistema Nacional de Emergencias 911 contabilizó 151.264 llamadas asociadas a violencia

de pareja íntima, un incremento del 49 por ciento respecto al 2018.

Pese a que los confinamientos generalizados por la pandemia COVID-19 llevaron a declive en las operaciones de grupos delictivos en los tres países en 2020, la criminalidad ya ha vuelto a repuntar. Las operaciones criminales siguen buscando fortalecer su control territorial, recurriendo otra vez a la extorsión, el narcotráfico, la VBG y violencia sexual, las desapariciones forzadas, los asesinatos y las amenazas de muerte²⁹.

Los confinamientos influyeron sobre el bienestar educativo de millones de niños, niñas y adolescentes en el NCA³⁰, muchos de los cuales también beneficiaban de su participación en el sistema escolar y sus diferentes servicios como un importante elemento de protección. Según UNICEF, los cierres de escuela el NCA afectaron a más de 7 millones de niños y niñas, privándolos de su educación, socializar con sus pares y los programas de alimentación escolar. Estas privaciones, en cambio, elevaron los riesgos y temores de separaciones familiares, violencia intrafamiliar, falta de apoyo familiar, cargas de trabajo y/o embarazos tempranos, factores que típicamente conducen a la deserción familiar. El número de embarazos en adolescentes se ha exacerbado a la ya elevada proporción de embarazos en adolescentes en los 3 países prepandemia (cerca del 30 por ciento).

Según el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC), las consecuencias de Eta e Iota impulsaron gran parte de los 1,2 millones de personas desplazadas por los efectos de un fenómeno de origen natural en Honduras (937.000 desplazamientos nuevos) y Guatemala (339.000)³¹. Estas cifras sin precedentes que ubicaron a estos países como dos de los cuatro países en América Latina y Caribe con más nuevos desplazamientos por desastres en 2020.

27 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2021_06_03%20El%20Salvador%20Guatemala%20and%20Honduras%20Regional%20Response%20Fact%20Sheet%20%234.pdf

28 Addendum COVID-19.

29 Necesidades y Prioridades Humanitarias NCA, noviembre 2020.

30 <https://es.unesco.org/covid19/educationresponse>



SOLOLÁ, GUATEMALA

Foto: Acción contra el Hambre Guatemala/ Lys Arango

Incluso, los desplazamientos nuevos en Honduras superan las sumas de desplazamientos nuevos por desastre y por conflicto de países como Sudán del Sur, Indonesia, Mozambique, Sudan, Afganistán y Yemen.

Impacto en los sistemas y servicios

Las diversas crisis en el NCA antes, durante y después de los eventos de 2020 siguen reduciendo la disponibilidad, calidad y accesibilidad de los sistemas y servicios básicos. La reducción de actividades comerciales y productivas disminuyó la recaudación tributaria, que de por sí ya es baja en los tres países. Por lo tanto, la reducción de las inversiones públicas en los programas de carácter social llevó a una reducción de capacidades en las mismas, debilitando redes de protección social o llevando a la discontinuación de programas puestos en marcha para mitigar los efectos socioeconómicos de la pandemia. A la larga, esta cadena de declives

en el financiamiento, calidad y duración de programas sociales ha dificultado la recuperación general para los tres países

Algunos de los servicios más trastocados incluyen los sistemas de salud, quienes fueron encomendados para formar la primera línea de respuesta sanitaria antes la pandemia COVID-19 justo después de haber enfrentado la antedicha epidemia dengue en 2019, los sistemas de protección de la niñez y servicios especializados para niños, niñas y adolescentes y familias con necesidades de protección especializadas, entre otros.

Servicios de Salud

La continuidad de servicios de salud de primer nivel de atención, incluyendo salud sexual y reproductiva (SSR) y cuidados obstétricos y neonatales de emergencia, especialmente en zonas periurbanas y rurales, fue

³¹ <https://www.internal-displacement.org/global-report/grid2021/>

perjudicada por factores como restricciones de movilidad, carencias existentes de equipos de salud, mayor exposición a la COVID-19 y, por consecuencia, más infecciones y el cierre de instalaciones de atención primaria. Según encuestas sobre los servicios de salud para febrero-marzo 2021, las principales limitaciones que enfrenta el primer nivel de atención incluyen brechas de recursos humanos y la falta de incentivos, escasez de medicamentos, suministros, equipo de protección personal (EPP), logística para investigar casos, rastrear contactos y realizar pruebas, triaje, atención domiciliaria, administración de centros de llamadas y consultas por remoto. Eta e Iota luego dejaron a más 630 centros de salud en el NCA con daños a infraestructura, reduciendo aún más las capacidades de los sistemas.

La sobrecarga por la pandemia, en particular, provocó una reducción de pruebas para detectar y controlar enfermedades endémicas como el dengue, entre otras. La centralización a nivel nacional del procesamiento de pruebas para algunas patologías, incluso las del virus SARS-CoV-2, ha ralentizado los diagnósticos y tratamientos. Las exigencias de la pandemia COVID-19 ha además redirigido varios recursos, de por sí limitados, para responder a otras enfermedades infecciosas endémicas a la región. La priorización de la COVID-19 también ha causado retrasos en las cadenas de suministros de medicamentos e insumos sanitarios e interrumpido servicios de inmunizaciones, de salud materna e infantil, de salud sexual y reproductiva, de salud mental y apoyo psicosocial y la gestión clínica de violaciones.

El 51.7 por ciento de las mujeres en Honduras y el 30 por ciento en Guatemala indicaron que deben recorrer unos 30 minutos para ir a un servicio de salud. En términos de salud sexual y reproductiva, un 56 por ciento de mujeres en Guatemala y un 58 por ciento en Honduras indicaron que no tienen acceso a estos servicios y un mismo porcentaje tampoco tiene acceso a servicios de higiene en este último país. Su acceso a servicios de salud mental es menor, con un 94 por

ciento de mujeres en Honduras y un 84 por ciento en Guatemala que señalaron que no tienen acceso a estos servicios.

Servicios de Agua, Saneamiento e Higiene

Eta e Iota dejaron una fuerte caída en el acceso a servicios seguros de agua, saneamiento e higiene (WASH, por sus siglas en inglés) que ha puesto a prueba las capacidades limitadas de los proveedores en restaurarlas. Al inicio de la emergencia, las familias en albergues quedaron sin acceso a servicios adecuados de WASH, aumentando el ya alto riesgo antes la COVID-19 y brotes de enfermedades transmitidas por agua. Esta vulnerabilidad es desproporcionadamente más alta en niños y niñas menores de cinco años.

El acceso limitado provocado por la pandemia y luego la temporada de huracanes ha sido especialmente pronunciado para las mujeres, niñas y niños. Los Análisis Rápidos de Género en Honduras y Guatemala muestran que tan sólo el 35 por ciento en Honduras y el 31 por ciento en Guatemala tienen acceso a agua potable permanentemente.

Servicios de Educación

El sistema educativo ha sufrido efectos serios durante las crisis acentuadas por la pandemia COVID-19 y la temporada de huracanes. A medida que la COVID-19 se expandió en el NCA, se empezaron a cerrar los centros educativos de todos los niveles. Según la UNESCO, los cierres parciales o completos de las escuelas en cada uno de los tres países excedieron las 54 semanas, es decir, un periodo superior a un año entero³². Bajo clasificaciones de UNICEF, el sistema escolar en Honduras sigue bajo cierre total, mientras que los sistemas en El Salvador y Guatemala siguen bajo cierre parcial. Pese a las reaperturas paulatinas y modalidades híbridas entre la educación presencial y a distancia en estos dos últimos países, cabe destacar que apenas hay información disponible sobre la calidad de estos modelos de aprendizaje, así como su

³² <https://en.unesco.org/covid19/educationresponse#schoolclosures>

impacto en el aprendizaje y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes de estos países³³.

La habilitación de centros escolares como albergues para personas afectadas por Eta e Iota fue una medida común en Honduras y Guatemala, especialmente en zonas de mayor impacto. Además de limitar el acceso a la educación y poner en peligro el derecho a la educación, el uso prolongado de las escuelas como espacio de acogida ha provocado un deterioro marcado en estas instalaciones.

Si bien la pandemia COVID-19 obligó a que los Ministerios de Educación aceleraran iniciativas de educación a distancia por medio de Internet, televisión, radio, servicios de mensajería instantánea como WhatsApp, muchas zonas rurales o remotas del NCA no cuentan con condiciones adecuadas de suministro eléctrico y/o servicios de internet³⁴, lo que ha incurrido gastos elevados en data por telefonía celular. Esta falta de acceso, junto con faltas de equipos y materiales adecuados han llevado un abandono escolar generalizado. Las estimaciones en Honduras indican que casi el 55 por ciento de estudiantes matriculados no pudieron continuar sus estudios por estas carencias de acceso a las alternativas remotas. Si se contemplan las 3.493.181 personas en edad escolar proyectadas para 2021 por el Instituto Nacional de Estadística (INE) frente a las 1.806.486 matrículas que registra la Secretaría de Educación para el mismo año, la cifra de exclusión supera el millón y medio de niños, niñas y adolescentes, o casi la mitad de la población escolar.

Impacto en el Acceso Humanitario

Las restricciones a la circulación y los confinamientos implementados por la COVID-19 han limitado la capacidad de actores humanitarios para atender

necesidades. Tanto las actividades humanitarias como las de desarrollo fueron menguadas por estos limitantes, llevando a numerosos retrasos en la ejecución de estas. Sumado a esto, las operaciones humanitarias en zonas afectadas por Eta e Iota tuvieron que abordar el triple reto de mantener las condiciones sanitarias del personal desplegado, mantener coordinaciones virtuales a todos los niveles que mantuvieran el mismo calibre que las coordinaciones presenciales tradicionales y fortalecer la asistencia humanitaria frente a limitaciones logísticas y de personal de respuesta sujetos a las amenazas presentada por la pandemia³⁵.

Aun considerando que las operaciones humanitarias emprendieron un esfuerzo colectivo para superar estos retos, los daños extensos a la infraestructura de transporte, redes viales y puertos de transporte aéreo y marítimo redujo el acceso requerido para realizar todas las evacuaciones necesarias y prestar ayuda crítica³⁶. El control territorial ejercido por grupos delictivos en áreas afectadas les prestó otra capa de complejidad a las ya limitadas condiciones de acceso y al entorno de seguridad para las personas afectadas y el personal humanitario. En zonas donde estos grupos criminales han avanzado su alcance y control, las restricciones de movilidad por intimidación y amenazas han afectado el acceso a bienes y servicios básicos y humanitarios.

Crisis de Movilidad Humana y Desplazamiento

En el contexto de los países del NCA no podemos dejar de evidenciar el impacto y los desafíos humanitarios que plantea la situación de movilidad humana y desplazamiento que está sufriendo la región y que impacta de modo particular en el arribo de refugiados y migrantes a las fronteras de México y los Estados Unidos.

33 Update 24 de Educación UNICEF. www.unicef.org/lac/media/22981/file

34 <https://elpais.com/planeta-futuro/2021-03-25/el-coronavirus-en-latinoamerica-y-el-caribe-un-ano-sin-pisar-mi-escuela.html>

35 Emergency response in a pandemic. <https://www.facebook.com/1217371704958388/videos/1154534181659591>

36 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2020-12-23_6W_After_%28SPA%29.pdf

El carácter multicausal del desplazamiento asociado a la violencia e inseguridad crónica, pobreza, violencia contra las mujeres y desigualdad, los efectos adversos de los desastres socio-naturales y del cambio climático, así como las limitaciones de la institucionalidad para ofrecer una respuesta a sus necesidades y protección sitúan a las personas de los países del NCA en situaciones de desprotección que favorecen el desplazamiento interno o hacia terceros países en busca de protección y mejores oportunidades.

De acuerdo con estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), aproximadamente más de la mitad de los de 30 millones de migrantes internacionales procedentes de América Latina y el Caribe provienen de México y los países del NCA. El principal destino de este flujo migratorio es los Estados Unidos, lo que da origen a uno de los principales corredores migratorios a nivel mundial³⁷.

Dado el deterioro de las oportunidades y la violencia en los países del NCA, hay cada vez más personas dispuestas a desplazarse dentro de sus países o arriesgarse en movimientos principalmente hacia la frontera Sur de los Estados Unidos³⁸.

En los últimos diez años, los desplazamientos forzados desde El Salvador, Guatemala y Honduras se han multiplicado casi por 50, y aumentaron de 18.400 personas al final del 2011 a unas 867.800 al final del 2020³⁹. A finales de 2020, las autoridades reconocían unos 247.000 desplazados internos en Honduras (51 por ciento mujeres) y al menos 71.500 en El Salvador⁴⁰. En Guatemala se estima que unas 242.000 personas

se encuentran desplazadas internamente. En los tres países, las personas se desplazan generalmente a territorios con igual o mayor inseguridad y el desplazamiento interno es la antesala a la movilidad transfronteriza.

Los países del NCA continúan estando entre los principales países de origen de solicitantes de asilo y refugiados en la región. A finales de 2020, se registraban 549.251 personas provenientes de El Salvador, Guatemala y Honduras que habían abandonado sus países de origen escapando de violencia y persecución. En 2020 a pesar del impacto de las restricciones por la pandemia, 131.221 nuevas solicitudes de protección como refugiado fueron presentadas por nacionales de El Salvador, Guatemala y Honduras⁴¹. A nivel global, el 12 por ciento de todas las nuevas solicitudes de asilo presentadas en 2020 provenía de personas ciudadanas de estos tres países⁴².

El número de personas que arriban a países del NCA buscando protección como personas refugiadas se ha incrementado en los últimos años. A finales de 2020, más de 1.500 personas solicitantes de asilo y refugio estaban acogidos en países de la subregión, principalmente en Guatemala, lo que supone un aumento del 17 por ciento respecto al año anterior. Las dinámicas registradas en la región durante los últimos años permiten estimar que aproximadamente 5.000 personas podrían buscar protección internacional en estos tres países hasta finales de 2022.

El tránsito de personas desde y a través de los países del NCA se ha visto intensificado a medida que se remueven o relajan las medidas de restricción de la

37 CEPAL Plan de Desarrollo Integral El Salvador-Guatemala-Honduras-México pág. 39

38 ACNUR - Unicef, Familias que huyen, 2020, disponible en: <https://familiesontherun.org/es/>

39 Es probable que la cantidad real de personas desplazadas por la fuerza supere el millón, si se considera a quienes han abandonado su país, pero que aún no han presentado solicitudes de asilo.

40 La crisis de desplazamiento interno en Centroamérica se ve agravada por la COVID-19.

<http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20North%20of%20Central%20America%20Update%20-%202013DEC19.pdf>

41 ACNUR, Refugee Data Finder, disponible en: <https://www.unhcr.org/refugee-statistics/>

42 ACNUR, Tendencias Globales. Desplazamiento Forzado en 2020, junio de 2021, disponible en: <https://www.acnur.org/60cbddfd4>

movilidad humana por la pandemia. En 2020, más de 117.000 personas con necesidades de protección que tomaron parte en movimientos mixtos desde el NCA recibieron asistencia en estos tres países, sobre todo personas hondureñas en Guatemala. Otras 48.000 personas dentro de los movimientos mixtos con necesidades de protección procedentes de estos tres países se acogieron en México al final del año⁴³. La movilidad desde y a través de los países del NCA ha adoptado nuevas formas de viaje en grupos o 'caravanas', debido a los altos costos y riesgos relacionados con la movilidad humana a través de las fronteras. Desde enero de 2019, aproximadamente 60.000 personas integrantes de estos grupos han salido de Honduras, El Salvador o Guatemala hacia Estados Unidos. En enero de 2021, se registró una primera caravana que alcanzó a reunir a más de 7.500 personas provenientes principalmente de Honduras y El Salvador⁴⁴. Convocatorias posteriores no han congregado un número muy significativo de personas, debido al incremento en los controles, especialmente migratorios y de seguridad, que han puesto los países para impedir el ingreso de más migrantes⁴⁵.

El aumento de las llegadas irregulares a Estados Unidos ha provocado un aumento de retornos involuntarios de personas en situación de movilidad, la autoridad de frontera de los Estados Unidos reporta más de 500.000 aprensiones en la frontera Sur de los Estados Unidos entre los meses de octubre de 2020 y mayo de 2021 de personas provenientes de países del Norte de Centroamérica, incluyendo a casi 60.000 niños, niñas y adolescentes no acompañados provenientes de países del NCA⁴⁶. Igualmente, y a pesar de las restricciones de movilidad y cierre de fronteras, 93.147 personas fueron retornadas a países del Norte de Centroamérica entre enero y diciembre de 2020. i. Los retornos involuntarios y deportaciones

se mantuvieron durante 2020 a pesar del llamamiento realizado por la Red de Migración de las Naciones Unidas a que los estados suspendan los retornos forzados de migrantes⁴⁷. Las personas retornadas vuelven a sus lugares de origen en busca del apoyo de sus familias y de trabajo. Sin embargo, los municipios en donde las vulnerabilidades se ven agravadas por inseguridad y conflictividad social, coinciden con los municipios que presentan mayor cantidad de personas retornadas.

En 2020 y 2021, más de 15.000 niños y niñas han sido retornados desde los Estados Unidos y México a países del NCA a pesar de que sus comunidades de origen presentan graves riesgos para su protección, agravados por impacto de la pandemia de COVID-19.

Impacto en las personas y servicios

El desplazamiento forzado tiene un fuerte impacto en el bienestar físico, mental y en la protección de las personas desplazadas sufriendo además obstáculos al ejercicio de derechos y acceso a bienes y servicios básicos (salud, educación, alimento, vivienda, entre otros). También afecta negativamente las posibilidades de conseguir un empleo digno o acceder a medios de vida, situación que puede derivar en riesgos de protección. La pandemia ha limitado aún más las opciones de empleo para las personas desplazadas, especialmente de mujeres y niñas, agravando su exposición a involucrarse en denominados mecanismos negativos o riesgos de supervivencia. Una vez que huyen de su comunidad, las personas dejan atrás sus propiedades, pertenencias, trayectorias educativas y oportunidades de empleo. Además, el desplazamiento da como resultado la pérdida de las redes de apoyo familiares, sociales y comunitarias, al tiempo que genera nuevos

43 Debido a la volatilidad de la situación en la región, las cifras reales podrían ser considerablemente superiores.

44 OIM, NTMI | Caravana Enero 2021.

45 <https://reliefweb.int/report/honduras/honduras-movimiento-masivo-de-poblacion-en-el-norte-de-centro-am-rica-flash-update>

46 <https://www.cbp.gov/newsroom/stats/southwest-land-border-encounters>

47 <https://migrationnetwork.un.org/sites/default/files/spanish.pdf>

retos relacionados con el establecimiento de la familia en un nuevo lugar.

La debilidad de los mecanismos institucionales para prevenir y responder al desplazamiento interno continúa representando un reto en la atención, protección y búsqueda de soluciones para la población desplazada. La crisis de desplazamiento afecta las comunidades de acogida, limitando las posibilidades de apoyo. Las comunidades receptoras, muchas de estas ven incrementadas sus necesidades por la llegada de población en condiciones de vulnerabilidad y no tienen la capacidad para cubrir sus necesidades. Adicionalmente, se evidencia que los municipios receptores coinciden con aquellos con menor desarrollo económico y social.

A nivel comunitario, la falta de presencia estatal y el control social y territorial de las pandillas obstaculizan el acceso de las personas desplazadas internas al ejercicio de sus derechos. Un aumento en la llegada de personas solicitantes de asilo y refugiadas que buscan protección en El Salvador, Guatemala y Honduras

podría afectar el funcionamiento de los sistemas de asilo y atención, ocasionando limitaciones en el acceso al asilo y documentación y obstáculos para el ejercicio de derechos y acceso a asistencia. En líneas con las prioridades establecidas en el marco del MIRPS, cobran un rol fundamental los esfuerzos coordinados dirigidos a fortalecer los sistemas de determinación de la condición de refugiado, así como los mecanismos de admisión, recepción y asistencia a personas solicitantes y refugiadas.



LAS PACAYAS, GUATEMALA

Daños en Las Pacayas, Alta Verapaz, tras el paso del huracán Eta.

Foto: PMA Guatemala/Alejandro Arriola

1.3

Condiciones Humanitarias y Severidad de las Necesidades

Perfiles de población en condiciones de vulnerabilidad

En el NCA unos 8,3 millones de personas tienen necesidades humanitarias. Las crisis convergentes, los impactos asociados a la pandemia y los efectos de las tormentas tropicales han afectado ciertos grupos poblacionales que solo tienen un acceso limitado a servicios de salud esenciales y de emergencia, y se encuentran en inseguridad alimentaria, con flujos migratorios mixtos que continúan alterando las condiciones humanitarias. Estos grupos sufren un deterioro de sus estándares de vida y un impacto en su bienestar físico y mental que se suma a la creciente búsqueda de mecanismos negativos de afrontamiento.

Grupo 1: Mujeres, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad

Las mujeres, y en particular las mujeres en edad reproductiva, las niñas y las adolescentes, con discapacidad, personas LGBTIQ+, jefas de hogares monoparentales, las sobrevivientes de VBG, migrantes, desplazadas, refugiadas y retornadas, las mujeres rurales, indígenas, afrodescendientes o de otros pueblos originarios se han visto afectadas de manera desproporcionada por las diferentes emergencias con impacto humanitario.

Las mujeres están más expuestas a la violencia ejercida por grupos criminales y a la violencia

basada en género. Además de la violencia y la pobreza generalizadas, se han visto cada vez más afectadas por la inseguridad alimentaria y los efectos socioeconómicos de los desastres.

Las mujeres con un bajo nivel educativo ven reducida su participación en el mercado de trabajo. Las crisis han reducido el mercado laboral y ha expuesto a estas mujeres —en particular, las rurales y migrantes— a mecanismos de sobrevivencia negativos como sexo transaccional, matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas, así como a abuso y explotación sexual. Las trabajadoras domésticas remuneradas, muchas de ellas migrantes, indígenas o afrodescendientes, carecen de acceso a la seguridad social, y están más desprotegidas en escenarios de desempleo sostenido.

Las mujeres y niñas con discapacidad experimentan VBG en tasas desproporcionadamente más altas, violencia doméstica al doble de la tasa de otras mujeres y en formas únicas debido a la discriminación basada tanto en el género como en la discapacidad⁴⁸. Pueden verse sometidas a discriminación interseccional que influye negativamente en su propia percepción y en su capacidad de autodeterminación y libertad⁴⁹.

Las mujeres que viven con VIH están expuestas a mayores riesgos y vulnerabilidades, incluidas situaciones que afectan sus derechos sexuales y reproductivos, violencia al comunicar el diagnóstico, niveles altos de violencia de género, discriminación y violencia psicológica contra las niñas y adolescentes viviendo con VIH⁵⁰.

Muchas mujeres y niñas y adolescentes migrantes, refugiadas y retornadas se enfrentan a la pérdida de medios de vida y autonomía económica, barreras de acceso a derechos como salud y salud sexual y reproductiva, trabajo, educación, protección,

información y justicia, así como a manifestaciones específicas de violencia de género (sexual, física y psicológica) en el tránsito y los lugares de destino. Esta situación se agrava ante factores (como la falta y/o de desconocimiento de redes de apoyo y de servicios sociales básicos, y la irregularidad en su condición migratoria y falta de documentación) que incrementan la vulnerabilidad y el riesgo de las mujeres migrantes ante la violencia de género, lo cual las limita para acercarse a la protección del estado y al acceso a servicios esenciales en casos de violencia⁵¹.

Las mujeres indígenas, afrodescendientes y rurales viven a menudo en situación de pobreza y enfrentan condiciones críticas: falta de certeza sobre la propiedad de tierras, falta de acceso a servicios de salud y la salud sexual y reproductiva, limitada autonomía económica y se ven expuestas a ser víctimas de la violencia, así como la exclusión de los espacios de participación y toma de decisiones. Su ubicación geográfica, falta de transporte y condición de pobreza limita muchas veces su acceso a servicios de atención integral y a medios alternativos para presentar sus denuncias.

Desde un punto de vista nutricional, las mujeres con malnutrición tienen más probabilidades de enfermarse durante el embarazo y tienen un mayor riesgo de parto prematuro, aborto espontáneo, muerte fetal e incluso su propia muerte. También es más probable que contraigan infecciones, experimenten debilidad y tengan menor productividad. Las mujeres que padecen deficiencias de micronutrientes corren un mayor riesgo de morir durante el parto, dar a luz a un bebé con bajo peso o con deficiencias cognitivas, y afectar la salud y el desarrollo de los lactantes amamantados.

El cierre de las escuelas está despojando a las niñas y a las adolescentes de un medio de protección. El cumplimiento de la cuarentena o encierros supone para ellas el riesgo de ser víctimas de abusos,

48 UN General Assembly, Report of the Secretary General of the United Nations, "Situation of women and girls with disabilities and the Status of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the Optional Protocol.

49 Ministerio de igualdad de España. Federación de Mujeres Progresistas. 2020. Mujer, discapacidad y violencia de género.

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/investigaciones/2020/pdfs/Resumen_ejecutivo_discapacidad_FMP.pdf

50 Investigación para la vinculación de la violencia contra las mujeres y niñas, femicidio, el VIH y el impacto de COVID-19, Organización LLAVES, 2020.

51 <https://infosegura.org/la-cara-escondida/assets/VCM.pdf>

embarazos forzados y violencia sexual e igualmente les limita el acceso a servicios esenciales para la atención médica, psicológica y legal por falta de transporte, horarios restringidos de operadores de justicia y escasa cobertura de los servicios remotos, especialmente para mujeres y niñas indígenas, rurales, con discapacidad, mujeres y niñas con identidad de género diversa y/o con enfermedades crónicas.

Se desconoce la importancia y el valor agregado de la participación de las mujeres en la toma de decisiones. En Honduras el 92 por ciento y en Guatemala el 78 por ciento de las mujeres encuestadas indicaron que no participaron o participaron poco en la toma de decisiones durante la emergencia. Esto evidencia la importancia de incrementar los esfuerzos de fortalecimiento del liderazgo de mujeres y el apoyo a organizaciones de mujeres en la preparación y respuesta a las emergencias.

Grupo 2: Poblaciones en situación de movilidad humana (personas internamente desplazadas, solicitantes de asilo, refugiadas, migrantes y retornadas)

La persistencia de la violencia y la inseguridad continúa generando situaciones de desplazamiento que impactan de modo diferenciado en los grupos más vulnerables. El desplazamiento forzado tiene un fuerte impacto en el bienestar y protección de las personas desplazadas quienes enfrentan riesgos a su seguridad física, situaciones que afectan su bienestar físico y mental, y obstáculos al ejercicio de derechos y acceso a bienes y servicios básicos (salud, educación, alimento, vivienda, entre otros), además del trauma psicológico que representa el desplazamiento y desarraigo de sus comunidades de acogida y la separación de sus redes de apoyo. A esto se suman las condiciones de los alojamientos temporales, que generalmente no son las más adecuadas y pueden agravar los riesgos para ciertos perfiles específicos.

Las personas en tránsito enfrentan desafíos de protección y asistencia (trata y tráfico, violencia

sexual y basada en el género, extorsión, privación de la libertad, separación familiar de niños, niñas y adolescentes, entre otros incidentes), particularmente para quienes hacen el recorrido de forma irregular o carecen de la documentación válida. Las personas que se mueven en el contexto de flujos o movimientos mixtos han visto agravadas sus condiciones de vulnerabilidad y sus necesidades de asistencia humanitaria. El aumento de las medidas de control migratorio implementado por las autoridades, la falta de información y el aprovechamiento que realizan las redes de tráfico ilícito de migrantes exponen a las personas que participan en movimientos mixtos a renovados riesgos para su protección (abusos, explotación, extorsión, privación de la libertad, violencia de género, entre otros).

Las personas que se ven obligadas a huir de sus hogares suelen buscar primero resguardo en los municipios o áreas vecinas a sus comunidades de origen, desplazándose varias veces internamente en busca de seguridad, antes de huir a través de fronteras internacionales⁵².

Especialmente las personas solicitantes de asilo y refugio enfrentan desafíos en el acceso a procedimientos legales eficientes, documentación e integración local en las comunidades de acogida, sufriendo estigma y discriminación. Los desafíos que enfrentan los retornados incluyen la imposibilidad de retornar a sus comunidades de origen y limitaciones de apoyo a la reintegración en las mismas.

En el contexto de la pandemia de COVID-19, las personas desplazadas han enfrentado retos para protegerse del virus por tener menor acceso a insumos, instalaciones sanitarias, vacunas o simplemente una vivienda decente. En el caso de las personas desplazadas que viven con VIH o con otras condiciones crónicas de salud (como diabetes, hipertensión, etc.), la falta de acceso a medicamentos e insumos preventivos y de diagnóstico para el control de estas condiciones ha puesto en peligro su vida.

52 REDLAC, Boletín No. 9, disponible en: <https://boletinesredlac.com/>

Varias personas migrantes se han encontrado aglomeradas debido al cierre de fronteras y la prohibición de movilidad y politización. Además del aumento en el riesgo de contagio, se incrementó el riesgo de ser víctima de trata y tráfico de personas especialmente para mujeres, niñas y niños⁵³.

Las personas desplazadas como consecuencia de las tormentas han visto aumentadas sus vulnerabilidades por las condiciones precarias en algunos albergues debido a la infraestructura inadecuada, el saneamiento y el acceso limitado al agua potable, todos críticos para mitigar el riesgo de infecciones por COVID-19 y otras enfermedades transmisibles endémicas en los países afectados.

Grupo 3: Niños, niñas y adolescentes (NNA)

Los NNA en condición de vulnerabilidad (especialmente los migrantes, refugiados, con discapacidades, indígenas, y en riesgo de exclusión)⁵⁴ pertenecen a hogares que han sufrido una contracción de ingresos y están expuestos al abandono escolar pudiendo caer en mecanismos de sobrevivencia negativos como el trabajo infantil, los matrimonios tempranos, y otras actividades como el reclutamiento por las pandillas.

Los niños y niñas menores de 5 años tienen necesidades nutricionales muy específicas y nacen con un sistema inmunológico poco desarrollado que les hace vulnerables a las infecciones, como neumonía y diarrea. En contextos de escasos recursos, los niños y niñas pequeños que no son amamantados tienen más probabilidades de morir de neumonía y diarrea que los niños y niñas amamantados⁵⁵. Los menores que padecen deficiencias de micronutrientes tienen un mayor riesgo de muerte por enfermedades infecciosas y de deterioro del desarrollo físico y mental. Las niñas y niños pequeños con desnutrición aguda, en

particular la forma severa, tienen hasta nueve veces más probabilidades de morir que los niños y niñas sin desnutrición⁵⁶.

Entre octubre 2020 y mayo 2021 se reportan 58.993 niños no acompañados de los países NCA identificados en la frontera Sur de los Estados Unidos⁵⁷. En el caso de niños, niñas y adolescentes desplazados se agregan desafíos adicionales en relación con el acceso a la educación y la continuación de sus estudios. Igualmente tienen dificultad para acceder a la protección social. Entre las principales razones por las que los niños, niñas y adolescentes migrantes y refugiados de estos países tienen dificultades para asistir a la escuela destacan los reducidos recursos económicos de sus hogares, la falta de acceso a dispositivos informáticos y de conexión a Internet, la discriminación y la xenofobia, y la falta de documentación.

Grupo 4: Personas indígenas y afrodescendientes

En el NCA, las personas indígenas y afrodescendientes, particularmente las mujeres y niñas, pertenecen en su gran mayoría a los grupos más pobres y/o invisibilizados. La situación social política y económica de los pueblos indígenas en la mayoría de los aspectos es mucho peor que la de otras personas no indígenas con características similares, como el mismo nivel de educación, edad, lugar de residencia rural o urbana, tipo de trabajo y las tipologías de hogar.

Las poblaciones rurales, a menudo mayormente indígenas como en Guatemala, tienen los índices de pobreza y pobreza extrema más altos. Con la llegada de la COVID-19 se configuró una múltiple afectación en zonas rurales y remotas, donde el acceso a servicios de salud, muchas veces insuficientes, se presenta difícil.

53 Orientación para operaciones de Alojamiento de Emergencia - Mesa de Trabajo REDLAC-Shelter para COVID-19. Agosto 2020.

54 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20200616_HNO_CENTROAMERICA%20ADDENDUM.pdf

55 Black RE, Allen LH, Bhutta ZA, Caulfield LE, de Onis M, Ezzati M, Mathers C, Rivera J; Maternal and Child Undernutrition Study Group. (2008) Maternal and child undernutrition: global and regional exposures and health consequences. *Lancet*, 371:243–60.

56 Black RE, Allen LH, Bhutta ZA, Caulfield LE, de Onis M, Ezzati M, Mathers C, Rivera J; Maternal and Child Undernutrition Study Group. (2008) Maternal and child undernutrition: global and regional exposures and health consequences. *Lancet*, 371:243–60.

57 US Customs and Border Protection, Southwest Land Border Encounters, disponible en: [Southwest Land Border Encounters | U.S. Customs and Border Protection \(cbp.gov\)](https://www.cbp.gov/newsroom/sw-lbe)

El limitado acceso a servicios básicos como educación, salud y medios de sanitización, y el hacinamiento afectan el bienestar físico de estas poblaciones, aumentando la morbilidad y el riesgo de mortalidad por epidemias. Además, la comunicación de riesgos representa un desafío en regiones multiculturales y multiétnicas donde se hablan varios idiomas.

Las y los migrantes indígenas enfrentan múltiples formas de discriminación, su vida y trabajo están invisibilizados, por temor no acceden a mecanismos de denuncia, y son extremadamente vulnerables a la violencia, la explotación y la marginación. En el caso de las mujeres indígenas, enfrentan riesgos de explotación laboral y sexual. La migración ofrece oportunidades para el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas indígenas y en muchos casos constituye una estrategia de supervivencia de los pueblos. Sin embargo, también se reconoce la discriminación interseccional que deriva de la triple condición de mujeres, migrantes e indígenas⁵⁸, que se exagera en zonas de ausencia y desatención de los estados (como en las zonas de frontera) y de lejanía de las redes familiares y comunitarias.

Grupo 5: Personas en condición de discapacidad

Las personas con discapacidad en condición de vulnerabilidad en algunos casos dependen de los cuidados de otras personas, al tener dificultades para desplazarse o conseguir ayuda. En general, la prestación de servicios de salud para personas con diferentes discapacidades se ve afectada en contextos de emergencia.

Las personas con discapacidad encuentran múltiples barreras para acceder a los servicios y a la ayuda humanitaria. Entre la población afectada por los huracanes Eta e Iota, las personas con discapacidad reportaron no encontrar condiciones seguras en albergues temporales, ni medidas de cuidado seguro.

En el contexto de desastres y crisis, muchas veces se agudiza la discriminación que padecen y se reduce su participación, que luego radica en el acceso inequitativo a la información y a la asistencia humanitaria.

Grupo 6: Personas LGBTIQ+

Las personas LGBTIQ+ son afectadas por un alto nivel de riesgos que incluyen diversas formas de violencia, incluida la VBG, explotación sexual, trata, abusos, extorsiones, amenazas y discriminación. Enfrentan además limitaciones en el acceso a servicios integrados además de la falta de servicios especializados de atención de calidad, diferencial y no-discriminatoria que aborden desde el enfoque diferenciado e interseccional la respuesta y atención a las personas LGBTIQ+.

En la región continúa siendo un reto el acceso a la justicia y la denuncia de los crímenes de odio, lo cual genera un subregistro de la violencia contra las personas LGBTIQ+ y enormes desafíos en el levantamiento de estadísticas fieles a la realidad. Se ven afectadas de manera particular las mujeres lesbianas y transgénero que en el caso de Honduras representan un mayor número de muertes violentas.

Se reporta que las personas LGBTIQ+ continúan desplazándose dentro y fuera de la región para evitar los efectos de la violencia ejercida a manos de fuerzas de seguridad, pandilleros y otras personas. En El Salvador, según estadísticas oficiales que se dieron a conocer en enero de 2020, se produjeron 692 casos de violencia contra las personas LGBTI entre enero de 2015 y junio de 2019⁵⁹.

58 Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)- División de Población de la CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, Informes de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas (A/HRC/39/17/Add.3 y A/HRC/39/17/Add.2).

59 Human Rights Watch, Informe 2021.

Parte 2:

Análisis de Riesgos y Monitoreo de la Situación y Necesidades

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, EL SALVADOR

Entrega de kits de higiene y bioseguridad para afectados por deslave en Nejapa (octubre de 2020).

Foto: Oxfam El Salvador/Alfredo Carías



2.1

Análisis de Riesgos y proyección de las necesidades

Las organizaciones humanitarias del Equipo Humanitario País (EHP), con base en evidencias y análisis del contexto, identificaron los grupos vulnerables más afectados, así como las zonas más afectadas en términos de necesidades humanitarias, definiendo la severidad de sus necesidades y considerando un enfoque diferencial.

La situación humanitaria e interna de estos países, determinada en gran parte por el reciente impacto de la pandemia de COVID-19, junto a dinámicas de violencia, la pobreza y los desastres socio-naturales, tuvo un deterioro considerable de las consecuencias humanitarias. En el último año el número de personas con necesidades humanitarias en la región ha tenido un incremento significativo pasando de 5,2 millones de personas a 8,3 millones, según datos actualizados en este documento.

En los tres principales componentes del INFORM, Amenazas, exposición, y falta de capacidades de afrontamiento, Guatemala (5.7 alto), y Honduras (5.4 alto) se sitúan entre los primeros países de la región mientras que El Salvador (4.6 medio) ha mejorado ligeramente su situación.

Considerando que muchos de los factores de vulnerabilidad son estructurales, este análisis pretende identificar su existencia a través de un análisis que determinará la severidad de las necesidades humanitarias. El análisis de severidad de las necesidades que prioriza grupos vulnerables y las zonas más afectadas se llevó a cabo a través de un análisis cuantitativo y cualitativo en consulta con los equipos de terreno en varias regiones de cada país.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) proyecta que en América Central la caída del producto interno bruto (PIB) podría alcanzar -2,3 por ciento, a raíz de la caída en el turismo - como

se ha manifestado ya en Guatemala y en El Salvador, donde el sector representa el 20 por ciento del PIB en el 2018 - y la reducción de la actividad de Estados Unidos, el principal socio comercial de la región y la mayor fuente de remesas. Otras entidades prevén que la contracción de la actividad económica sea mayor. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por ejemplo, proyecta que de ser más severa la prolongación de los efectos de la pandemia en El Salvador, la contracción económica en el país podría llegar a hasta un -3.9 por ciento.

Además del aumento de la pobreza y la pobreza extrema en varios puntos porcentuales, la CEPAL prevé que también crecerá la desigualdad en todos los países de la región. El Coeficiente de Gini, que mide la desigualdad, podría ver incrementos de entre el 0,5 por ciento y el 6,0 por ciento. Según proyecciones del Programa Mundial de Alimentos, debido a la pandemia el número de personas con inseguridad alimentaria severa en el Corredor Seco subiría de más de 1,6 millones a cerca de 3 millones en 2020.

Además, el riesgo de desastres socio-naturales sigue siendo importante en la región, como lo ha mostrado la recién ocurrencia de incendios y actividades volcánicas en Guatemala, y sobre todo con las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal que afectaron los tres países y provocaron inundaciones, deslizamientos y desplazamientos de población al inicio de junio de 2020. Los actores humanitarios temen no poder responder a esos múltiples desastres por la dificultad de movilizar la ayuda en el terreno y la complejidad de implementar medidas de aislamiento social suficientes en los alojamientos temporales. Además, el agua de las tormentas y huracanes puede dispersar los desechos sanitarios (incluyendo biológico infecciosos), domésticos y residuos.

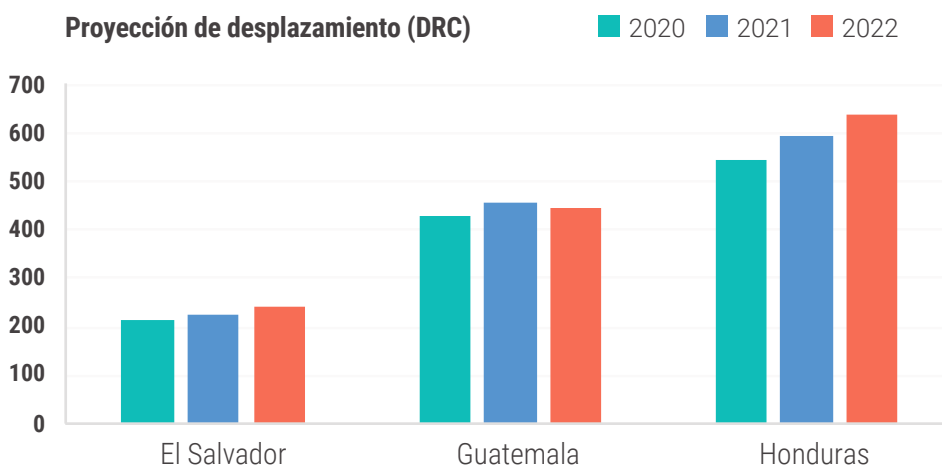
Se corrobora la persistencia de riesgos ambientales en las zonas impactadas, debido a daños y contaminación de fuentes y sistemas de agua y de saneamiento, aguas estancadas y lodos, riesgos que son críticos para los ciclos de temporadas de lluvias.

El aumento en la movilidad de personas desde el NCA registrado desde fines de 2020 hace prever un número más alto de personas que podrían ser retornadas hacia El Salvador, Guatemala y Honduras en 2021 y 2022, incluida la particular situación de personas que a su retorno plantea necesidades urgentes de protección y asistencia. El número de personas que arriban a países del NCA buscando protección como refugiados también se ha incrementado en los últimos años. A finales de 2020, más de 1.500 solicitantes de asilo y refugiados eran acogidos en países de la subregión, principalmente en Guatemala, y se espera que aproximadamente 5.000 personas podrían buscar protección internacional en estos tres países hasta finales de 2022.

De acuerdo a las proyecciones Foresight del Consejo Danés para los Refugiados (DRC, por sus siglas en inglés) del 29 de junio de 2021, el desplazamiento debería de seguir al alza en los tres países basándose en los indicadores de violencia, situación económica y derechos humanos. Las cifras proyectadas pasarían de 213.765 en 2020 a 226.318 en 2021 para llegar a 242.424 en 2022 y 275.877 en 2023 en El Salvador, de 429.070 en 2020 a 457.090 en 2021 a 448.158 en 2022 a 578.401 en 2023 en Guatemala, y de 543.634 en 2020 a 596.519 a 639.063 en 2022 a 758.355 en 2023 en Honduras.

La situación de inseguridad alimentaria en la región podría verse empeorada por efectos adversos de amenazas climáticas pronosticadas para la región. Los últimos modelos meteorológicos mundiales analizados por el grupo de alerta temprana y análisis de riesgos del IASC (que incluye a la OMM y al IRI) indican un riesgo de déficit de lluvias en América Central para los próximos meses, con un impacto potencial elevado en la primera temporada (de mayo a septiembre). Aunque el riesgo de déficit de lluvias se ha categorizado como "moderado", el impacto potencial en la seguridad alimentaria se ha clasificado como alto, especialmente en el Corredor Seco y en las zonas con mayores niveles de migración debido al mayor nivel de vulnerabilidad de la población. La reducción de las precipitaciones afectará el suministro de agua que requieren tanto las comunidades rurales como su producción agrícola.

Según el marco lógico de UNICEF sobre la malnutrición infantil, las causas directas y subyacentes que afectan el estado nutricional de los grupos más vulnerables, niños y niñas menores de cinco años y las mujeres lactantes y embarazadas, son la presencia de enfermedades, una dieta inadecuada, un entorno doméstico insalubre y servicios sanitarios inadecuados, la inseguridad alimentaria de los hogares, las practicas inadecuadas de alimentación de los niños y niñas. Todos esos factores están actualmente presentes en Guatemala, Honduras y El Salvador y empeoran las prevalencias de desnutrición (aguda, crónica pero también las carencias en micronutrientes).



2.2

Monitoreo de la Situación y Necesidades

Para el monitoreo de la situación humanitaria, se hará seguimiento a los indicadores definidos tanto por los sectores/clústeres a nivel nacional de forma que pueda hacerse un seguimiento a nivel regional, lo que nos permitirá establecer la evolución de la situación. Se cuenta con instrumentos que dan cuenta de la situación y respuesta a las necesidades, identificando los vacíos que puedan estar quedando y requieren

priorizar la asistencia. Se procurará consolidar periódicamente los resultados de las evaluaciones humanitarias efectuadas por los socios en las zonas de implementación para analizar conjuntamente la evolución de las necesidades de los grupos más vulnerables, el número de personas necesitadas, la aparición de nuevos grupos y subgrupos que requieran asistencia humanitaria y los riesgos asociados.



ZONA DE ORIENTE SUR, EL SALVADOR

Entrega de kits de alimento e higiene en marco de pandemia COVID-19; tormentas ETA e IOTA en la zona de oriente sur.

Foto: World Vision El Salvador

Parte 3: **Análisis Sectorial (región NCA)**

EL TRIUNFO (DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA), HONDURAS

Debido a la sequía en el Corredor Seco, el PMA ha puesto en marcha un proyecto piloto de vivero de semillas, escuela de campo y formación agrícola para la recogida de agua, pero hasta las lluvias estacionales de abril no se verán los resultados.

Foto: PMA Honduras/Julian Frank



3.1 Protección



POBLACIÓN EN NECESIDAD (PIN) TOTAL	POBLACIÓN EN NECESIDAD EL SALVADOR	POBLACIÓN EN NECESIDAD GUATEMALA	POBLACIÓN EN NECESIDAD HONDURAS	MUJERES	NIÑOS Y NIÑAS	PERSONAS CON DISCAPACIDAD
3,4M	756K	1,7M	942K	55%	43%	7%

Problemas comunes por los grupos vulnerables

A pesar de la reducción en el número de homicidios, la persistencia de la inseguridad y la violencia a manos de grupos criminales continúa representando un serio desafío para los países del NCA. Su población continúa expuesta a situaciones de violencia e inseguridad que incluyen altas tasas de asesinatos, desaparición, femicidios y extorsión, así como acceso limitado a alternativas para la protección y salvaguarda de la seguridad y derechos de las personas. Otros factores como la pobreza y la desigualdad, la inseguridad alimentaria, los efectos adversos de la pandemia por COVID-19, los desastres socio-naturales y el cambio climático, acentúan los desafíos de protección y de atención de las necesidades humanitaria de la población más vulnerable.

Al menos 2,3 millones de personas presentan necesidades de protección, los cuales incluyen riesgos para la protección de su vida, seguridad y bienestar, el derecho a una vida libre de violencia de género, la protección de niños, niñas y adolescentes, y el ejercicio de derechos fundamentales y acceso a servicios y bienes básicos para una vida digna.

El recrudecimiento de la violencia y el mayor control y alcance de los grupos criminales, continúan generando situaciones de desplazamiento forzado dentro y fuera de las fronteras de los países del Norte

de Centroamérica. Durante los últimos diez años, el desplazamiento de El Salvador, Guatemala y Honduras ha aumentado casi 50 veces, pasando de 18.400 personas al final de 2011 a unas 867.800 personas forzosamente desplazadas a finales de 2020. De acuerdo con la información del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 131.194 personas provenientes de países del Norte de Centroamérica solicitaron protección como refugiados en 2020, elevando a más de 549.000 el número de personas que han escapado de la violencia en El Salvador, Guatemala y Honduras y que se encontraban en calidad de solicitantes de asilo o refugiadas a finales de 2020⁶⁰. A nivel mundial, el 12 por ciento de todas las nuevas solicitudes de asilo presentado en 2020 fueron por nacionales de estos tres países.

Análisis de las necesidades humanitarias

Frente a la situación de las personas afectadas por la violencia y el desplazamiento interno, resultan de preocupación los desafíos de protección que enfrentan en relación con su seguridad, acceso y ejercicios de derechos, seguridad alimentaria, acceso a agua y saneamiento básico, salud, educación y medios de vida. Las cifras oficiales sobre desplazamiento interno establecieron en 318.590 el número de personas desplazadas en El Salvador⁶¹ y Honduras⁶², mientras que no se dispone de reportes o estimaciones oficiales sobre desplazamiento interno en Guatemala.

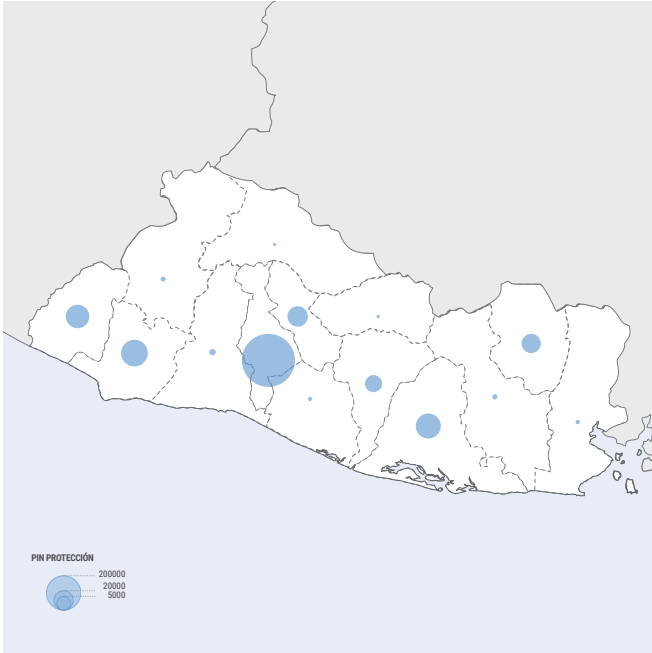
60 ACNUR, Refugee Data Finder, disponible en: <https://www.unhcr.org/refugee-statistics/59> Human Rights Watch, Informe 2021.

61 Poder Ejecutivo, El Salvador: Caracterización de la movilidad interna a causa de la violencia en El Salvador. Informe final, marzo 2018, disponible en esta dirección: <https://www.refworld.org/es/docid/5ab96d624.html>

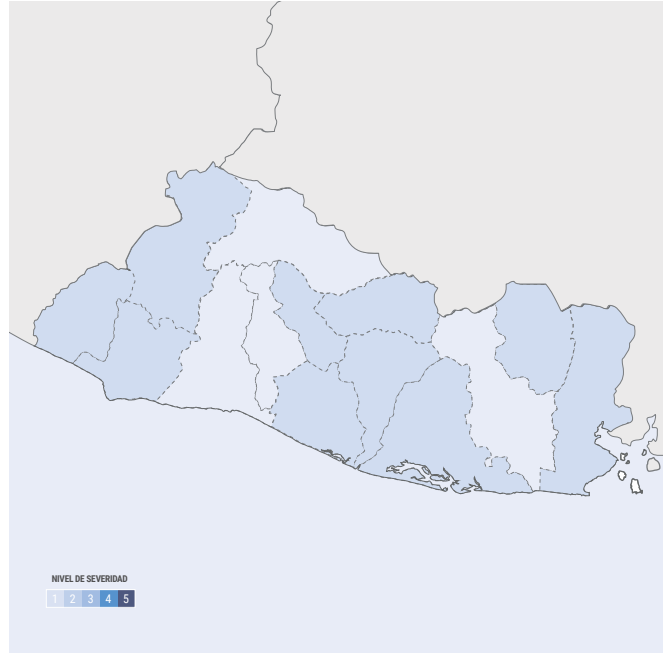
62 Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas Internamente por la Violencia (CIPPDV), Estudio de caracterización del desplazamiento interno por violencia en Honduras 2004-2018, 11 Diciembre 2019, disponible en esta dirección: <https://www.refworld.org/es/docid/5df3b7674.html>

El Salvador

Personas en necesidad

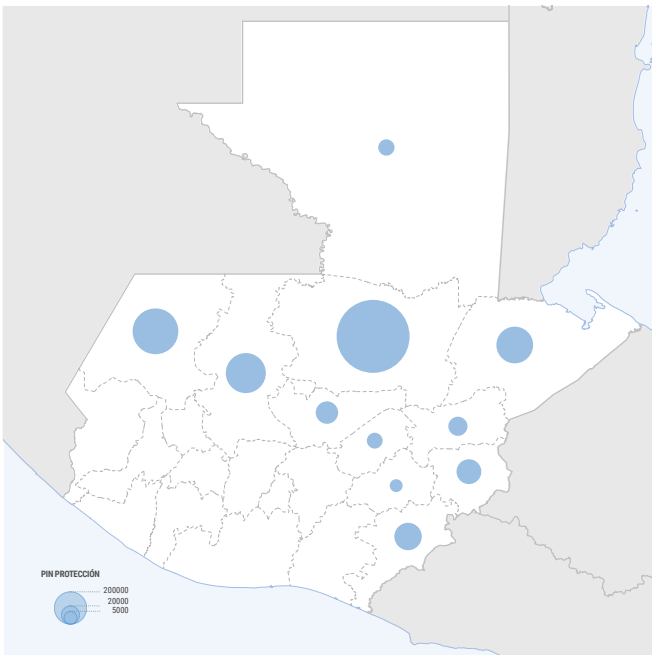


Severidad

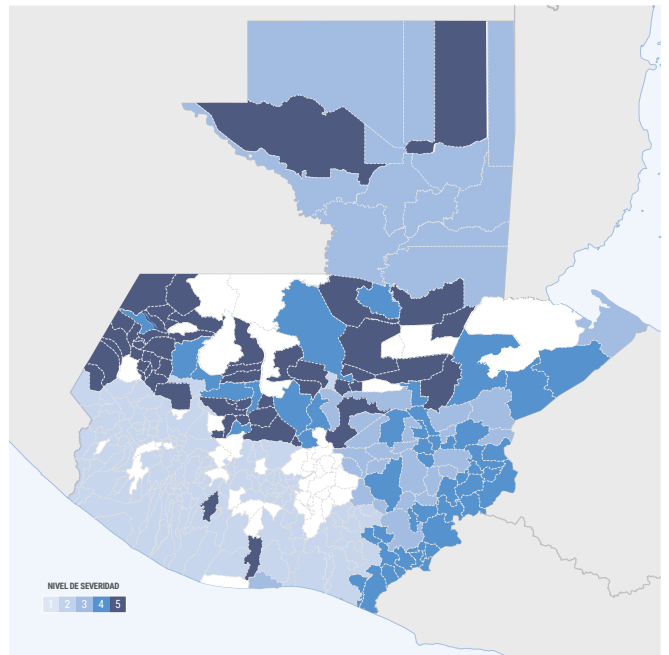


Guatemala

Personas en necesidad

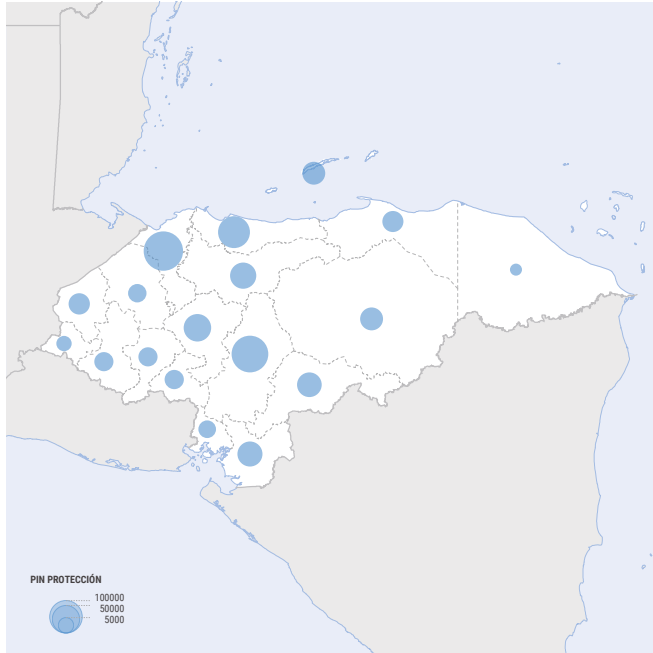


Severidad



Honduras

Personas en necesidad

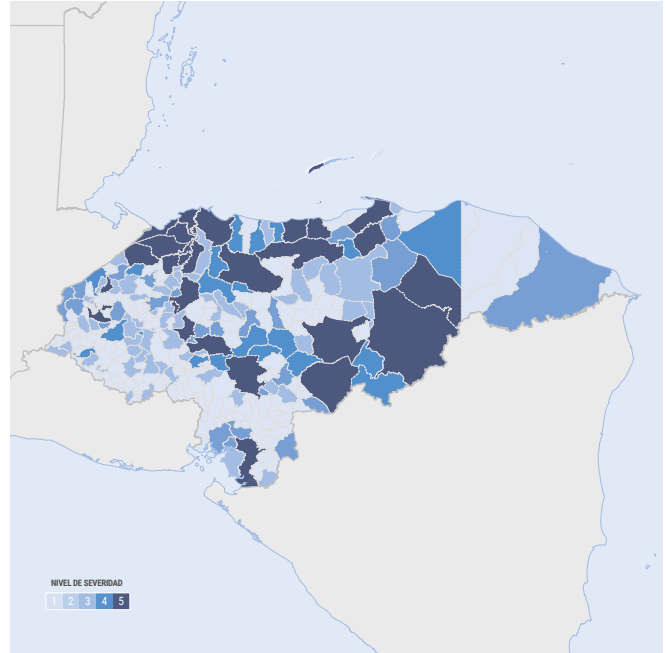


Dado que los estudios sobre desplazamiento interno han sido actualizados en los últimos años, el número de personas internamente desplazadas podría ser mayor debido a la persistencia de la violencia y la inseguridad que afecta a las comunidades, agravada en el contexto de la COVID-19 y al impacto de las tormentas Eta e Iota.

A la necesidad de información actualizada sobre el perfil y necesidades de la población internamente desplazada, se suman los desafíos de la respuesta institucional. La ausencia o falta de implementación efectiva de normativas y políticas en materia de prevención y protección al desplazamiento, continúa representando un reto clave para la protección y atención de las necesidades humanitarias de las personas internamente desplazadas.

El recrudecimiento de la violencia y la inseguridad es acompañado por tasas elevadas en los casos de violencia sexual y basada en género. La VBG sitúa

Severidad



a las mujeres y niñas entre los principales perfiles de riesgo dentro de la población desplazada, dentro y fuera de las fronteras de los países del Norte de Centroamérica. Las personas LGBTQ+ es otra población altamente afectada por elevados índices de violencia y crímenes de odio. Un agravante más es el deterioro de las fuentes de ingresos debido al aislamiento preventivo debido a la pandemia, el cual ha exacerbado el sexo por supervivencia, la prostitución forzada y la explotación sexual. Niños, niñas y adolescentes siguen estando expuestos a graves violaciones de derechos humanos, uniones tempranas, trata, abusos, explotación y otras formas de violencia ejercidas por los grupos criminales.

El control y la violencia que ejercen los grupos criminales tienen también un impacto inmediato en la vida de las comunidades y sus procesos organizativos (en organizaciones de mujeres, juveniles y LGBTQ+, entre otras) erosionando la base social y generando daños a la propiedad y afectación de la infraestructura

comunitaria. Reforzar el enfoque comunitario y el apoyo a las organizaciones de base y estructuras comunitarias es clave para la construcción de resiliencia y desarrollo de mecanismos de protección comunitaria dirigidos a amortiguar la violencia y prevenir el desplazamiento forzado.

Para las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas en busca de protección en El Salvador, Guatemala y Honduras, los riesgos de protección incluyen desafíos para el acceso al territorio, la identificación y referencia en fronteras, limitaciones en el acceso a procedimientos de asilo justo y eficientes, demoras y dificultades para el acceso a documentación, obstáculos para el acceso a derechos básicos y medios de vida. En línea con las prioridades acordadas en el MIRPS, el fortalecimiento de los procedimientos estatales de determinación de la condición de refugiado, el fortalecimiento de los mecanismos de recepción y admisión de personas necesitadas de protección y la expansión de las soluciones continúan resultando acciones prioritarias⁶³.

Los países del Norte de Centroamérica se han consolidado como países de origen y/o tránsito para personas en situación de movilidad humana a gran escala en ruta hacia el norte. El reforzamiento de los mecanismos de identificación y atención, particularmente en áreas fronterizas y a lo largo de la ruta, continúa siendo una medida clave para atender las necesidades de protección de los más vulnerables y asegurar su acceso a asistencia humanitaria de emergencia.

La realidad de los grupos en movimiento denominados “caravanas” continúa representando un reto especial para la atención humanitaria de personas en el contexto de flujos migratorios mixtos, agravado por la desinformación y falsas expectativas que aprovechan las redes del tráfico ilícito, los mayores controles impuestos por los Estados y el aumento de riesgos a los que se enfrentan en general. Reforzar la atención, información y servicios de protección representa un

reto clave que requiere fortalecer los mecanismos de identificación, referencia y atención en todos los casos.

El aumento en la movilidad de personas desde países del Norte de Centroamérica registrado desde fines de 2020 hace prever un aumento en el número de personas que podrían ser retornadas. Es altamente probable que los retornos alcancen en 2021 y 2022 niveles similares a los registrados previo a la pandemia (más de 255.00 personas fueron retornadas desde México y los Estados Unidos en 2019)⁶⁴. Los desafíos que plantea la situación de los retornados incluyen la situación de personas que requieren de respuestas/alternativas de protección, así como la necesidad de trabajar junto a las autoridades en el desarrollo de estrategias y programas para el apoyo a su reintegración en las comunidades de origen o de residencia.

Proyección de las necesidades

La persistencia de la violencia, sumada a la pobreza, la falta de oportunidades, la inseguridad alimentaria, el impacto de la pandemia y de los desastres, continuarán dando lugar a nuevas situaciones de desplazamiento y a la erosión de los mecanismos de afrontamiento y autoprotección de las personas y las comunidades. Se seguirán requiriendo esfuerzos para prevenir y gestionar los riesgos, mitigar el impacto de las violaciones de derechos humanos y promover una respuesta de protección segura e inclusiva, así como priorizar las soluciones duraderas. En este contexto, el enfoque comunitario y de área para la atención integral será clave. La VBG continúa estando presente en la vida de las mujeres y las niñas, así como los riesgos que enfrentan niños, niñas y adolescentes afectados por la violencia y el desplazamiento.

Para que las actividades de protección resulten eficaces en la preservación, protección y restauración de los derechos de las personas en necesidad, resulta esencial la participación de los principales organismos internacionales y nacionales, así como de los actores

63 Véase <https://globalcompactrefugees.org/mirps-en/about-mirps>

64 Véase <https://mic.iom.int/webntmi/descargas/tnca/2020/reg12-2020.pdf>

de desarrollo. La cooperación de estos actores es fundamental para garantizar que las actividades de protección se sustentan en una estrategia sólida dirigida a fortalecer el estado de derecho y gobernanza local. Los socios del Sector Regional y Sectores Nacionales de Protección continuarán trabajando por asegurar la centralidad de la protección y apoyar los esfuerzos y actividades dirigidas a asegurar el más amplio nivel de goce de los derechos humanos.

Monitoreo

El monitoreo de la situación humanitaria y de protección se realizará a través de los arreglos acordados entre el Sector Regional de Protección y subsectores de REDLAC, así como por los sectores o estructuras de protección establecidas a nivel de cada país. El seguimiento se concentrará en medidas de asistencia y protección frente a la violencia, especialmente de mujeres, niñas, niños y adolescentes; medidas de prevención y atención a los desplazados internos, incluida la situación de

comunidades campesina e indígenas; el acceso al territorio, procesos de asilo justos y eficientes para solicitantes refugiados, y la atención de las necesidades y acceso a servicios de protección para personas en situación de movilidad humana en el contexto de movimientos mixtos. En cuanto a la VBG, se asegurarán las acciones de prevención y respuesta dirigidas a personas sobrevivientes y en riesgo de VBG, que incluyan estrategias de difusión de información, la gestión de casos y el acceso integral a servicios de salud, atención psicosocial, acceso a la justicia y medidas de protección. El fortalecimiento de las capacidades institucionales es clave para asegurar los mínimos estándares de calidad de los programas de protección.

Indicadores

#	INDICADOR REGIONAL	FUENTE
1	% de mujeres y niñas que han experimentado algún tipo de violencia en los últimos 12 meses.	Encuesta Nacional de Violencia contra la Mujer, Gobierno
2	Personas víctimas de homicidios y lesiones por violencia generalizada.	Policía Nacional Civil
3	% de mujeres de 15-49 años con disponibilidad de servicios esenciales para la atención de violencia basada en género.	Institutos Nacionales de Estadísticos, Censo
4	Población víctima de un hecho violento contra la integridad humana y la propiedad.	Gobierno, ACNUR, ACI (2020), IUDPAS-UNAH, 2020

Subgrupos de Protección

3.1.1

Violencia basada en Género (VBG)



POBLACIÓN EN NECESIDAD (PIN) TOTAL	POBLACIÓN EN NECESIDAD EL SALVADOR	POBLACIÓN EN NECESIDAD GUATEMALA	POBLACIÓN EN NECESIDAD HONDURAS	MUJERES	NIÑOS Y NIÑAS	PERSONAS CON DISCAPACIDAD
1,9M	605k	637k	660k	57%	40%	3%

Problemas comunes por los grupos vulnerables (En qué consisten sus problemas urgentes y de medio plazo)

En los países del Norte de Centroamérica, la VBG tiene causas estructurales profundas. El aumento y las dinámicas de están intrínsecamente relacionadas con la inseguridad alimentaria, la migración, la violencia crónica, el desplazamiento forzado y los desastres socio-naturales que han afectado a los tres países. Los riesgos de VBG han aumentado en relación con el aumento de la vulnerabilidad derivada de los efectos de la violencia, la pérdida de medios de vida y la alteración de las estructuras sociales y familiares.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), los países de la región con mayor tasa de feminicidios por cada 100.000 habitantes son El Salvador (6.8) y Honduras (5.1), seguidos por Bolivia y Guatemala.

La falta de acceso a los servicios para prevenir, y responder a la violencia de género exacerba los efectos y las consecuencias de la VBG. En el caso de las mujeres y niñas migrantes o desplazadas, a menudo no tienen acceso a información sobre los servicios, no confían en la comunidad anfitriona o no confían en la justicia del país.

Las mujeres indígenas y rurales se ven especialmente limitadas en el acceso a los servicios ya que no cuentan con acceso a transporte, recursos para movilización, ni cobertura de servicios de telefonía para la búsqueda de estos servicios.

Las adolescentes se encuentran entre las poblaciones más expuestas al riesgo de sufrir múltiples formas de VBG, entre las cuales se destacan los delitos sexuales, desaparición, violencia intrafamiliar y femicidio.

La combinación de altos niveles de pobreza e inseguridad alimentaria, niveles extremos de violencia, la migración y el desplazamiento, erosionan las capacidades de afrontamiento de las poblaciones y de las familias, conduciendo a situaciones de mayor vulnerabilidad y reduciendo los mecanismos de enfrentamiento, de mitigación y de prevención de VBG.

Análisis de las necesidades humanitarias

Los niveles de violencia que mujeres, niñas y adolescentes padecen en los países del NCA continúan evidenciando tendencias preocupantes según la información que compilan, analizan y sistematizan las entidades gubernamentales.

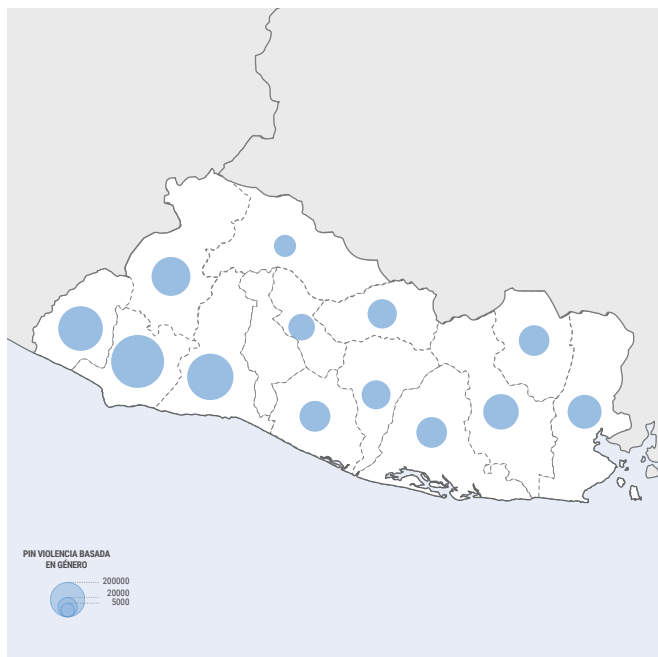
Por ejemplo, la Encuesta Nacional de Violencia Sexual contra la Mujer en El Salvador⁶⁵ revela que 63 de cada 100 mujeres han vivido al menos un hecho de violencia sexual a lo largo de su vida⁶⁶, mientras que el porcentaje de mujeres que reportó haber sufrido a lo largo de su vida algún hecho de violencia psicológica y física, ascendió a 53.4 por ciento y 26.5 por ciento, respectivamente. Más de 86.000 denuncias de violencia contra mujeres, niñas y adolescentes se registraron en Guatemala en 2020, registrándose un aumento en el número de denuncias de violencia, así como en los reportes de mujeres y niñas y niños desaparecidos. En este contexto, resulta preocupante la disminución de solicitudes de protección de seguridad y judicial para mujeres y niñas/os sobrevivientes de violencia, lo cual que pone en evidencia la dificultad de acceso a los servicios

esenciales durante la emergencia ocasionada por la pandemia de COVID-19. La violencia sexual representa el tercer delito cuantificado con relación a número de denuncias en Honduras⁶⁷, con más de 5.800 denuncias de violencia sexual registradas en 2019 y 2020, de las cuales una gran mayoría de sus víctimas eran mujeres entre 0 y 19 años⁶⁸.

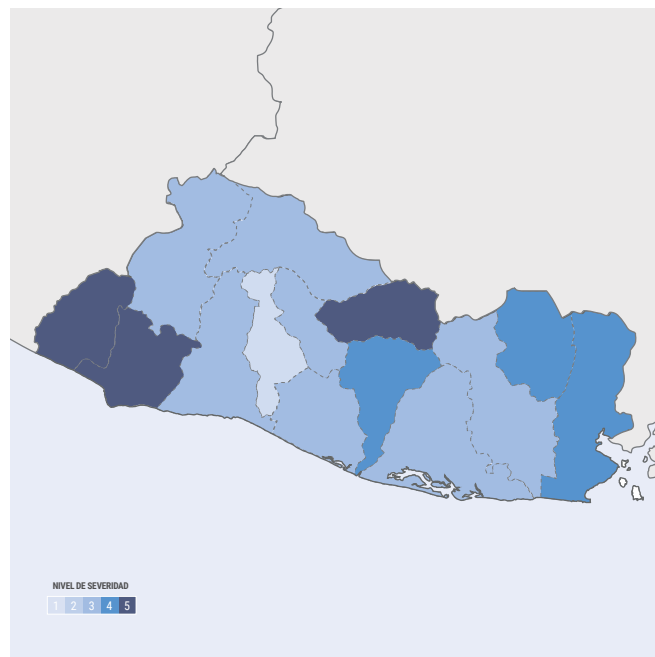
La presencia de redes del crimen organizado vinculadas al tráfico de drogas constituye uno de los factores que incrementan la violencia de género, no solo por la impunidad asociada, sino también por las actividades criminales que vulneran la seguridad de las mujeres, como por ejemplo aquellas actividades mediante las cuales se mercantiliza el cuerpo de las mujeres, promoviendo con ello delitos como la trata y la desaparición⁶⁹.

El Salvador

Personas en necesidad



Severidad



65 Dirección General Estadísticas y Censos, 2019.

66 La Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV); la cual, establece que la violencia sexual es "toda conducta que amenace o vulnere el derecho de la mujer a decidir voluntariamente su vida sexual; comprendida en esta, no solo el acto sexual, sino toda forma de contacto o acceso sexual, genital o no genital, con independencia de que la persona agresora guarde o no relación conyugal, de pareja, social, laboral, afectiva o de parentesco con la mujer víctima."

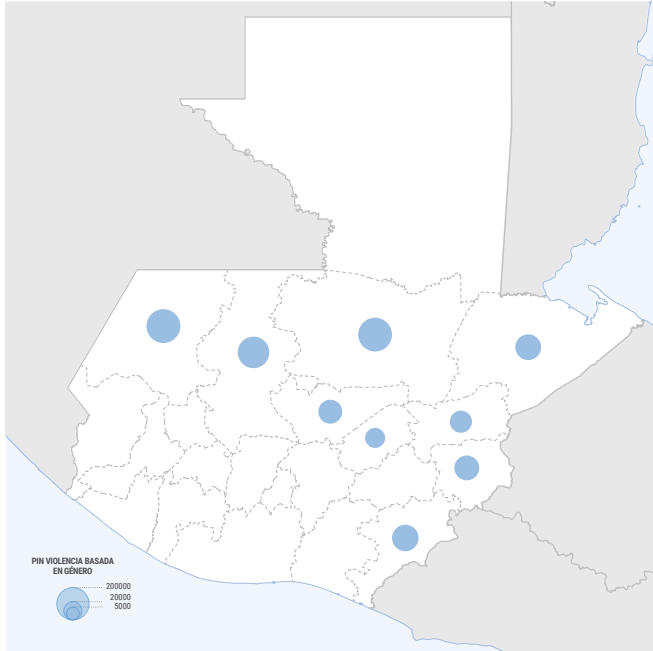
67 Informe de veeduría social sobre la calidad en los servicios de atención en las instituciones de acceso a la justicia Intibucá, La Esperanza, Yamaranguila, Gracias y Distrito Central, CEM-H, 2020.

68 Análisis de seguridad ciudadana Honduras, 2020.

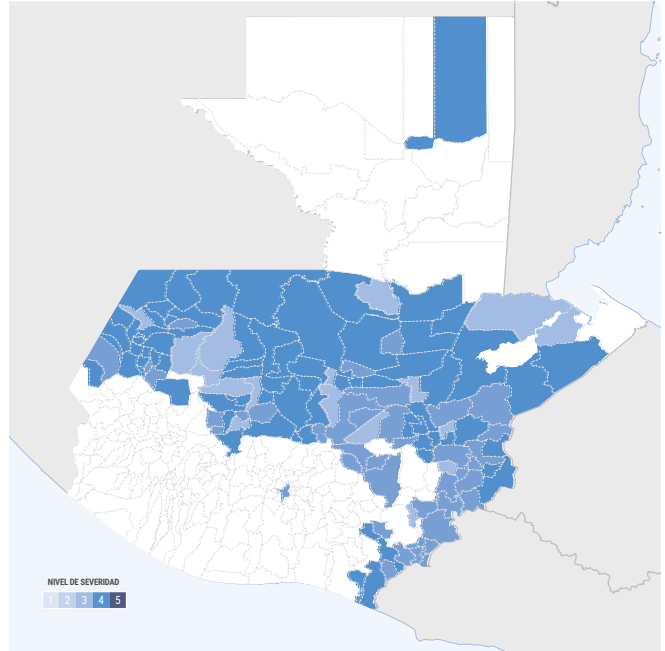
69 <https://infosegura.org/la-cara-escondida/assets/VCM.pdf>

Guatemala

Personas en necesidad

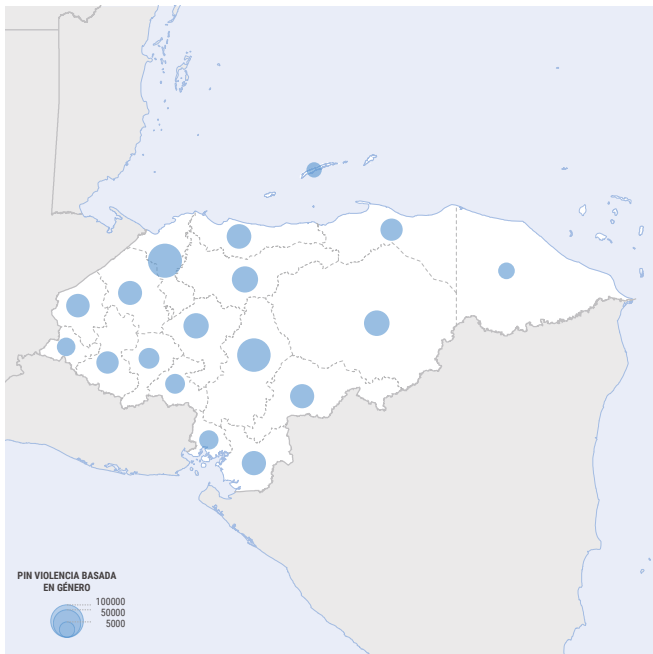


Severidad

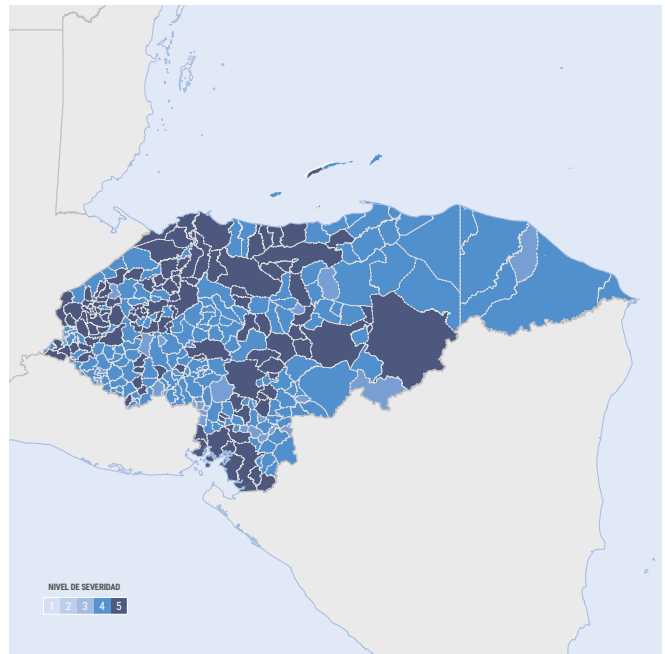


Honduras

Personas en necesidad



Severidad



VBG y Adolescentes

La tasa de embarazos en adolescentes es una señal alarmante de la VBG en este grupo poblacional. La región registra cifras preocupantes de embarazos de niñas y adolescentes, incluyendo más de 98.068 embarazos de niñas y adolescentes reportados en El Salvador entre los años 2015 y 2019⁷⁰, mientras que Honduras registra la tasa de embarazos forzados o tempranos más altas de la región (1 de 4 adolescentes entre los 15 y 19 años ha tenido su primer parto o se encuentra embarazada)⁷¹. En Guatemala, los datos disponibles revelan que enero y agosto de 2020 se registraron 11 embarazos cada día en niñas cuyas edades oscilan entre los 10 y los 14 años, y 10 embarazos cada hora en adolescentes entre los 15 y los 19⁷².

En términos de inclusión educativa, tanto como causa o como efecto del embarazo en la adolescencia, la deserción escolar es un factor fuertemente asociado a la maternidad temprana. En muchos casos, las adolescentes dejan de estudiar y, luego, quedan embarazadas como una búsqueda de completar un proyecto de vida que ha quedado trunco, mientras en otros casos la evidencia muestra que abandonan los estudios al quedar embarazadas.

Proyección de las necesidades

Las sobrevivientes de violencia basada en género presentan necesidades, no solo relacionadas al acceso a servicios esenciales de atención de la violencia, sino también la garantía de otros servicios de protección, salud, transporte, agua y saneamiento, y generación de medios de vida. Durante las tormentas Eta e Iota, los servicios esenciales para la atención de sobrevivientes de violencia sufrieron daños y han visto mermada su capacidad de respuesta, situación que limita poner en práctica los protocolos institucionales de atención, hacer efectiva

la coordinación, dinamizar las redes de apoyo, brindar insumos y asistencia integral a los casos de violencia. Las necesidades de atención y apoyo de las personas sobrevivientes quedan insatisfechas en la mayoría de los casos.

Entre las barreras para acceder a los servicios de VBG, se destacan algunas problemáticas de fondo entre los diferentes proveedores de servicios asociadas con la revictimización de las sobrevivientes, la debilidad en el sistema de referencias y la ausencia de gestoras de casos, la falta de equipos especializados y mujeres que brinden la atención directa a las sobrevivientes, la desconfianza en el sistema de justicia por parte de las mujeres. La falta de servicios especializados por edad, seguros y confidenciales para los sobrevivientes de la violencia de género continúa limitando la posibilidad de los sobrevivientes de buscar ayuda, aumentando los riesgos. Altos índices de impunidad respecto de la violencia de género, en particular para los feminicidios, la violencia sexual practicada, las uniones tempranas, la trata de personas con fines sexuales y la explotación sexual de las mujeres y las niñas generan desconfianza en los mecanismos de prevención y respuesta.

Las mujeres y las niñas del grupo étnico garífuna continúan enfrentando diariamente actos directos de discriminación por su afro descendencia. Las comunidades garífunas no cuentan con mecanismos de respuesta ante sus necesidades, ni servicios de atención a la VBG, por lo que es solamente a través de las organizaciones de mujeres garífunas y defensoras de derechos que se acercan a obtener una respuesta cuando son víctimas y sobrevivientes de VBG.

70 SIMMOW, Ministerio de Salud, 2020.

71 Evaluación anual 2020, departamento de RISS, Región Departamental de Cortés.

72 Ciporndeni 2020. <https://www.ciporndeni.org/tableau/registro-de-embarazos-en-ninas-y-adolescentes-de-10-a-19-anos-de-edad/>

Indicadores

#	INDICADOR REGIONAL	FUENTE
1	Disponibilidad de servicios básicos especializados con enfoque diferenciado para las personas LGBTQ+ (Apoyo psicosocial, Atención médica).	Mapeo de Servicios a nivel nacional del Subcluster de VBG, 2021
2	Mujeres que reportan barreras para el acceso a ingresos económicos.	Encuesta Permanente de Hogares de propósitos múltiples
3	Disponibilidad de servicios básicos especializados para la violencia de género por cada 5.000 personas.	Encuesta directa a Oficinas Municipales de la Mujer, 2021
4	% Niñas y Adolescentes embarazadas.	Ministerio de Salud

3.1.2

Protección a la Niñez



POBLACIÓN EN NECESIDAD (PIN) TOTAL	POBLACIÓN EN NECESIDAD GUATEMALA	POBLACIÓN EN NECESIDAD HONDURAS	MUJERES (CUIDADORAS)	NIÑOS Y NIÑAS	PERSONAS CON DISCAPACIDAD
903k	601k	302k	7%	92%	1%

Problemas comunes por los grupos vulnerables

Los niños, niñas y adolescentes en el NCA

Están expuestos a riesgos ante las distintas manifestaciones de violencia como lo pueden ser la violencia generada por grupos armados, violencia sexual, el incremento de violencia intrafamiliar e institucional presentando un incremento relevante a causa de las condiciones de hacinamiento, pobreza y el cambio de rutina (cierres de escuelas como entorno protector) generado socialmente producto de las condiciones adversas de la pandemia de COVID-19 y las emergencias producidas durante el 2020, como lo fueron los huracanes Eta e Iota.

La situación humanitaria por la que atraviesa la niñez y adolescencia se presenta cada día más compleja, al existir en estos países grupos criminales como son las maras o pandillas que buscan el reclutamiento y utilización forzada de niños, niñas y adolescentes para que puedan ser parte de estas estructuras y cometer delitos, como robos, hurto, violaciones y

asesinatos al interior y exterior de las comunidades, siendo mayormente afectados los municipios más vulnerables.

Estas condiciones hacen que la niñez y adolescencia vean la migración y el desplazamiento como la mejor o única opción para salvar su vida, sin estar conscientes de los riesgos que enfrentarán durante su travesía.

Por otra parte, aquellas familias que no tienen ni el más mínimo recurso para viajar, optan por generar desplazamientos internos y la búsqueda de un nuevo comienzo limitando más su condición económica y donde la niñez, se vuelve parte de la búsqueda de pequeñas economías optado por trabajar.

En estos contextos la niñez se enfrenta a violencias, desintegración familiar, exposición a trata y tráfico de personas, pérdida de su rutina, oportunidades de recreación en entornos seguros, trabajo infantil, separación y deserción escolar, muerte o asesinato de sus padres o familiares, confinamiento por

condiciones de COVID-19. Esto ha influido en que la niñez incrementa su angustia, miedo a ser separados de sus familias, depresión al no tener un plan de vida, aumentos de las tensiones dentro del hogar, la falta de apoyo emocional a nivel familiar o el aumento de la violencia física, emocional o sexual.

Análisis de las necesidades humanitarias (enfocándose los mismos vulnerables)

La violencia y la utilización de los niños, niñas y adolescentes por parte de maras y pandillas presenta un incremento de las cifras y es el principal factor que obliga a las familias a huir de sus hogares, desplazarse y abandonar la asistencia a las escuelas. En Honduras, según fuentes oficiales, un 4.5 por ciento de las víctimas de los homicidios reportados en el 2020 fueron personas menores de 18 años⁷³.

Según el Estudio de Caracterización de la Movilidad Interna a Causa de la Violencia, entre 2006 y 2016, del 1.1 por ciento (aproximadamente 71.500 personas) de las familias residentes en El Salvador, al menos uno de sus integrantes se vio obligado a cambiar su lugar de residencia habitual como resultado de hechos de violencia o para evitar sus efectos⁷⁴.

La violencia sexual, especialmente en niñas y adolescentes, es otra de las necesidades persistentes en los tres países. A modo de ejemplo se puede señalar la situación de Guatemala donde del total de delitos cometidos contra la niñez durante el año 2020 (que suman 9.089), la mayoría constituye casos graves de maltrato (en un 30 por ciento) y casos de violencia sexual (en un 20 por ciento).

El confinamiento debido a la pandemia COVID-19 y la pérdida de medios de vida tras las tormentas tropicales Eta e Iota agudizaron los problemas económicos y deterioro la situación socioeconómica de las familias, generando un incremento de niñez en situación de calle, trabajo infantil, explotación sexual

comercial y mendicidad como formas de buscar la subsistencia.

La migración y el desplazamiento forzado son también considerados para muchos niños, niñas y adolescentes como las únicas opciones para huir de las distintas manifestaciones de violencia a los que se ven expuestos en sus comunidades, familias y escuelas. En consecuencia, muchos deciden emprender la travesía, ya sea con sus familias-encargados o niñez no acompañada, como lo muestra el incremento en 28 por ciento de los casos de niñez no acompañada presentada en los reportes sobre aprensiones en la frontera entre México y Estados Unidos donde la prevalencia del origen es del Norte de Centroamérica⁷⁵.

Proyección de las necesidades

La pandemia ha impactado los sistemas de protección de la niñez y adolescencia y disminuido o interrumpido los servicios, limitando su acceso y su alcance. En los municipios mayormente afectados por la inseguridad, la violencia, y los efectos de los desastres, se mantendrá la tendencia de incremento y falta de atención a las necesidades de protección, en servicios tales como apoyo psicosocial, atención legal, identificación y reunificación familiar, manejo de casos, respuesta a la VBG, provisión de espacios seguros, entre otros, que cuenten con una respuesta integral y multidimensional.

Es necesario abordar las distintas necesidades de protección mencionadas, a través del fortalecimiento de los entornos protectores basados a nivel familiar, comunitario, escolar y de atención interinstitucional, por medio de la provisión de servicios especializados desde los sistemas de protección de la niñez y la sociedad civil, teniendo un énfasis en sistemas de protección de la niñez locales y municipales para que la oferta de servicios sea más pertinentes, inclusivos, de calidad y con un alcance inmediato.

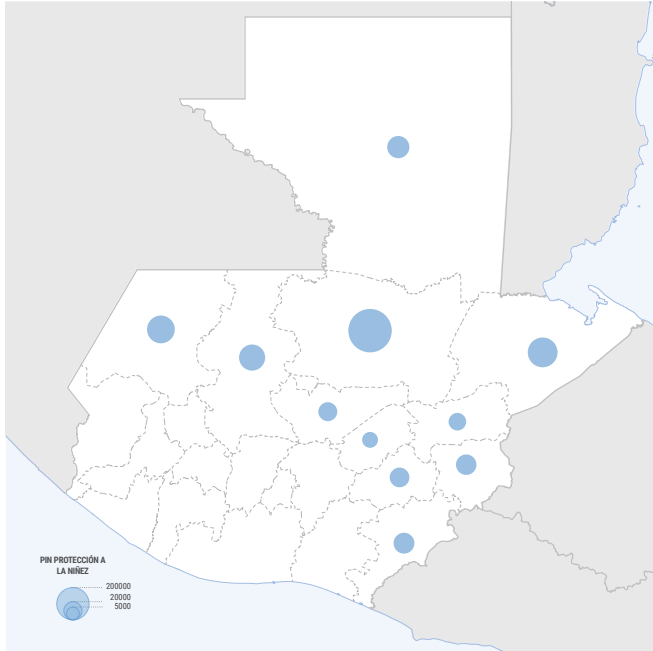
73 <https://www.sepol.hn/artisistem/images/sepol-images/files/info.jpg>

74 Para mayor información visitar: <https://www.refworld.org/es/pdfid/5ab96d624.pdf>

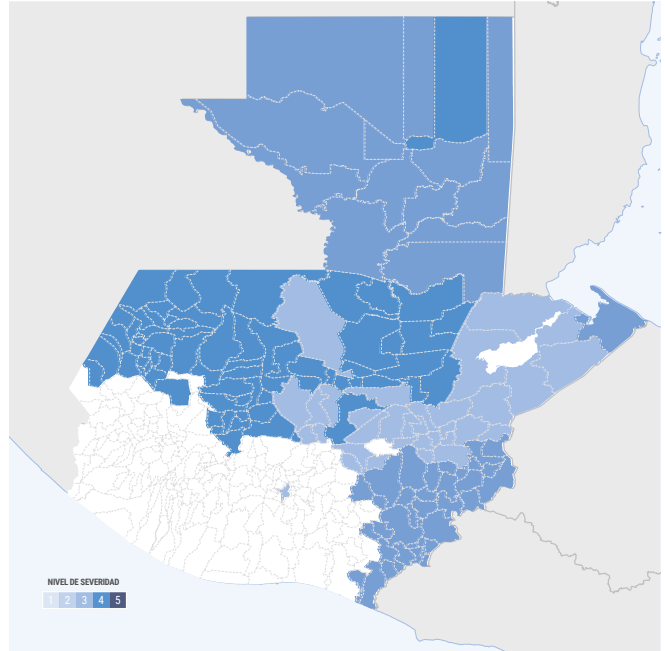
75 Customs and Border Protection Agency (CBP) detention centers in US cities bordering Mexico.

Guatemala

Personas en necesidad

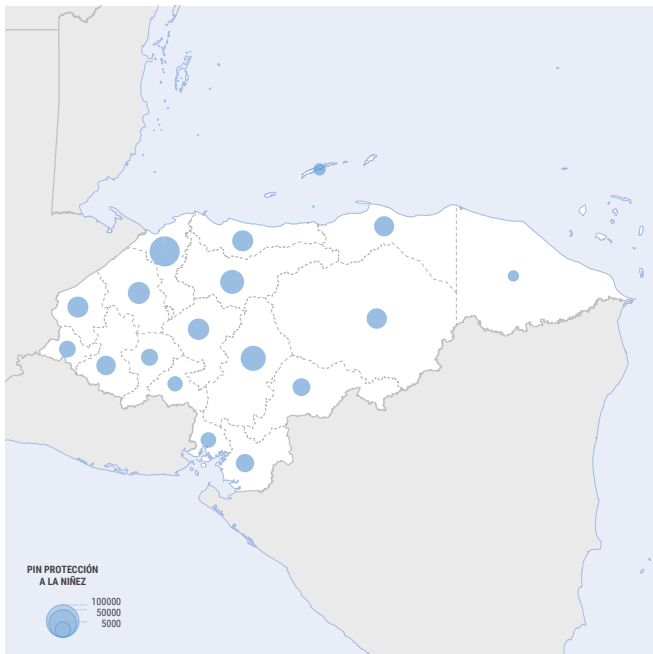


Severidad

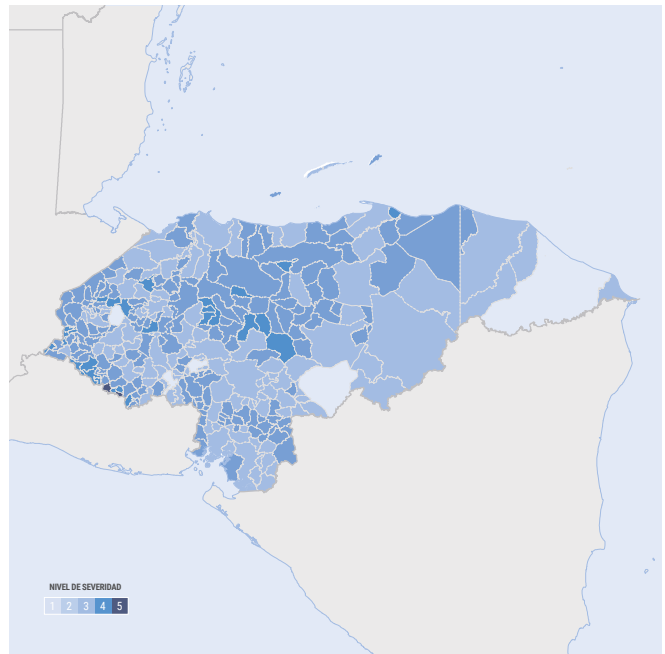


Honduras

Personas en necesidad



Severidad



Será determinante aumentar la participación de los niños, niñas y adolescentes en la discusión de los problemas que afectan sus vidas. Trabajar en la priorización de programas que fortalecen los sistemas de protección, incluida la gestión de casos, apoyar espacios de calidad adaptados a la niñez, incluidos los espacios educativos protectores, abordar las necesidades psicosociales, reflejando

enfoques comunitarios y garantizando la participación adecuada a la edad; además de buscar garantizar que los programas se dirijan a los niños, niñas y adolescentes más vulnerables, incluida la niñez no acompañados y separados, con discapacidad y poblaciones indígenas.

Indicadores

#	INDICADOR REGIONAL	FUENTE
1	Acceso a/ Disponibilidad de servicios básicos de protección de la infancia por área.	Gobierno
2	Cuidadores necesitando apoyo humanitario	Encuesta Permanente de Hogares de propósitos múltiples
3	Tasa de incidencia de violencia hacia la niñez sobre 10.000 pob.	Gobierno

El grupo de trabajo de Protección a la Niñez en El Salvador se formó al final de proceso del HNO y su análisis se incorporará en el HRP.

3.2 Nutrición



POBLACIÓN EN NECESIDAD (PIN) TOTAL	POBLACIÓN EN NECESIDAD EL SALVADOR	POBLACIÓN EN NECESIDAD GUATEMALA	POBLACIÓN EN NECESIDAD HONDURAS	MUJERES	NIÑOS Y NIÑAS	PERSONAS CON DISCAPACIDAD
3,06M	236K	2,3M	530K	22%	78%	2%

Problemas comunes por los grupos vulnerables

Se estima que, en Guatemala, Honduras y El Salvador, 3,06 millones de personas están en necesidad de recibir asistencia humanitaria en nutrición. Este número incluye niños y niñas menores de 5 años y mujeres, sobre todo las mujeres embarazadas y lactantes, que son grupos de población inherentemente vulnerables a la desnutrición en comparación con otros grupos de población debido a sus mayores necesidades nutricionales.

En Guatemala, Honduras y El Salvador, diferentes formas de malnutrición están presentes en la población. La desnutrición crónica (retraso en el crecimiento) es niños y niñas menores de 5 años sigue siendo una de las principales preocupaciones de salud pública y desarrollo en estos países (por ejemplo, en Guatemala el 46.5 por ciento de la población menor de 5 años tiene desnutrición crónica, ENSMI 2015, ocupando el primer lugar de la región con este problema). Los niños y niñas que padecen retraso del crecimiento corren el riesgo de sufrir un desarrollo físico y cognitivo deficiente. También tiene consecuencias intergeneracionales y solo se puede revertir en los primeros 1.000 días de vida. Esto está fuertemente relacionado con las prácticas deficientes de alimentación de lactantes y niños pequeños, lo que significa que las mujeres y los cuidadores no están alimentando de manera óptima a sus bebés y niños pequeños durante los primeros 2 años de vida, incluidas las prácticas de lactancia materna subóptimas, y la falta de dietas adecuadas en términos de calidad y cantidad. Esto también provoca anemia en las niñas y niños pequeños y otras deficiencias

de micronutrientes (por ejemplo, en Honduras 60% de las niñas y niños de 6 a 8 meses tienen anemia - ENDESA 2012). Las niñas y niños pequeños que sufren deficiencias de micronutrientes tienen un mayor riesgo de morir debido a enfermedades infecciosas y un desarrollo físico y mental deficiente. En el corto plazo, estos mismos factores, junto con infecciones recurrentes, son la causa de desnutrición aguda. La desnutrición aguda severa incrementa hasta nueve veces el riesgo de mortalidad en la niñez menor de cinco años y requieren tratamiento inmediato, que en muchas ocasiones no se encuentra disponible de manera inmediata. La nutrición materna es otra preocupación, principalmente debido a las altas tasas de embarazo adolescente: tanto la adolescente como el feto compiten por micronutrientes esenciales, pero que a menudo son escasos. Esta situación, unida a una ingesta y / o absorción insuficiente de nutrientes conduce al nacimiento de bebés con bajo peso al nacer (peso menor a 2500 g), una condición que aumenta el riesgo de mortalidad en el primer año de vida. Por otro lado, las deficiencias de micronutrientes, en particular la anemia, son prevalentes, lo que pone a las mujeres gestantes en riesgo de partos prematuros, complicaciones durante el parto y postparto, en su estado nutricional y de su bebé. Al mismo tiempo, en los tres países se evidencian casos de sobrepeso en todas las edades, incluyendo niños menores de 5 años.

Estos son problemas de nutrición identificados antes de 2020. Desde 2020, Guatemala, Honduras y El Salvador han sido golpeados por diferentes fenómenos: COVID-19, dos grandes tormentas tropicales (Amanda y Cristóbal) y dos huracanes (Eta

e lota) así como la migración, que han impactado el estado nutricional de la población. En el contexto actual, el deterioro del estado nutricional de los niños y niñas menores de 5 años, amenazando con aumentar rápidamente los casos de desnutrición aguda, especialmente en los niños menores de 2 años y exacerbando las deficiencias de micronutrientes que explicarse por diferentes causas: el aumento de la inseguridad alimentaria, reflejada en el acceso limitado a alimentos nutritivos y asequibles (en particular, el acceso a una diversidad de alimentos en cantidad suficiente), el consumo inseguro de agua, acceso limitado a servicios salud y nutrición para prevenir y tratar la desnutrición, entornos insalubres en ciertos casos, prácticas de alimentación subóptimas de los lactantes y niños y niñas pequeños/as, prácticas de cuidado deficientes, la recesión económica, y la pobreza. Por otro lado, el bajo poder adquisitivo exacerbado por la pandemia de COVID-19, ha orillado a las familias a adquirir alimentos de bajo costo, estos siendo alimentos de mala calidad nutricional, como los alimentos ultra-procesados.

Análisis de las necesidades humanitarias

En esta situación, para prevenir el deterioro del estado nutricional y la malnutrición en los niños y niñas menores de 5 años y las mujeres, sobre todo las mujeres embarazadas y lactantes, es de suma importancia asegurar el acceso a intervenciones de nutrición a través de los servicios de salud para abordar urgentemente sus necesidades nutricionales de acuerdo a la edad y condiciones fisiológicas (crecimiento rápido, embarazo o lactancia) para prevenir nuevos casos de malnutrición (incluyendo sobrepeso y obesidad o deficiencias de micronutrientes), identificar y tratar oportunamente la desnutrición aguda y mejorar el estado nutricional para asegurar la supervivencia de los grupos vulnerables.

Sin embargo, la falta de estrategias, lineamientos, y protocolos actualizados y adaptados al contexto COVID-19, dirigidos a abordar las necesidades nutricionales de los niños y niñas menores de 5 años, y mujeres embarazadas y lactantes, crean un vacío importante en el abordaje nutricional oportuno que siga las medidas de prevención de infección a

COVID-19. El vacío también se encuentra en la falta de personal capacitado para realizar intervenciones de nutrición adaptadas a este contexto. Sumado a esto, la falta o la escasez de suministros de nutrición especializados, como el equipo antropométrico y productos de nutrición, ponen en riesgo la identificación oportuna de casos de desnutrición, la prevención y el tratamiento de la desnutrición. Por otro lado, los datos sobre la situación nutricional son escasos o desactualizados ya que la mayoría de las encuestas nutricionales se llevaron a cabo antes del inicio de la pandemia y del impacto de los huracanes, lo que limita la orientación de las decisiones programáticas. El sistema de vigilancia y seguimiento nutricional no tiene las mismas capacidades en los tres países, lo que puede dificultar la identificación y el seguimiento oportuno de los casos de malnutrición.

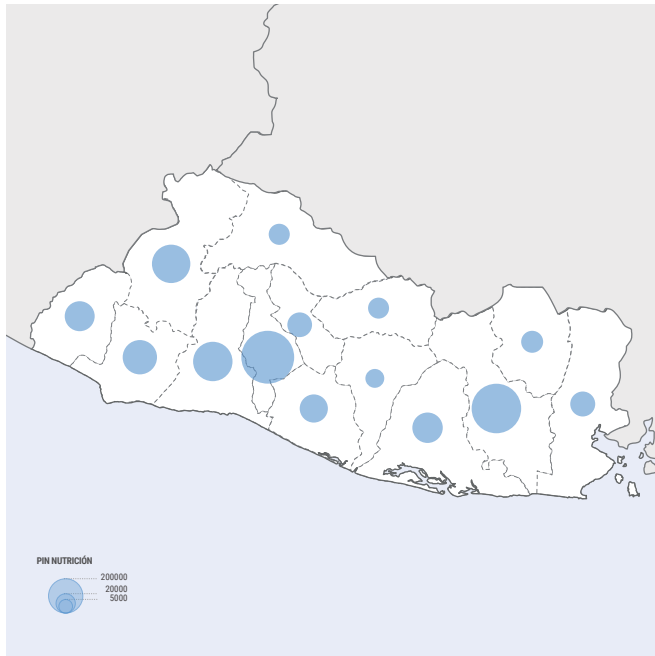
Por otro lado, la coordinación sectorial de nutrición es heterogénea en los tres países, con menores recursos para la coordinación sectorial y el manejo de información en Honduras y El Salvador, donde el sector Nutrición se encuentra bajo el sector Seguridad Alimentaria.

Proyección de las necesidades

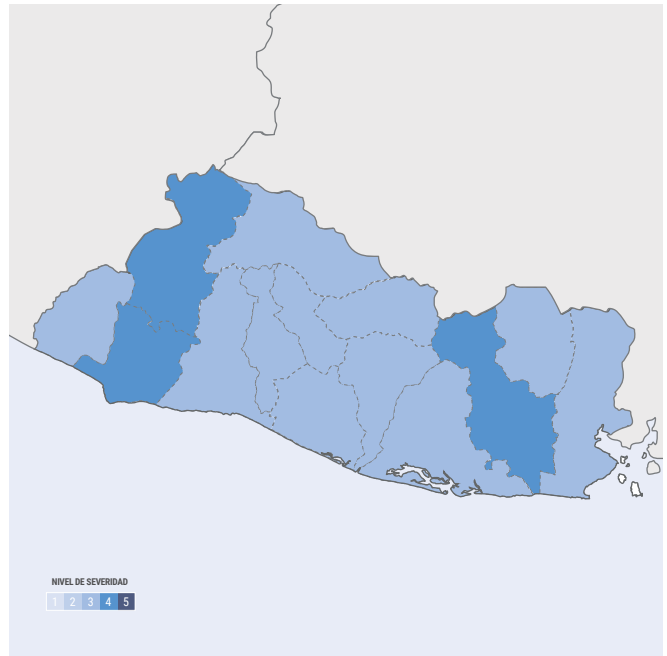
Se espera que la situación nutricional en Guatemala, Honduras y El Salvador se vea influenciada por la dinámica de la pandemia de COVID-19, los flujos migratorios, la magnitud de la situación de seguridad alimentaria y la rapidez de la respuesta humanitaria. Las prácticas inadecuadas de alimentación del lactante y de los niños y niñas pequeño/as, en particular la alimentación complementaria, se verán agravadas por las crisis en curso, junto con la anemia y la malnutrición maternas. Si las necesidades nutricionales no se abordan adecuadamente dentro de los próximos meses, la muerte y la malnutrición seguirá aumentando en los tres países, teniendo efectos devastadores a largo plazo y consecuencias intergeneracionales.

El Salvador

Personas en necesidad

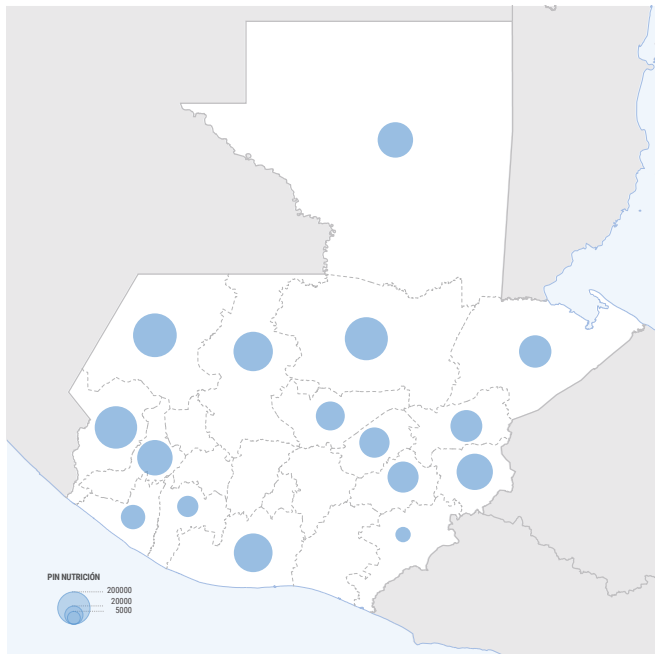


Severidad

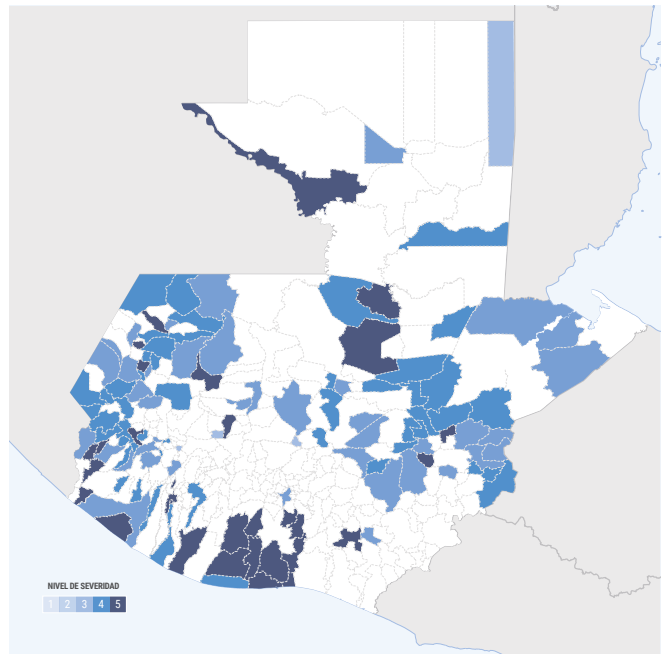


Guatemala

Personas en necesidad

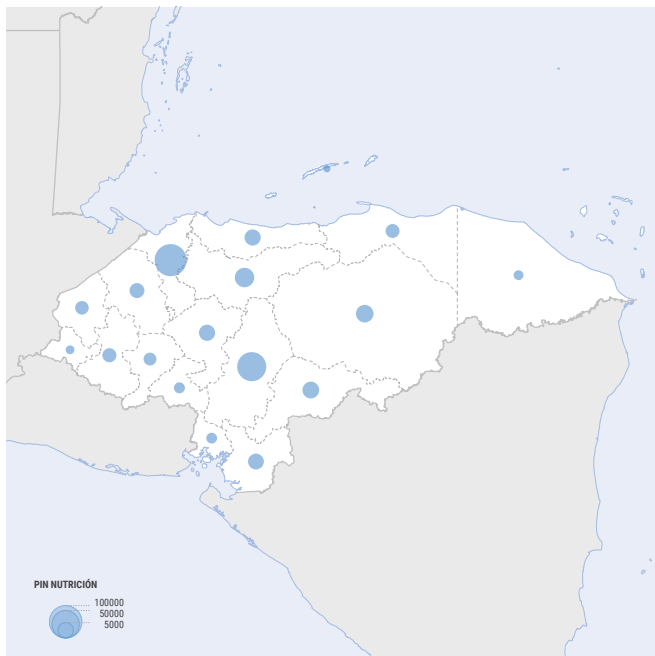


Severidad

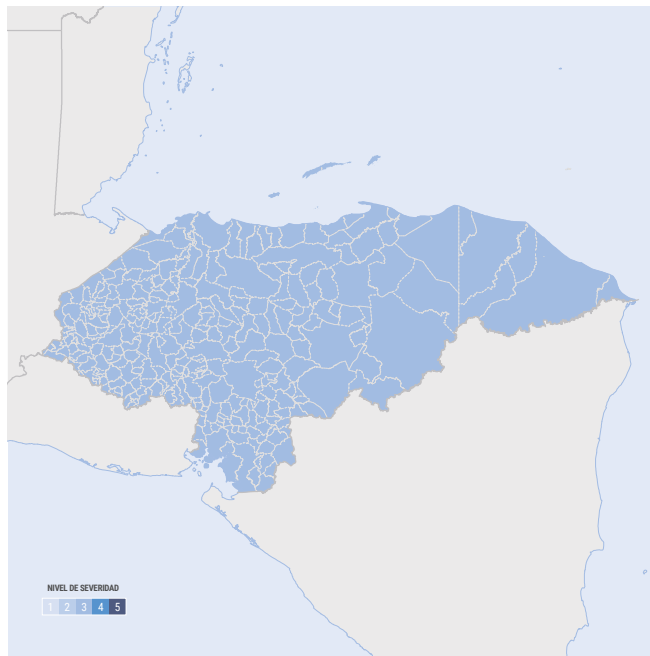


Honduras

Personas en necesidad



Severidad



Monitoreo

El monitoreo de la situación humanitaria y de nutrición se realizará a través de los arreglos acordados entre el Sector Regional de Nutrición y los sectores o estructuras de nutrición establecidas a nivel de cada país. Los tres indicadores de monitoreo seleccionados facilitarán un seguimiento ágil de la evolución de la

situación nutricional de los grupos más vulnerables que son los niños y niñas menores de 5 años y las mujeres embarazadas y lactantes. Permitirán también activar un sistema de alerta temprana en caso de que se observa un incremento inesperado en la detección de caso de desnutrición aguda en menores de 5 años y/o de anemia en mujeres embarazadas.

Indicadores

#	INDICADOR REGIONAL	FUENTE
1	Número de niños y niñas de 0 a 5 meses con lactancia materna exclusiva.	Sectores nacionales de Nutrición
2	Número de niños y niñas menores de 5 años con desnutrición aguda moderada y severa.	Sectores nacionales de Nutrición
3	Número de mujeres embarazadas (15 – 49 años) con anemia.	Sectores nacionales de Nutrición

3.3 Seguridad Alimentaria



POBLACIÓN EN NECESIDAD (PIN) TOTAL	POBLACIÓN EN NECESIDAD EL SALVADOR	POBLACIÓN EN NECESIDAD GUATEMALA	POBLACIÓN EN NECESIDAD HONDURAS	MUJERES	NIÑOS Y NIÑAS	PERSONAS CON DISCAPACIDAD
7,75M	1,04M	3,45M	3,25M	51%	40%	2,6%

Problemas comunes por los grupos vulnerables

De acuerdo con el Reporte Global sobre Crisis Alimentaria (GFCR) 2021, 11,8 millones de personas se encuentran en estado de inseguridad alimentaria aguda en El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y Nicaragua. Alrededor del 65 por ciento de la población de la región en crisis o peor (CIF Fase 3 o superior) se encontraban en los cuatro países centroamericanos de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

Entre los problemas más comunes que han tenido que enfrentar los grupos más vulnerables, se encuentran:

Los eventos climáticos extremos que se dieron en la segunda mitad del 2020, los cuales afectaron más de 8 millones de personas a lo largo de América Central, impactando áreas que ya se encontraban en inseguridad alimentaria y que han venido sufriendo de múltiples años de sequías, como también la pérdida de sus medios de vida y reducción en sus ingresos debido a las restricciones impuestas por la COVID-19 en un contexto de pocas oportunidades laborales, baja remuneración y alta informalidad.

Las repercusiones económicas de la pandemia, que exacerbaban las vulnerabilidades preexistentes, precipitaron una mayor crisis económica y del mercado laboral.

Más de tres cuartas partes de los hogares en el Corredor Seco Centroamericano reportaron reducción en sus ingresos durante el periodo de octubre – diciembre, debido a la pérdida de empleos y la baja rentabilidad en actividades económicas informales.

En 2021, se esperan niveles anormalmente altos de inseguridad alimentaria aguda para Guatemala, Honduras y El Salvador.

Estos factores, junto a la situación de inseguridad y violencia generalizada que viven estos países de la región, tiene un impacto en mantener el ciclo de pobreza en que viven estos hogares. Por ejemplo en Honduras, a raíz de los huracanes Eta e Iota, los grupos criminales supuestamente impidieron que actores humanitarios llegaran a comunidades en necesidad y extorsionaron a la población en general cuando intentaban regresar a sus hogares (NRC, diciembre de 2020).

De manera general, tanto los eventos climáticos del 2020 como la llegada de la pandemia de la COVID-19 a la región ha implicado limitaciones en el transporte para acceder a mercados, lugares de trabajo, y servicios básicos, así como también el alza de los alimentos y del costo del transporte público. Se ha evidenciado sobre todo un alza en el precio de alimentos básicos, principalmente de los granos, afectando el acceso al consumo para la mayor parte de la población que depende de la compra de estos alimentos para su subsistencia.

Análisis de las necesidades humanitarias

En Guatemala, se estima que en 2021 al menos 174.000 personas necesitan asistencia alimentaria de emergencia (Fase 4), dado que no cuentan con los ingresos mínimos para la cobertura de sus necesidades alimentarias diarias, adicionalmente, al

menos 3,3 millones de personas (Fase 3) necesitan asistencia alimentaria complementaria durante 2021. Es importante destacar que entre los sectores más afectados por esta inseguridad alimentaria son los pequeños productores y jornaleros, dado que no cuentan con los adecuados mecanismos de protección social y por tanto están expuestos a los diferentes factores externos, como son los efectos climáticos y/o cambios de los precios de mercado.

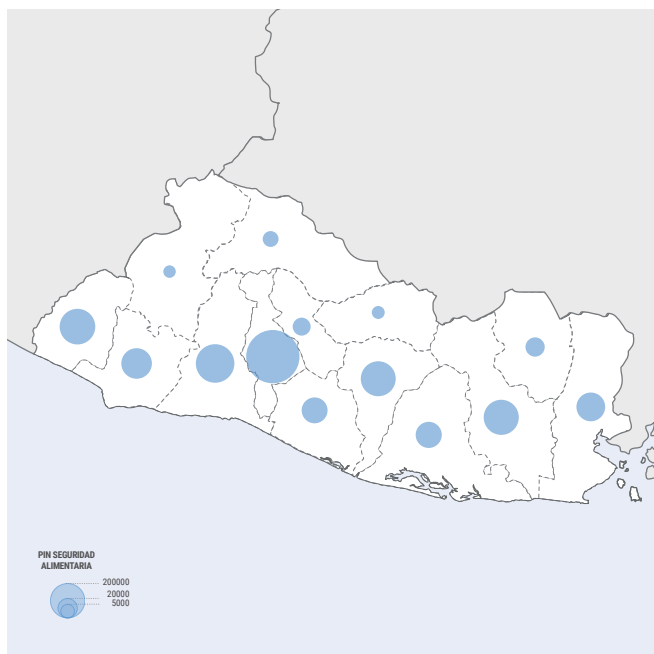
En Honduras, la CIF publicada en diciembre 2020 indica que por lo menos 2,9 millones de personas (31 por ciento de la población clasificada) se encontraba en Crisis alimentaria o peor (Fase 3 o peor de la CIF). Para septiembre de 2021, se espera que 3.248.000 personas se encontrarán en esta misma condición de inseguridad alimentaria aguda. Sin embargo, no sólo se focalizará a en la población en situación aguda de inseguridad alimentaria (616.000 personas en Fase 4), si no también, el resto de las 2.632.000 personas en Fase 3 para evitar una catástrofe humanitaria de gran proporción en la cual uno de cada 3 hondureños y hondureñas estaría en un estado de emergencia de inseguridad alimentaria para el último trimestre del 2021.

Las necesidades más urgentes se centran en la atención inmediata en asistencia alimentaria, ya que debido a los problemas estructurales que ha generado la conjunción de estos eventos el acceso a la población a alimentos mediante auto producción o falta de acceso a los mercados es muy limitada.

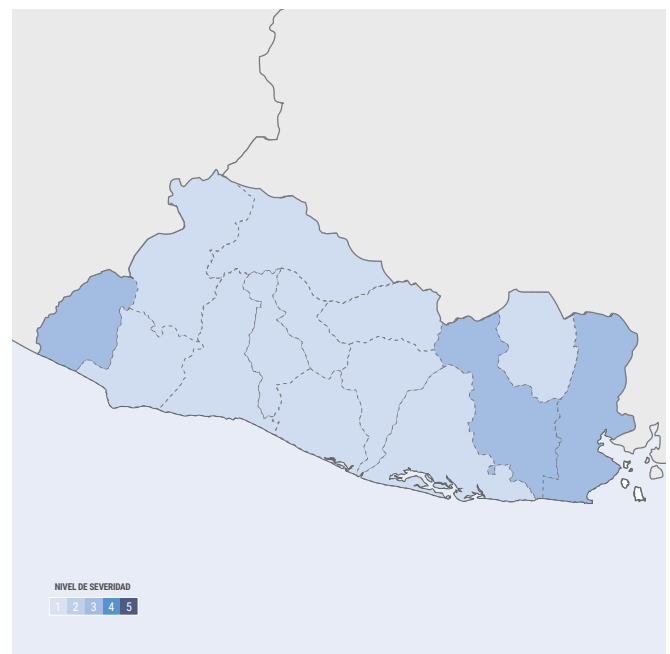
En El Salvador, según el análisis de la Clasificación Integrada de Seguridad Alimentaria en Fases (CIF), en su último informe (diciembre 2020), estimó que, entre los meses de noviembre 2020 a febrero de 2021, 684.000 personas (10 por ciento de la población) se encontraría en crisis alimentaria (fases 3 a más). Siendo Ahuachapán, el departamento con mayor porcentaje de su población en dicha situación. Para el año 2021 y según la primera proyección de la CIF, de marzo a mayo 2021, la población en condición de crisis alimentaria o peor (fases 3 a más) sería de 985.000 personas (15 por ciento de la población) y para el período comprendido entre junio y agosto, según la segunda proyección, el número de personas en inseguridad alimentaria estaría incrementando, estimando que 1.04 millones de personas (16 por ciento de la población) estarían en crisis alimentaria.

El Salvador

Personas en necesidad

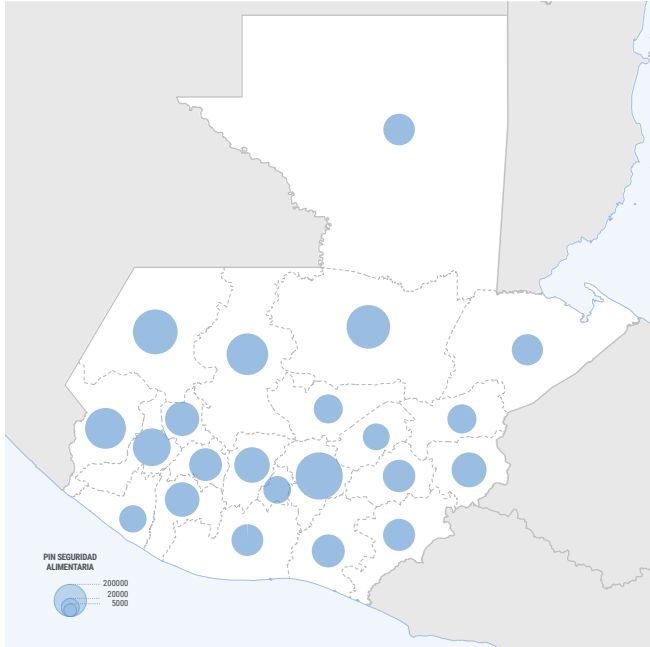


Severidad

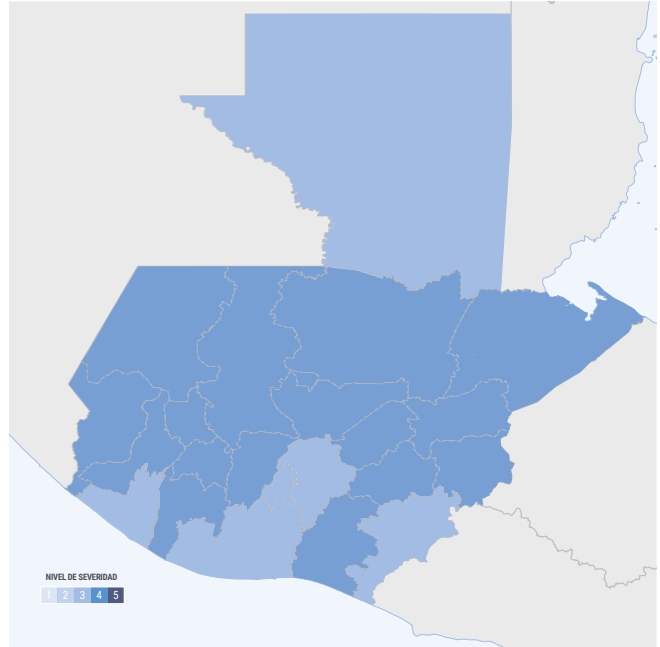


Guatemala

Personas en necesidad

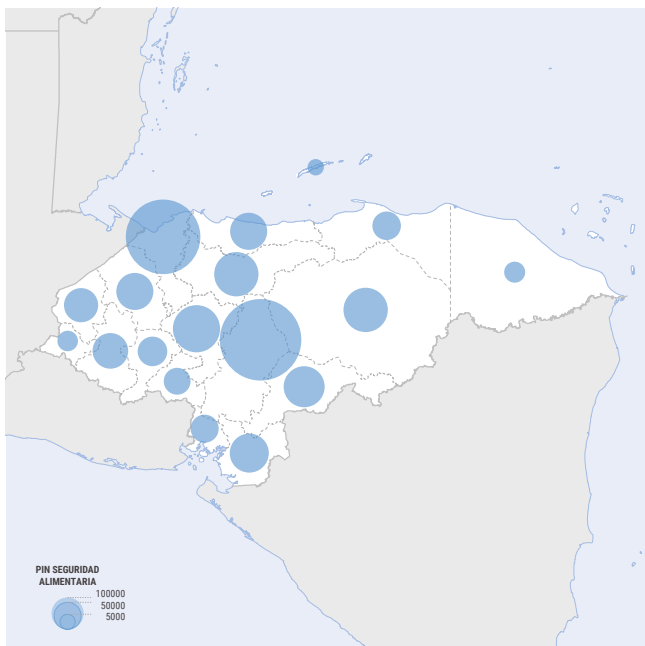


Severidad

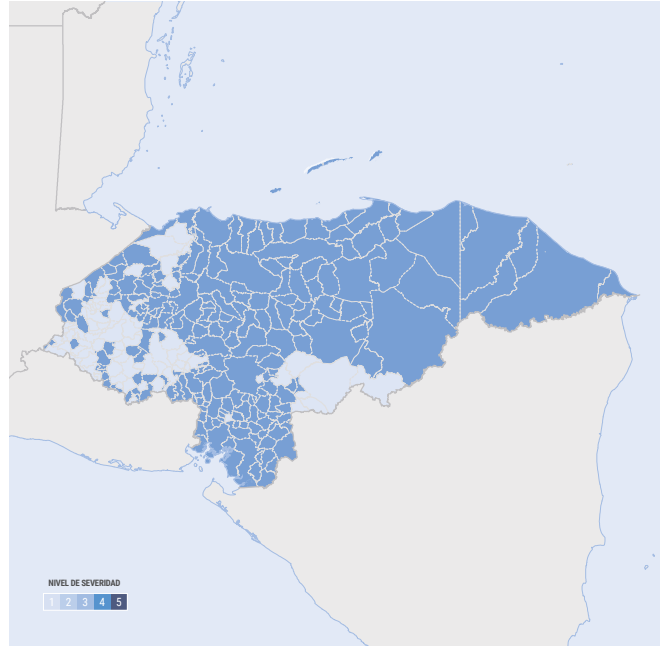


Honduras

Personas en necesidad



Severidad



Proyección de las necesidades

La región enfrenta perspectivas de crecimiento lentas para 2021 y 2022, mientras que se espera que el retorno a los niveles de actividad económica previos a la pandemia tome varios años (OIT/CEPAL, noviembre de 2020). Dada la gravedad de la contracción económica regional en 2020 y una lenta recuperación prevista, se prevé que las tasas de pobreza y desigualdad, y por tanto de inseguridad alimentaria, se mantengan altas en 2021 y 2022, con poco respiro para los hogares con inseguridad alimentaria (CSIS, noviembre de 2020). La situación de inseguridad alimentaria en los tres países tiene un impacto particular en mujeres, niñas, niños y adolescentes, evidenciado en la reducción de la disponibilidad y el acceso a alimentos adecuados con efectos en su salud y bienestar. Reciente Análisis Rápidos de Género indican que el 50 por ciento en Guatemala y el 47 por ciento en Honduras de las mujeres participantes no tenían alimentos asegurados porque perdieron sus granos y cosechas, o no tienen dinero. Dicho informe indica que la disponibilidad y acceso de alimentos es aguda dado que “solamente un pequeño porcentaje, 4 por ciento de mujeres y 11 por ciento de hombres, dijeron no tener dificultad con la disponibilidad de alimentos, lo que significa que la mayoría está teniendo limitaciones grandes que afectará con diferencias importantes a las familias afectadas con jefatura femenina y los hogares con niños menores de 5 años, mujeres lactantes y embarazadas y los adultos mayores, por lo que acciones específicas y prioritarias hacia estos grupos deben priorizarse con urgencia”⁷⁶.

En Guatemala, los pronósticos climáticos, de ser acertados, prevén que el 2021 será propicio para las cosechas de granos básicos, lo que contribuirá a reducir el número de población en inseguridad alimentaria. Si bien la inseguridad alimentaria es casi generalizada, hasta el primer ciclo de cosecha la población más vulnerable estará principalmente ubicada en 16 departamentos. De ser favorables las condiciones climáticas para el segundo

ciclo, estos podrían reducirse a 4 (Huehuetenango, El Quiché, Alta Verapaz y Chiquimula).

En Honduras, después de un comienzo temprano de la temporada, las lluvias irregulares desde finales de abril han llevado a déficits de humedad del suelo en partes del sur de Honduras. Un pronóstico de dos semanas de reducción de las precipitaciones aumenta la preocupación por los impactos negativos en las perspectivas de producción de cultivos en estas áreas. Es probable que las actividades de siembra comiencen a fines de mayo o principios de junio. Se prevén rendimientos más bajos debido al alto costo de los fertilizantes.

En El Salvador, la pandemia de COVID-19 coincidió con una temporada irregular de huracanes y tormentas tropicales. En 2020, el efecto combinado de las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal generó daños por 106,7 millones de dólares (35 por ciento en el sector público y 65 por ciento en el sector privado). Según el Informe del análisis de Inseguridad Alimentaria Aguda de la CIF (Fase 3 de la CIF o peor) El Salvador para el período entre junio y agosto 2021, pasaría a 1,04 millones en esta misma condición.

Monitoreo

Los indicadores a continuación han sido seleccionados entendiendo que son los más pertinentes y por tanto aplicables al contexto de cada uno de los países. Por lo tanto, por medio de ellos, sería posible establecer la situación de seguridad alimentaria de cualquier hogar en la región, monitoreando si la cantidad y la diversidad del consumo de alimentos es estable para todas las personas que integran el hogar. El análisis se complementa observando la utilización de estrategias de afrontamiento de los medios de vida incluyendo la venta de activos productivos, la cuales muestran si el hogar tiene los ingresos necesarios para cubrir su consumo de alimentos, o si debe utilizar estrategias para subsidiarlo.

76 ONU Mujeres y CARE, 2021, Análisis Rápido de Género en Honduras.

Indicadores

#	INDICADOR REGIONAL	FUENTE
1	Estrategia de afrontamiento relativa a los alimentos.	Evaluación de la seguridad alimentaria, Proyectos específicos de Respuesta a Emergencias
2	Nivel de consumo de alimentos.	Evaluación de la seguridad alimentaria, Proyectos específicos de Respuesta a Emergencias
3	Índice de estrategias de afrontamiento relativas a los medios de vida.	Evaluación de la seguridad alimentaria, Proyectos específicos de Respuesta a Emergencias

3.4 Agua, Saneamiento e Higiene



POBLACIÓN EN NECESIDAD (PIN) TOTAL	POBLACIÓN EN NECESIDAD EL SALVADOR	POBLACIÓN EN NECESIDAD GUATEMALA	POBLACIÓN EN NECESIDAD HONDURAS	MUJERES	NIÑOS Y NIÑAS	PERSONAS CON DISCAPACIDAD
4,37M	808K	1,06M	2,5M	51%	43%	2,6%

Problemas comunes por los grupos vulnerables

Los problemas urgentes de la población más vulnerable en los tres países consisten en una reducción o pérdida parcial o total de acceso a servicios y a productos de WASH tanto a nivel de hogar como en el ámbito institucional (centros educativos, establecimientos de salud, mercados, etc.) además de la población que nunca tuvo acceso a dichos servicios. A nivel de servicios WASH la pérdida o daños severos a redes de agua que requieren de inversiones inalcanzables por parte de la comunidad y/o de la municipalidad obligan a la misma población a recurrir a fuentes de agua mejorada más lejanas o a fuentes de agua más cercanas, pero no mejoradas y recaen principalmente en las mujeres y niñas las actividades de recoger el agua. Las reparaciones precarias de las redes parcialmente afectadas (por Eta e Iota) para reestablecer un servicio mínimo vuelven a dañarse rápidamente dado la incapacidad de “build back better” de la comunidad/municipalidad. Las familias que utilizaban pozos que se inundaron no cuentan con equipos para bombear los lodos de las inundaciones y cuentan ahora con agua contaminada. A nivel de saneamiento, el paso de Eta/Iota/Amanda/Cristóbal dañó o destruyó infraestructuras de saneamiento domiciliarias e institucionales aumentando, en consecuencia, la práctica de defecación al aire libre, los riesgos de protección para mujeres, niñas y adolescentes y el deterioro de su dignidad y acceso a materiales y servicios de higiene y salud menstrual.

Según el Análisis Rápido de Género, tan sólo el 35 por ciento de mujeres en Honduras y el 31 por ciento en Guatemala afirmó tener acceso a agua potable permanentemente. En Honduras, “la mayoría de los albergues que se visitaron cuentan con sistema de agua potable y servicios sanitarios, sin embargo, el 50 por ciento de las mujeres dijeron que la cantidad de agua no es suficiente para cubrir todas las necesidades que tienen ellas y sus familias. Además, expresaron que el agua que reciben es la misma que utilizan para el aseo personal, cocinar y beber”, con repercusiones en su salud⁷⁷. La recesión económica debido a la COVID y a las tormentas y huracanes del 2020 afectó, también, el poder adquisitivo de los hogares reduciendo la compra de productos como el jabón para el lavado adecuado de las manos o reduciendo el acceso a cloro a nivel rural por las restricciones debido a la pandemia y el aumento del precio en el mercado. También, numerosas familias perdieron todos sus bienes y pertenencias cuando se inundaron y/o destruyeron sus casas. En un contexto de baja cobertura de servicios WASH en los territorios rurales de la región y de menores prácticas de higiene y mayor vulnerabilidad precrisis, estas afectaciones socioeconómicas y naturales amplifican la morbilidad y mortalidad por enfermedades de origen hídrica las cuales afectan a todos los grupos de población vulnerable⁷⁸ afectados y sus comunidades de acogida - muchas veces vulnerables también - y pueden resultar en detrimento de la salud y nutrición de mujeres

77 ONU Mujeres y CARE, 2021, Análisis Rápido de Género en Honduras.

78 En Quiche, Guatemala, la tasa de pobreza rebasa el 74%, con altos índices de desnutrición y carencia de condiciones económicas.

embarazadas, desnutrición crónica, desnutrición aguda severa y hasta la muerte en los niños y niñas⁷⁹.

Los problemas a medio plazo de los grupos vulnerables se basan principalmente en su incapacidad a recuperarse del impacto de las múltiples crisis sufridas y a volverse menos resilientes frente a la próxima crisis cayendo progresivamente en pobreza o pobreza extrema y siendo propensos a una migración nacional o internacional en la cual las condiciones de WASH y los riesgos vinculados a protección pueden ser mayores. Una razón de esta caída en pobreza, entre otras, es que los servicios de agua son diseñados para la provisión de agua para consumo humano cuando deberían ser de propósito múltiple, incluso agua para permitir a las comunidades la producción de alimentos de subsistencia (huertos familiares) y de generación de ingresos fundamentales para prevenir la pobreza y pobreza extrema y poder asumir los gastos de un saneamiento domiciliario básico y compra de productos/insumos indispensables a la higiene (jabón, toallas higiénicas, etc.), la desinfección de superficies y EPP.

Análisis de las necesidades humanitarias

Las necesidades inmediatas de los grupos más vulnerables afectados y sus comunidades/familias de acogida son: 1) asegurar la provisión de servicios básicos WASH en los albergues (formales y no formales), 2) reparación de sistemas de agua, limpieza y desinfección de pozos con instalación de bombas manuales y sobre elevación para prevenir futuras inundaciones, 3) empoderamiento comunitario y cambio de normas sociales a través de la facilitación de un abordaje de autoconstrucción de baños -o el buen manejo de los baños existentes- para eliminar la contaminación fecal comunitaria, la construcción y uso de puntos de lavado de manos y el tratamiento y almacenamiento seguro de agua en el hogar; abordaje SAHTOSO⁸⁰, u otras metodologías implementadas como la ESCASAL⁸¹ 4) la rehabilitación de los servicios WASH en los centros educativos dañados (por las últimas tormentas/huracanes o por

haber sido utilizados como albergues) y de aquellos históricamente no dotados de servicios, 5) provisión de kits de higiene (en especie, cupones/transferencia de efectivo) adaptados a las necesidades de género, de edades y de situación (ej.: caminantes vs. no caminantes) en albergues y en familias de acogida, 6) provisión de insumos esenciales (cloro, EPP, etc.) a los operadores de sistemas de agua, 7) capacitación/promoción de las buenas prácticas de higiene en el hogar, los centros educativos y establecimientos de salud en situación de emergencia sanitaria en el marco de una estrategia de comunicación de riesgo orientada a las buenas prácticas de higiene y al cuidado de las instalaciones sanitarias.

Las necesidades a medio plazo de los grupos más vulnerables afectados y sus comunidades/familias de acogida son: 1) reconstrucción de nuevos sistemas de abastecimiento de agua de uso múltiple y resilientes al clima, perforación de pozos estratégicos resilientes al clima con instalación de bombas manuales para comunidades que no cuentan con pozos de agua apta para consumo humano y capacitación a la gestión sostenible del servicio, 2) empoderamiento comunitario y cambio de normas sociales a través de la facilitación de un abordaje de autoconstrucción de baños o el buen manejo de los baños existentes para eliminar la contaminación fecal comunitaria, la construcción y uso de puntos de lavado de manos y el tratamiento y almacenamiento seguro de agua en el hogar; abordaje SAHTOSO⁴, 3) la rehabilitación y mejora de servicios WASH resilientes al clima en los centros educativos dañados (por Eta/Iota o por haber sido utilizados como albergues) con alta prioridad hacia instalaciones de lavado de manos, 4) Capacitación/promoción de las buenas prácticas de higiene en el hogar, los centros educativos y establecimientos de salud en el marco de una estrategia permanente de comunicación sobre el riesgo, y 5) tratamiento adecuado de los desechos sólidos y control de vectores de interés sanitario.

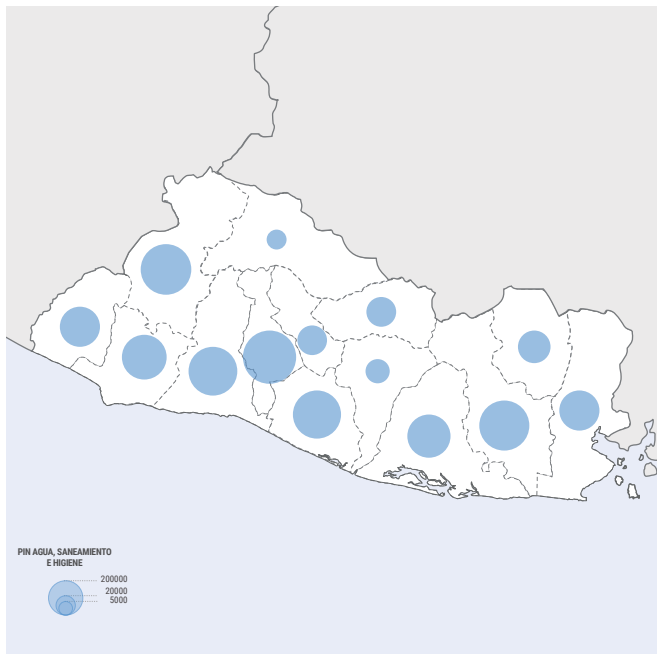
79 Según los reportes anuales del MINSAL de El Salvador, la diarrea de presunto origen infeccioso ha sido la tercera causa de consulta en menores de 5 años desde el 2014 al 2019. En ALC, diarrea es la tercera causa de muerte de los niños menores de 5 años.

80 Ver definición de instalaciones sanitarias mejoradas en JMP, www.washdata.org, Definición p8. Para asegurar el fin de la contaminación fecal a nivel comunitario se recomienda implementar el abordaje SAHTOSO o ESCASA.

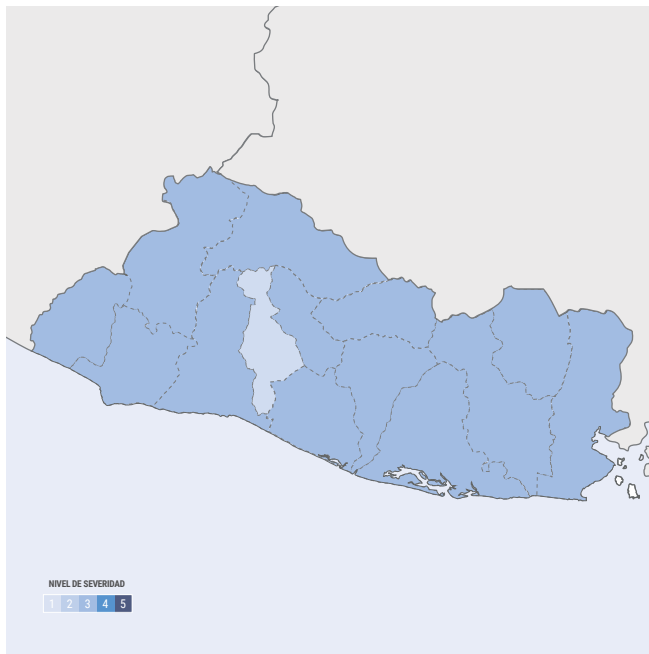
81 La metodología ESCASAL se basa en las metodologías SARAR y PHAST (Transformación Participativa para la Higiene y el Saneamiento).

El Salvador

Personas en necesidad

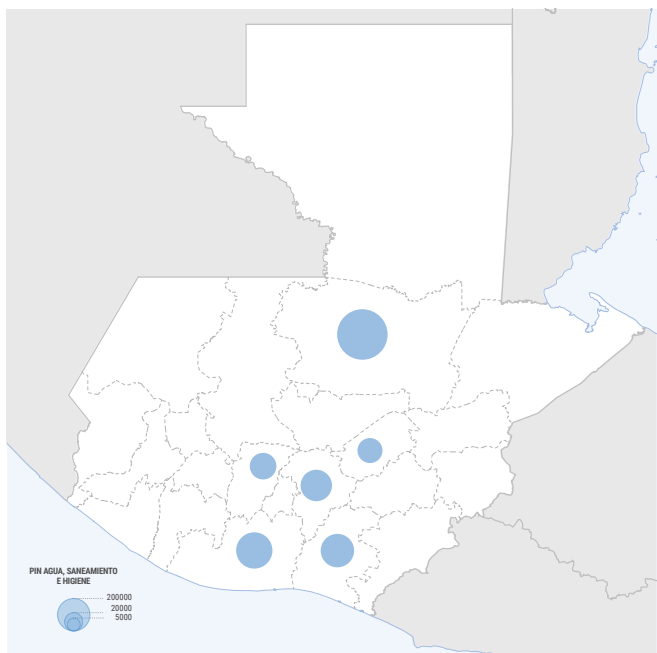


Severidad

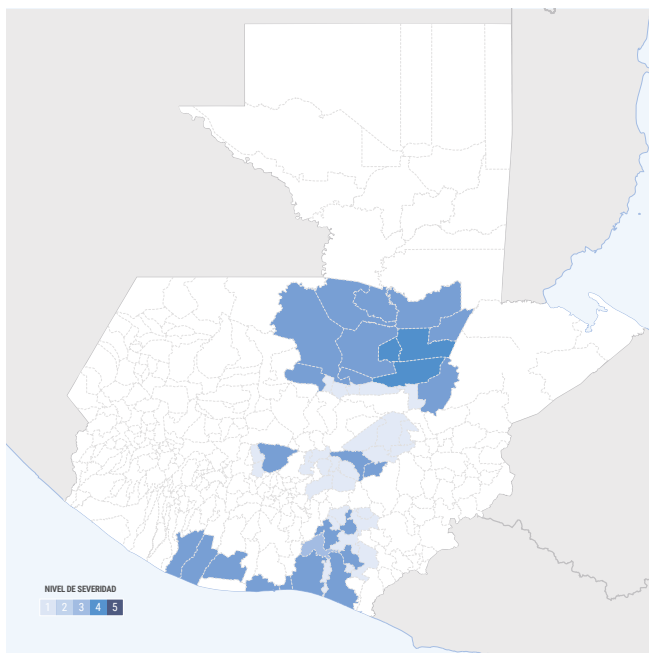


Guatemala

Personas en necesidad

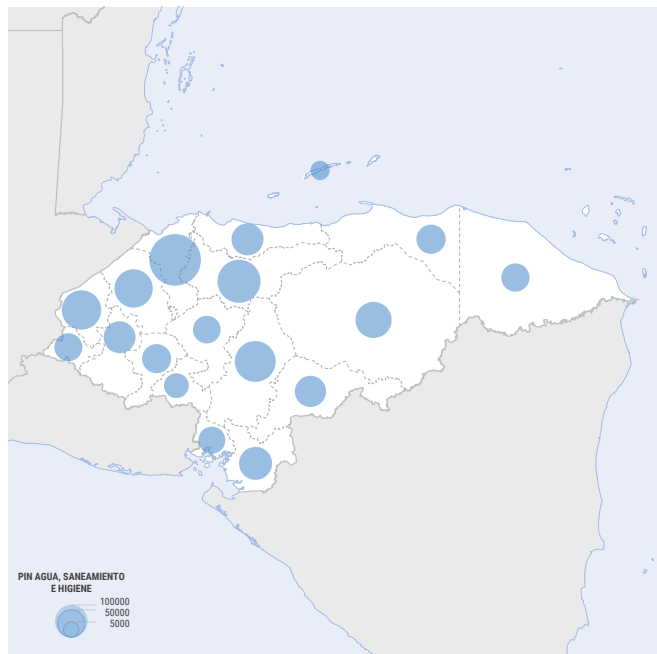


Severidad

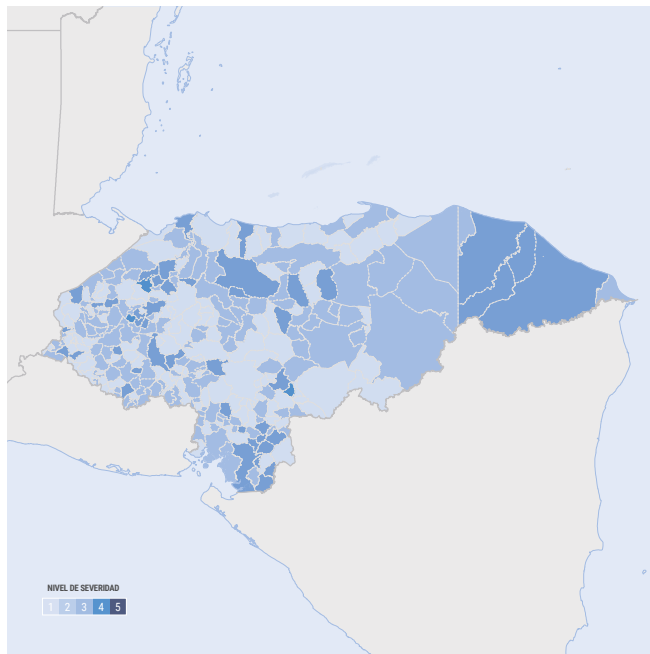


Honduras

Personas en necesidad



Severidad



Proyección de las necesidades

Dado la vulnerabilidad de la región y su exposición a múltiples amenazas, de no atender a tiempo y de manera integral las necesidades humanas identificadas en la sección anterior, estas mismas necesidades aumentarán en las comunidades que serán nuevamente afectadas por eventos climáticos severos (inundaciones, tormentas, huracanes, sequía) u otros (erupciones volcánicas, maremoto), por emergencias de salud pública (COVID, dengue, etc.), por migración y por afectaciones múltiples.

La situación de los prestadores de servicio de WASH, impactados por la baja recaudación debido a la COVID son aún más vulnerables y propensos a bajar la calidad (cantidad y calidad) de sus servicios generando crisis locales de suministro y sus correlativos impactos sobre, salud, nutrición y dignidad.

El cierre de escuelas debido a la emergencia sanitaria COVID-19 y el subsecuente retorno a las

escuelas representan una necesidad imperiosa para el desarrollo de la niñez y de las naciones y la lucha contra la pobreza y extrema pobreza y deja de manifiesto la necesidad imperante de contar con servicios de WASH de calidad. Por tanto, es necesario asegurar que los establecimientos educativos que reciben a los grupos vulnerables cuenten de manera urgente con al menos sistemas básicos de lavamanos con agua y jabón.

En cuanto a las capacidades de respuesta en emergencia sectoriales del país, si bien la respuesta a las tormentas y huracanes del 2020 ha contribuido a mejorar las mismas, siguen existiendo necesidades en cuanto al fortalecimiento de las capacidades técnicas y financieras institucionales, tanto a nivel nacional y departamental, como local.

La mayoría de las reparaciones en los sistemas WASH efectuadas después de las tormentas y huracanes del 2020 se han realizado de manera temporal y

con medios locales limitados. Esto supone, que la resiliencia de estos está comprometida, pudiendo ser fácilmente afectados estos sistemas por eventos meteorológicos mínimos, dejando nuevamente a la población sin los servicios WASH esenciales.

La necesidad de reconstruir mejor, o “Build Back Better”, implicará mayores inversiones en sistemas de agua potable que sean resilientes al clima, que van más allá de la simple rehabilitación o reposición del servicio, lo que constituye un factor importante a considerar en las inversiones.

Indicadores

#	INDICADOR REGIONAL	FUENTE
1	Número de personas con saneamiento mejorado ⁸² .	Coordinación nacional WASH en emergencia
2	Número de personas con acceso a una fuente de agua mejorada ⁸³ .	Coordinación nacional WASH en emergencia
3	Número de personas que recibieron servicios e insumos de higiene apropiados (mensajes, productos, servicios) incluyendo las necesidades de higiene menstrual a través de entregas en especie, cupones o transferencias de efectivo.	Coordinación nacional WASH en emergencia

82 Ver definición de instalaciones sanitarias mejoradas en JMP, www.washdata.org, Definición p8. Para asegurar el fin de la contaminación fecal a nivel comunitario se recomienda implementar el abordaje SAHTOSO o ESCASAL.

83 Ver la definición de fuentes mejoradas de agua según el JMP, www.washdata.org, Definición p8.

3.5 Salud



POBLACIÓN EN NECESIDAD (PIN) TOTAL	POBLACIÓN EN NECESIDAD EL SALVADOR	POBLACIÓN EN NECESIDAD GUATEMALA	POBLACIÓN EN NECESIDAD HONDURAS	MUJERES	NIÑOS Y NIÑAS	PERSONAS CON DISCAPACIDAD
4,13M	998K	930K	2,2M	50% [▲]	25% [■]	2%

▲ (25% de la población total corresponde a mujeres en edad reproductiva)
 ■ (19% de la población total corresponde a adolescentes entre 10-18 años)

Problemas comunes por los grupos vulnerables

La alta visibilidad de la pandemia y otros desastres socio-naturales generalizados ha eclipsado la constante crisis humanitaria en Centroamérica, una subregión que a lo largo de los años ha experimentado eventos de pequeña y mediana escala de origen natural y antropogénico. La incidencia acumulada de estos eventos ha resultado en una emergencia de salud en varios países con varias corrientes de impacto en la vida y el bienestar de las poblaciones más vulnerables.

En 2020 y 2021, los hechos más notorios que afectaron a la región fueron los delitos violentos y la inseguridad; migraciones masivas; eventos relacionados con el clima, incluidas olas de calor, sequías severas y tormentas con potencial impacto en el sector salud; aumento de la incidencia de enfermedades infecciosas endémicas como el dengue; el aumento de las tasas de infección por COVID-19; e inseguridad alimentaria prolongada y crisis nutricional.

La sucesión de eventos ha impactado no solamente la salud y bienestar físico de las poblaciones en riesgo, sino también la salud mental de los equipos médicos y comunidades en general. Las crecientes necesidades insatisfechas en temas de salud sexual y reproductiva se traducen en un incremento de los embarazos adolescentes, mortalidad materna, y violencia sexual en los municipios afectados. El impacto de eventos

climáticos, violencias, y condiciones sociopolíticas inestables ha generado migraciones internas con consecuencias en un mayor riesgo de enfermedades transmisibles y de acceso a servicios esenciales de salud. La pandemia de COVID-19 está provocando un aumento de las desigualdades, con un incremento del índice de desigualdad de Gini en la mayoría de los países de la región⁸⁴. Se evidencia la interrupción de los servicios en todas las áreas prioritarias de salud: salud reproductiva, materna, neonatal, infantil y adolescente; enfermedades no transmisibles; enfermedades tropicales desatendidas; enfermedades transmisibles, inmunización y servicios para trastornos de salud mental, neurológicos y por uso de sustancias⁸⁵.

Análisis de las necesidades humanitarias

Como consecuencia del impacto de recurrentes emergencias en comunidades altamente vulnerables a lo largo de la costa caribeña centroamericana, aún se necesitan acciones humanitarias urgentes en 2021 para garantizar la disponibilidad de atención médica urgente, condiciones adecuadas de WASH, mayor vigilancia epidemiológica y control de vectores.

La severidad de la pandemia de COVID-19 ha conllevado a una reorientación de los escasos recursos disponibles para el sector salud hacia el fortalecimiento de las capacidades de diagnóstico, prevención y control de

84 Fuente: Desigualdad y descontento social: Cómo abordarlos desde la política pública. Informe económico sobre Centroamérica, Haití, México, Panamá y República Dominicana. BID, 2020. <https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Desigualdad-y-descontento-social-Como-abordarlos-desde-la-politica-publica-Informe-economico-sobre-Centroamerica-Haiti-Mexico-Panama-y-Republica-Dominicana.pdf>

85 Segunda ronda de la encuesta nacional sobre la continuidad de servicios esenciales de salud durante la pandemia de COVID-19: enero-marzo 2021 (OPS/OMS).

infecciones, así como el manejo de casos. En los tres países del NCA se reporta un marcado desgaste de insumos, medicamentos y recursos esenciales para poder hacer frente a otras enfermedades endémicas en estas regiones y que, de no mantenerse bajo control, generarán una nueva emergencia en salud pública. El tránsito de migrantes a lo largo de la región añade un desafío más para garantizar que los servicios de salud puedan expandir sus capacidades para garantizar el acceso a servicios críticos tanto a la población local como migrante. Es imperativo abordar el desgaste de los recursos en salud, incluido el recurso humano, contribuyendo al reabastecimiento de insumos esenciales, equipos de respuesta, fortalecimiento de las capacidades de vigilancia epidemiológica, detección temprana de enfermedades transmisibles y redes de laboratorio en los tres países de NCA.

Especial énfasis debe ser otorgado a mantener o recuperar la programación de servicios médicos electivos esenciales para la medicina preventiva, así como servicios indispensables para la salud y vida de mujeres, gestantes, niños, niñas, adolescentes, ancianos y personas que viven con condiciones crónicas. Existe una necesidad de intensificar las acciones comunitarias de prevención y promoción de la salud de manera diferencial y diferenciada de acuerdo con el contexto y con pertinencia cultural. La discontinuación de servicios esenciales crea un riesgo adicional para las personas viviendo con VIH. Las bajas coberturas de inmunización en los niños y niñas incrementan el riesgo de brotes de enfermedades infecciosas inmunoprevenibles en las poblaciones de mayor riesgo. La inequidad en el acceso en estos países a las vacunas contra la COVID-19 contribuye al aumento de casos y a la pérdida de vidas.

Con la mayor parte de la población afectada en las áreas azotadas por años por diversas crisis humanitarias, y más recientemente por los huracanes Eta e Iota y la pandemia de COVID-19, incluidos los trabajadores de la salud que han estado trabajando sin descanso y están exhaustos, la región ha experimentado una escasez de personal de salud. La salud mental y el apoyo psicosocial (MHPSS) también se necesitan con urgencia para ayudar a las víctimas a hacer frente a las consecuencias

de las recurrentes crisis. Las necesidades en salud sexual y reproductiva y de respuesta a la VBG no solo continúan, sino que se incrementan en el contexto de la pandemia de COVID-19. Como consecuencia de la afectación del acceso de las personas a servicios esenciales de salud e insumos, incluidos en salud sexual y reproductiva, se observa el impacto en la elevada proporción de embarazos en adolescentes en los tres países (más del 30 por ciento por ciento) y las tasas de mortalidad materna vinculada en la demora en el acceso a los servicios y sistemas de referencia. La mayoría de las muertes maternas podrían ser evitadas si se reducen los factores de riesgo y el difícil acceso a los servicios de salud.

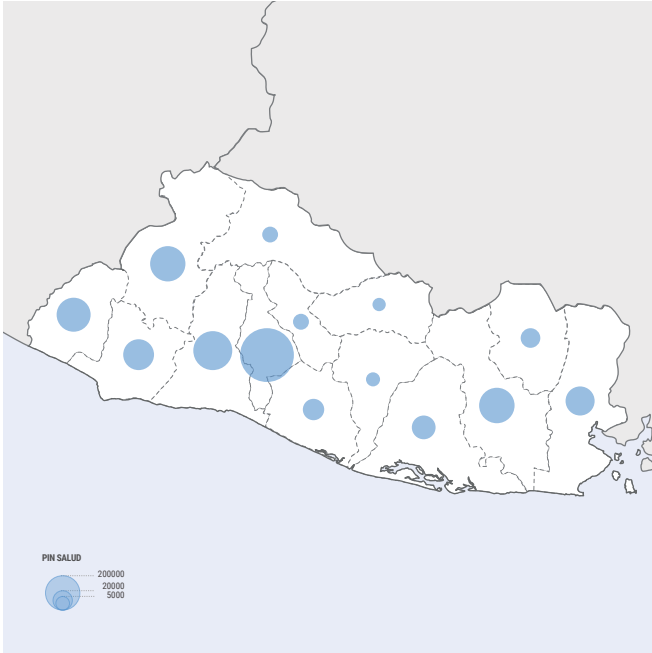
De acuerdo con los Análisis Rápidos de Género realizados en Guatemala y Honduras, los principales problemas de salud que se han presentado tanto mujeres como hombres de las comunidades afectadas son problemas broncopulmonares, resfriados y otros similares; así como problemas de diarrea, infecciones estomacales y otros. En Honduras en tercer lugar, para ambos grupos están las infecciones en la piel y alergias que se presentan más en los hombres (20 por ciento por ciento), lo que podría deberse al papel en el rescate o porque permanecieron más tiempo en el agua al priorizar a mujeres y niños en la evacuación⁸⁶.

El sector salud debe incrementar las acciones humanitarias en NCA para evitar brotes de enfermedades endémicas, incluidas arbovirosis y enfermedades causadas por el agua y los alimentos. Esto incluye restaurar condiciones adecuadas de WASH en las comunidades afectadas por eventos meteorológicos como las tormentas Eta e Iota y la sequía causada por la prolongada ola de calor. Adicionalmente, acciones para la vigilancia de la calidad del agua son urgentemente necesitadas para garantizar el acceso a agua potable segura a las poblaciones, hospitales, y servicios de salud afectados.

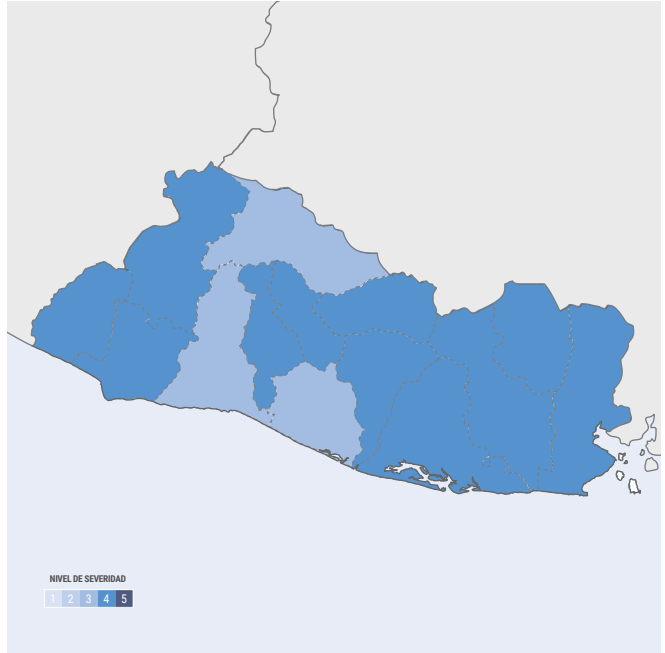
86 ONU Mujeres y CARE, 2021, Análisis Rápido de Género en Honduras.

El Salvador

Personas en necesidad

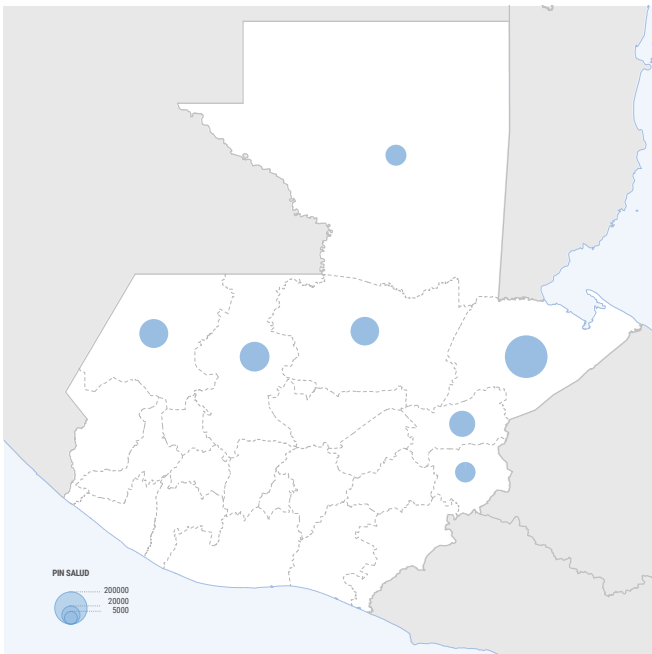


Severidad

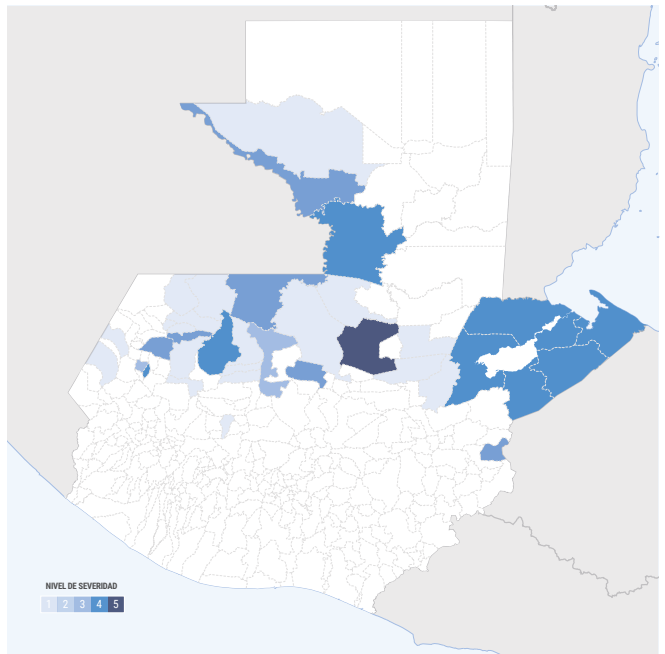


Guatemala

Personas en necesidad

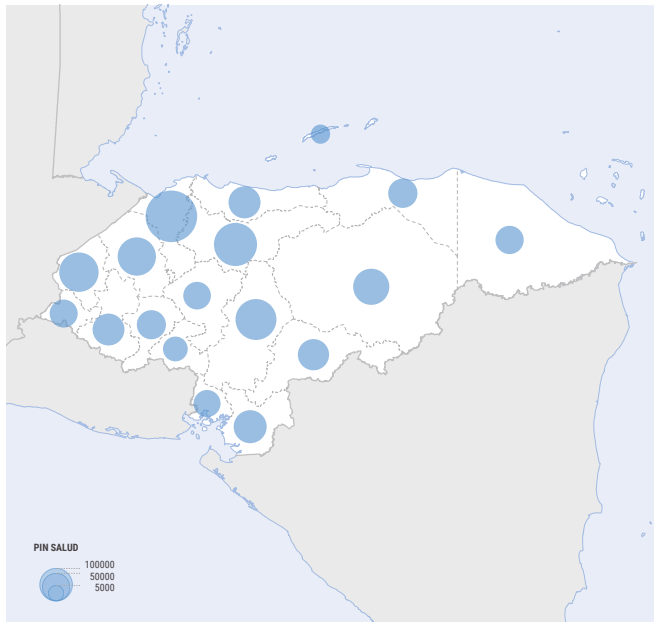


Severidad

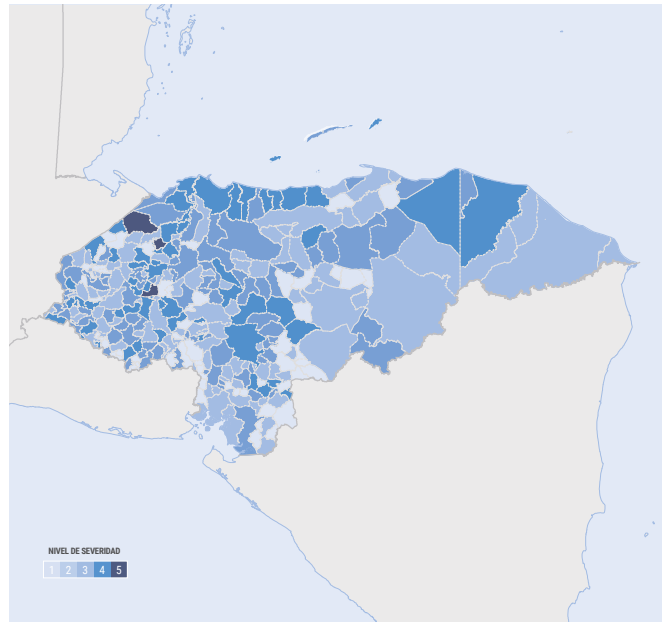


Honduras

Personas en necesidad



Severidad



Proyección de las necesidades

Durante 2021 y 2022 existe un alto riesgo de que las necesidades humanitarias se puedan intensificar debido a la continuación de la pandemia de COVID-19, la activa temporada de huracanes 2021 que amenaza la zona costera de NCA, y las migraciones masivas hacia el norte de América. Se espera que estos riesgos externos tengan un fuerte impacto en la capacidad de sectores de salud debilitados y sobresaturados, exacerbándose la escasez de recursos esenciales y las limitaciones que padecen las poblaciones más vulnerables para acceder a servicios de salud. Dado que las emergencias súbitas en NCA son de menor a mediana escala, genera preocupación que el impacto acumulativo sobre la crisis

humanitaria siga siendo relevado por emergencias de corriente más mediática acontecidas a nivel regional y global. Es necesario un trabajo conjunto para generar mayor visibilidad a la crisis del sector salud en NCA a fin de reducir el sufrimiento, y salvar la vida de personas con alta vulnerabilidad.

Monitoreo

El sector Salud realiza reuniones permanentes de la mesa sectorial a nivel regional y nacional. Se despliegan visitas a terrenos de carácter interagencial e interinstitucional para monitorear la eficiencia y el impacto de la respuesta. La información se mantiene actualizada para coordinar las acciones a nivel regional, nacional y local.

Indicadores

#	INDICADOR REGIONAL	FUENTE
1	Número de establecimientos de salud apoyados mediante rehabilitación básica, dotación de equipos, medicamentos, y suministros esenciales, y entrenamiento para el personal de salud	Informes y reportes de intervención
2	Número de brigadas de salud movilizadas para apoyar las acciones de inmunización en las comunidades objetivo.	Informes y reportes de intervención. Registro de inmunización
3	Número de mujeres en edad reproductiva adolescentes y gestantes que reciben atención, información y atención obstétrica y de emergencia, parto, postparto, y lactancia.	Informes y reportes de intervención

3.6 Recuperación Temprana



POBLACIÓN EN NECESIDAD (PIN) TOTAL	POBLACIÓN EN NECESIDAD EL SALVADOR	POBLACIÓN EN NECESIDAD GUATEMALA	POBLACIÓN EN NECESIDAD HONDURAS	MUJERES	NIÑOS Y NIÑAS	PERSONAS CON DISCAPACIDAD
3,14M	945K	1,1M	1,1M	51%	45%	2,6%

Problemas comunes por los grupos vulnerables

Al igual que el resto de los países latinoamericanos, El Salvador, Guatemala y Honduras se vieron fuertemente afectados por la pandemia generada de COVID-19 y las medidas implementadas para controlar su expansión. Estudios recientes realizados por el Sistema de Naciones Unidas, la Unión Europeo y el Banco Mundial en esos tres países, dan cuenta del severo impacto humano y económico generado por esta crisis, la misma que ha afectado de manera más severa a los grupos más vulnerables, así como a la economía de los países.

Los tres países sufrieron un impacto adicional al haberse visto también afectados por las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal en El Salvador y Eta e Iota en Guatemala y Honduras, añadiendo a las pérdidas económicas sufridas por las medidas de confinamiento de la COVID, la afectación en su infraestructura social básica que, junto con las inequidades socioeconómicas preexistentes, han contribuido a profundizarlas en al menos 6 dimensiones:

Condiciones de vida: Numerosas viviendas sufrieron algún nivel de daño, afectando a las familias con muchas de ellas ubicándose en albergues. Cierre y afectación de centros de salud con numerosas consultas ambulatorias no atendidas. Cierre de centros educativos y daños físicos con importante deserción de estudiantes de nivel secundario. La infraestructura social básica ha sido también afectada como por ejemplo pequeños puentes, mercados, pequeñas represas, entre otros.

Empleo y medios de vida: Los salarios promedio de los trabajadores cotizantes experimentaron una gran reducción en períodos de al menos 6 meses con empleos formales perdidos en el sector privado aumentando el número de personas en condiciones de pobreza y pobreza extrema monetaria. Los sectores productivos fueron los más afectados por la pandemia (Turismo, Industria, Comercio y Agricultura) y volvieron a ser impactados por las tormentas, particularmente el sector agrícola.

Seguridad alimentaria: Aumento de la inseguridad alimentaria por falta de acceso y en algunos casos por la disminución en la producción de alimentos. Aumento del precio de la canasta básica alimentaria urbana aumentando el número de hogares con bajo consumo de alimentos.

Nutrición: El deterioro del estado nutricional puede explicarse por el aumento de la inseguridad alimentaria, reflejada en el acceso limitado a alimentos nutritivos y asequibles (en particular, el acceso a una diversidad de alimentos en cantidad suficiente), el consumo inseguro de agua, acceso limitado a servicios salud y nutrición para prevenir y tratar la desnutrición, entornos insalubres en ciertos casos, prácticas de alimentación subóptimas de los lactantes y niños y niñas pequeños/as, prácticas de cuidado deficientes, la recesión económica y la pobreza.

Equidad de género: Sobrecarga de los roles de género, que suma las cargas laborales, del hogar, de cuidado y de acompañamiento en el aprendizaje desde la casa. Impacto en las actividades económicas en las que

las mujeres se ven involucradas mayoritariamente: comercio y servicios en el sector informal, junto con el aumento de la violencia intrafamiliar y embarazos no planificados sobre todo en menores de edad.

Inclusión social: Incremento del desempleo juvenil. La saturación hospitalaria dificulta el acceso a las consultas ambulatorias sobre todo de personas con discapacidad y adultos mayores con enfermedades crónicas.

Análisis de las necesidades humanitarias

Condiciones de vida: Las tormentas tropicales Eta e Iota generaron en los grupos poblacionales impactos y necesidades diferenciadas, por lo que se requiere un abordaje de recuperación integral enfocado en las personas, que integre requerimientos de recuperación física de viviendas, medidas de protección no contributiva para las personas en condiciones de pobreza y pobreza extrema, recuperación de medios de vida, protección social, equidad de género, seguridad alimentaria y nutricional entre otros. Mejorar el acceso a agua y saneamiento, así como a educación sigue siendo una necesidad en algunas comunidades severamente afectadas.

Empleo y medios de vida: La afectación en el sector vivienda en los tres países, ligado a la pérdida de ingresos en las familias y la precarización del empleo por afectación de los sectores productivos (agricultura, pequeñas y medianas empresas, sector de comercio informal) complejizando la capacidad económica de las familias más pobres, requiere una aproximación integral al problema. Empleo emergente y temporal es clave para integrar a las comunidades más afectadas en el proceso de recuperación. Esto incluye entrenamiento de mano de obra no calificada para la realización de trabajos de construcción, limpieza y mantenimiento en sectores como vivienda, pequeña infraestructura, así como entrenamiento y capacitación para nuevos emprendimientos y fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas a través de herramientas que promueven comercio digital; en el sector agrícola, la dotación de insumos para siembra

como semillas mejoradas para enfrentar ciclos de lluvias fuertes y el empleo de soluciones basadas en la naturaleza para protección de cultivos.

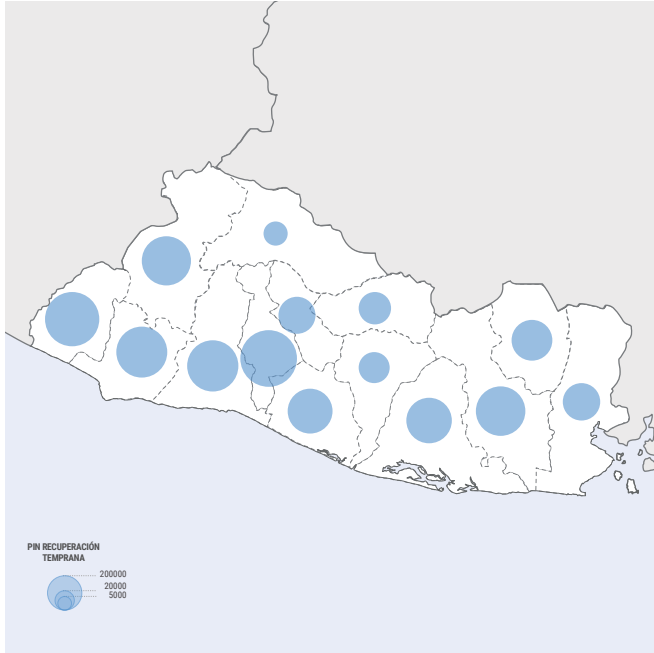
Seguridad Alimentaria: Reactivar, recuperar o diversificar la producción hortícola de ciclo corto por medio de huertos familiares y comunitarios, para que obtener alimentos de origen vegetal de manera inmediata, además generar ingresos por la venta de excedentes. Esto debería incluir alianzas tripartitas entre productores agrícolas, las familias y la cooperación internacional para promover una alimentación balanceada y nutricional incluyendo capacitación para las familias y productores.

Nutrición: El deterioro del estado nutricional puede explicarse por el aumento de la inseguridad alimentaria, reflejada en el acceso limitado a alimentos nutritivos y asequibles (en particular, el acceso a una diversidad de alimentos en cantidad suficiente), el consumo inseguro de agua, acceso limitado a servicios salud y nutrición para prevenir y tratar la desnutrición, entornos insalubres en ciertos casos, prácticas de alimentación subóptimas de los lactantes y niñas y niños pequeños, prácticas de cuidado deficientes, la recesión económica y la pobreza.

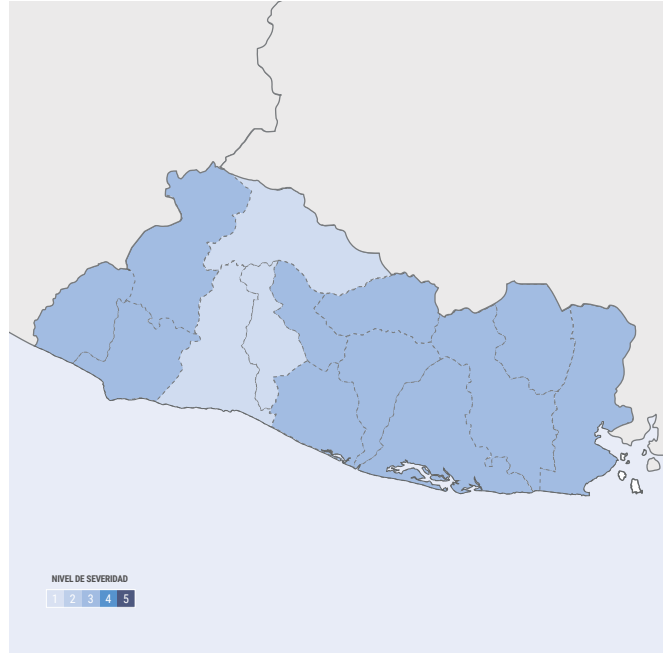
Igualdad de género: Incorporación de los hombres, mujeres, jóvenes, adultos mayores, población LGBTIQ+ en los procesos de recuperación del empleo y medios de vida, en las capacitaciones para mejorar sus oportunidades de crecimiento y mejora.

El Salvador

Personas en necesidad

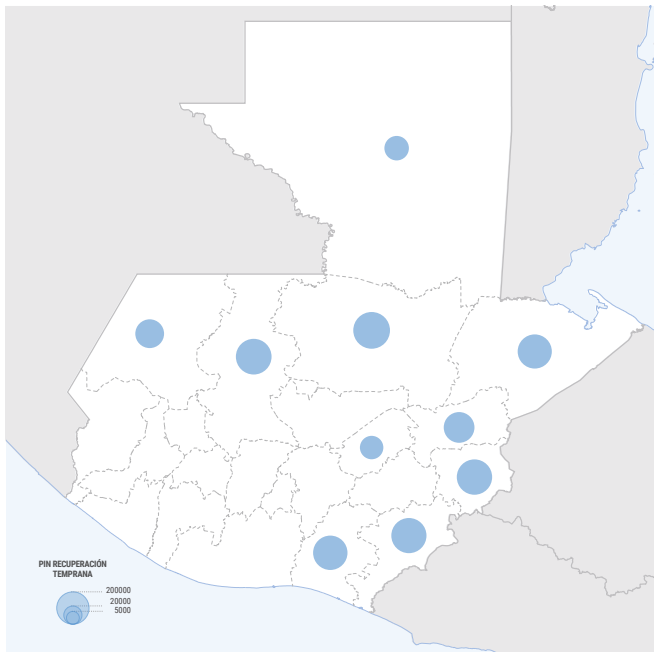


Severidad

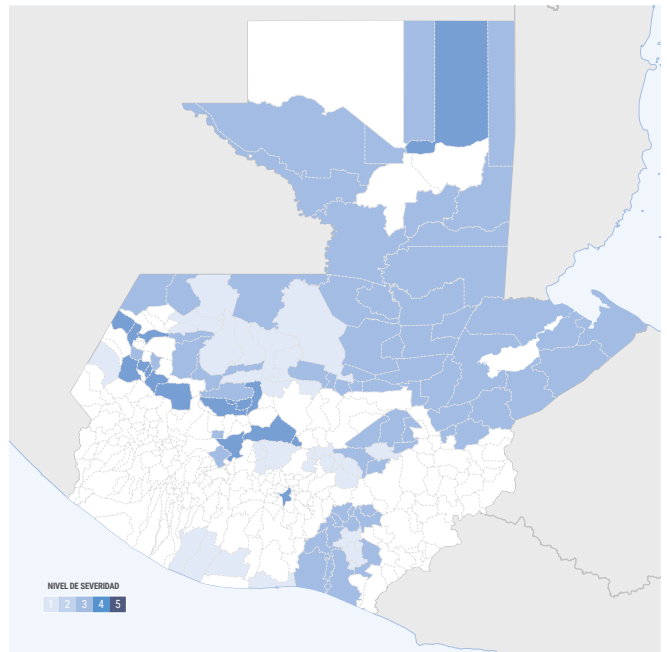


Guatemala

Personas en necesidad

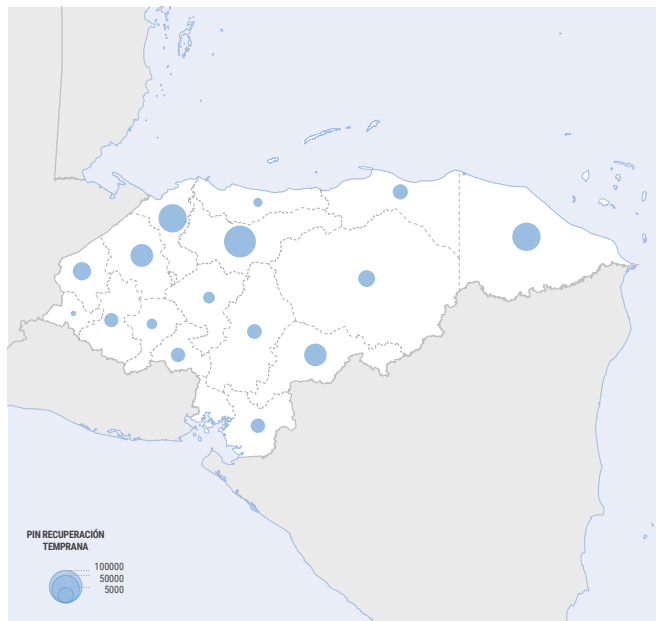


Severidad

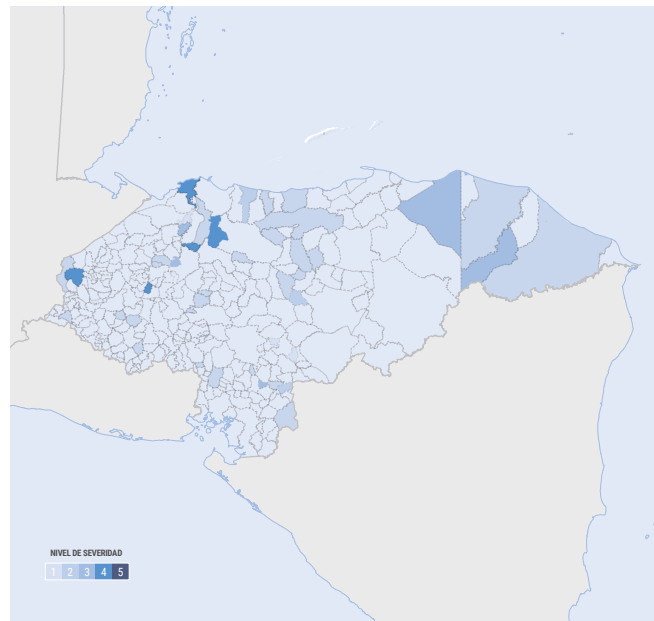


Honduras

Personas en necesidad



Severidad



Proyección de las necesidades

En la medida en que las necesidades identificadas no sean atendidas, la situación de las personas, familias y comunidades puede verse afectada como consecuencia de la falta de ingresos y el limitado acceso a servicios básicos, lo cual deteriora su calidad de vida.

La situación se vuelve crítica en la medida en que las amenazas asociadas con fuertes y continuas lluvias como aquellas que pueden producirse en la temporada

anual de huracanes en el Pacífico, ya ha empezado en el mes de Junio del 2021 produciendo inundaciones en varios países del Caribe, puede perennizar el ciclo desastre-recuperación-desastre, pues su recurrencia anual, no da tiempo a soluciones ni siquiera de corto y mediano plazo, menos a aquellas que puedan asegurar la construcción de resiliencia y por ende contribuyan a un desarrollo sostenible.

Indicadores

#	INDICADOR REGIONAL	FUENTE
1	Hogares que son en viviendas dañadas por categoría de daños.	Gobierno y EHP
2	Personas en condición de pobreza monetaria y pobreza multidimensional.	Gobierno y EHP
3	Porcentaje de personas que necesitan recuperar sus medios de vida.	Gobierno

3.7 Educación



POBLACIÓN EN NECESIDAD (PIN) TOTAL	POBLACIÓN EN NECESIDAD EL SALVADOR	POBLACIÓN EN NECESIDAD GUATEMALA	POBLACIÓN EN NECESIDAD HONDURAS	MUJERES	NIÑOS Y NIÑAS	PERSONAS CON DISCAPACIDAD
1,34M	792K	178,6K	475K	16,4%	67,5%	--

Problemas comunes de los grupos vulnerables

Uno de los principales desafíos a los que se enfrentan los tres países del NCA es el incremento de la exclusión educativa. La brecha digital generada por la limitación de acceso a dispositivos electrónicos e internet, por la falta de recursos y estrategias educativas que se adapten a las diferentes necesidades de aprendizaje, ha causado que muchos NNA no hayan podido beneficiarse de los modelos de educación a distancia e híbridos durante el cierre total y parcial de las escuelas. En el caso de Honduras, la cifra de exclusión supera el millón y medio de niños, niñas y adolescentes (48 por ciento de la población escolar). En Guatemala, sólo un 17 por ciento de los hogares tiene acceso a internet, equipos y conectividad, mientras que, en El Salvador solo el 23.35 por ciento de los hogares tienen acceso a internet fijo.

La deserción escolar es otro de los principales problemas en estos países. En contextos de pobreza agudizada por eventos adversos, el número de niños, niñas y adolescentes matriculados en el sistema educativo tiende a disminuir debido al deterioro socioeconómico y en consecuencia la violencia. Es importante destacar que las niñas suelen ser particularmente perjudicadas, ya que generalmente asumen un mayor número de responsabilidades en el hogar. En Honduras, entre 2020 y 2021, el 6.33 por ciento de estudiantes no se matricularon; y según datos el MINED en 2018, en El Salvador ese mismo año 76.030 niñas, niños y adolescentes abandonaron sus estudios por diferentes causas.

La fragilidad de la infraestructura escolar y la escasa preparación ante emergencias de las comunidades supone también un desafío considerable en los países del NCA. Los tres países han reportado que la inversión en infraestructura escolar, y en general, en el sector educativo, es en la mayoría de los casos insuficiente, lo que a su vez no solo limita la calidad y la pertinencia de la educación, sino también la calidad de la respuesta a las emergencias de la comunidad educativa, cuando las escuelas no cuentan con infraestructuras escolares adecuadas, incrementa la inseguridad y la exposición al peligro de los NNA. Por otro lado, se ha producido un incremento de número de NNA en situación de vulnerabilidad, incluyendo NNA con discapacidad, migrantes y refugiados, niñas, indígenas, etc. En Guatemala, las tormentas causaron un incremento en la migración de menores no acompañados, poniendo en riesgo su continuidad educativa y su vida. Además, en el caso de los NNA migrantes y refugiados indocumentados, la ausencia significativa de marcos o mecanismos para el reconocimiento, la validación y la acreditación de los resultados del aprendizaje no formal e informal constituye una de las barreras principales de acceso a la educación en los países de acogida.

Análisis de las necesidades humanitarias

En los países del NCA, la COVID-19 y posteriormente el impacto de Eta e Iota han producido un impacto negativamente sustantivo en el acceso y permanencia en la Educación de los niños, niñas, adolescentes (NNA) de la subregión, que de no tomarse medidas de asistencia o soporte humanitario repercutirán de manera significativa no solo para el retorno

seguro a las escuelas, sino en la recuperación de los aprendizajes perdidos y el aseguramiento de las trayectorias educativas de los NNA de estos países, afectando directamente las oportunidades de la población para superar las barreras que impiden romper el círculo de la pobreza en la próxima década, postergando aún más los elementos expulsivos socioeconómicos que motivan la migración en Centroamérica.

El cierre de las escuelas para las clases presenciales, producto de la pandemia de COVID-19, provocó el confinamiento de cerca de más de 7 millones de NNA⁸⁷ de los cuales el 49 por ciento son niñas o adolescentes mujeres, generando no solo la discontinuidad del aprendizaje por algún tiempo para algunos, o de manera total por otros, incluso los más vulnerables entre los NNA en condiciones de pobreza, con discapacidades, grupos étnicos u otras condiciones, debido a la brecha digital y la falta de cobertura con alternativas efectivas, para aquellos que no tuvieran acceso digital, pero también la necesidad de la preparación de los y las docentes para implementar estas metodologías a distancia. Otra necesidad presente es la atención psicosocial tanto de los NNA y sus familias, como de los y las docentes por el confinamiento.

El cierre de escuelas limitó o imposibilitó en muchos casos el acceso a la nutrición escolar, que en los países de NCA es un programa regular, aumentando muchas veces la brecha en las necesidades de la población en condiciones de inseguridad alimentaria. El cierre de las escuelas dejó también a los NNA

sin espacios protectores de las distintas formas de violencia, en particular la violencia sexual o la violencia basada en género. UNICEF ha indicado que a nivel de la región en promedio podrán desertar del sistema educativo producto de la COVID-19 cerca del 2 por ciento de la población total de NNA en edad escolar⁸⁸.

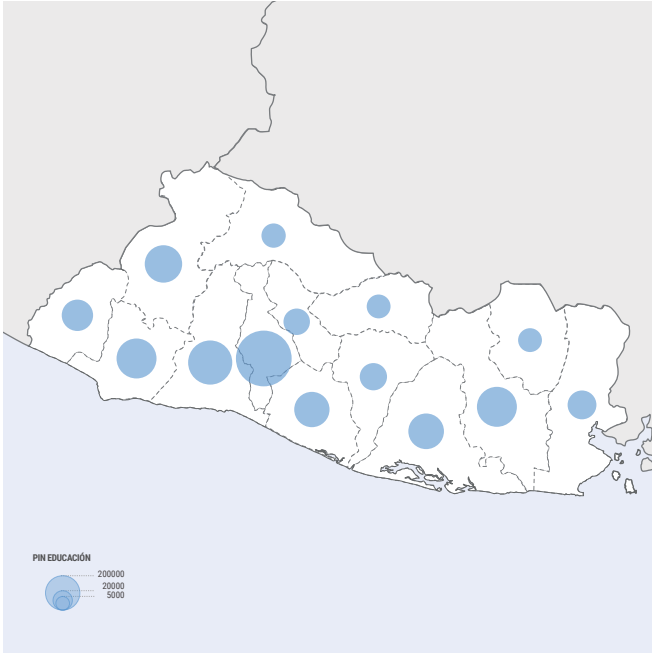
Eta e Iota incrementaron las necesidades previas y posteriores a la COVID-19, generaron daños directos en la infraestructura escolar de los países del NCA, y de manera indirecta al ser también tomadas edificaciones escolares como albergues, se generaron daños la integridad de las condiciones mínimas de funcionamiento de las escuelas, donde se ha generado la necesidad de procesos de rehabilitación y adecuación para cumplir con la funcionalidad educativa y bioseguridad. Se ha estimado que la afectación a NNA en edad escolar entre Guatemala y Honduras, países más golpeados por estos eventos, fue de 2.698.828, equivalente al 38 por ciento de la población infantil de ambos países, según estimaciones realizadas con base a la tasa de afectación oficialmente informada y proporción de población entre 3 y 18 años de ambos países.

87 7.898.223 según las cifras del monitoreo iniciado a nivel Global por UNESCO <https://es.unesco.org/covid19/educationresponse>

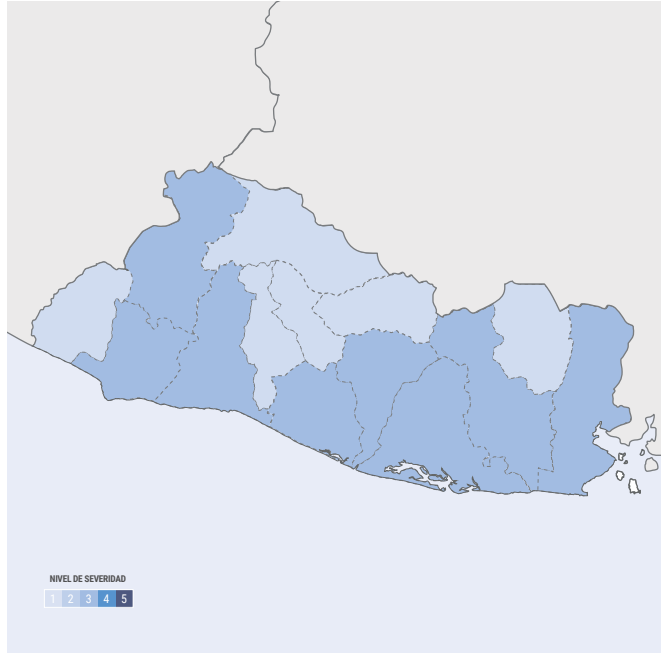
88 Educación en Pausa UNICEF <https://www.unicef.org/lac/media/18251/file/Educacion-en-pausa-web-1107.pdf>

El Salvador

Personas en necesidad

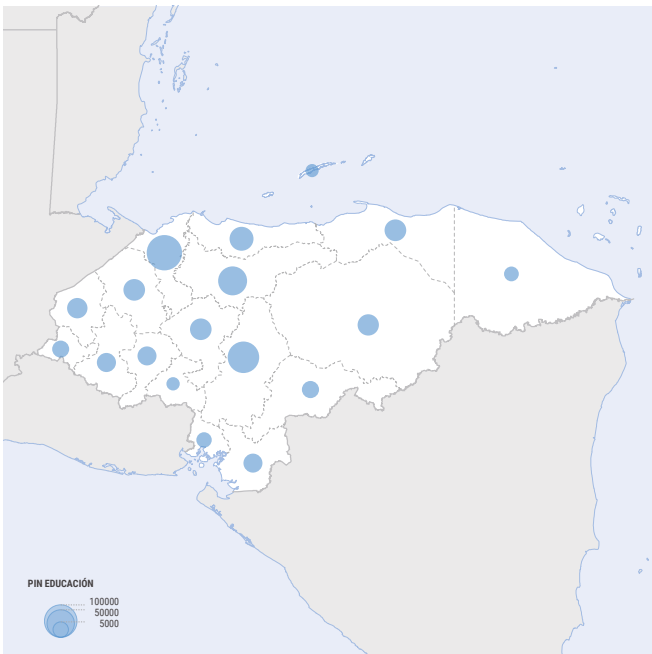


Severidad

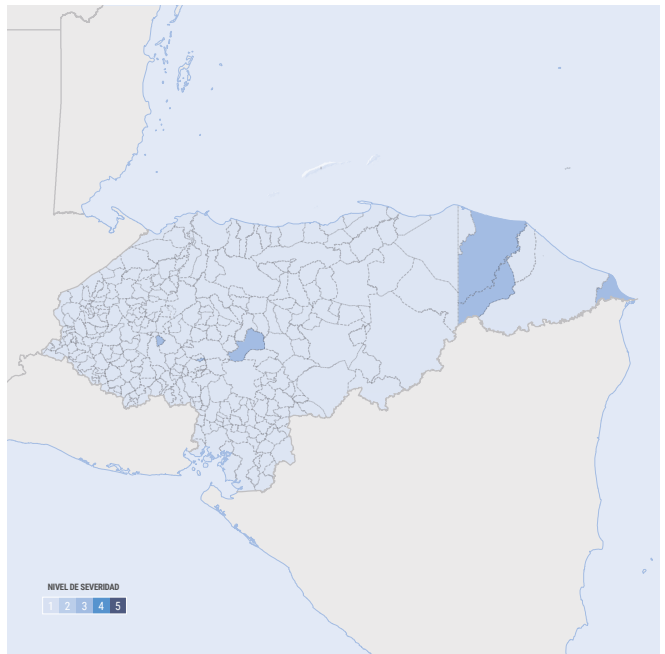


Honduras

Personas en necesidad



Severidad



Proyección de las necesidades

Para remediar el aprendizaje perdido y ofrecer continuidad a nuevos aprendizajes con calidad y de manera segura y digna bajo un enfoque de derechos, se plantean como necesidades en los países del NCA los siguiente:

- Apoyar el regreso seguro a las escuelas a través de intervenciones multisectoriales, que incluyan la mejora de las infraestructuras en las escuelas que permita el funcionamiento del servicio educativo en condiciones seguras, dignas y adecuadas para el aprendizaje y la prestación de servicios habitados a través de la escuela (nutrición escolar, salud física y mental, protección), el suministro de materiales y equipos, el desarrollo de las capacidades de docentes, y la participación significativa de las comunidades educativa y especialmente los NNA en el proceso comunitario de construcción de resiliencia.
- Fortalecer los sistemas educativos de los países del NCA para mejorar y/o desarrollar programas destinados a atender las necesidades educativas a presenciales o a distancia por medios

digitales u otras alternativas de las poblaciones más vulnerables.

- Fortalecer la coordinación intersectorial y los mecanismos de coordinación humanitaria del sector educación de los países de NCA para promover la protección social de las familias con NNA en edad escolar y docentes para asegurar la permanencia en el sistema educativo formal, estrategias no formales y culminación de ciclos educativos.

Monitoreo

Una de las principales necesidades que los países del Norte de Centroamérica señalan es la identificación y el monitoreo de los indicadores de eficiencia educativa, incluyendo la evaluación de los aprendizajes. En el caso particular de El Salvador, una de las apuestas estratégicas se enfocará en el Sistema Educativo Multimodal de El Salvador (SEMES), el cual pretende transformar el sistema educativo en un ecosistema multimodal, diverso, flexible, pertinente, y el cual incluye una fase de monitoreo, seguimiento y evaluación.

Indicadores

#	INDICADOR REGIONAL	FUENTE
1	Porcentaje de NNA que acceden y permanecen en la educación prebásica, básica y media.	Informes y resortes Instituciones del estado Ministerios de Educación e instancias de estadística nacional de los países
2	Porcentaje de NNA que no acceden a la educación por escuelas no funcionales.	Informes y resortes Instituciones del estado Ministerios de Educación e instancias de estadística nacional de los países
3	Porcentaje de niñas, niños y adolescentes que no asisten a la escuela.	Informes y resortes Instituciones del estado Ministerios de Educación e instancias de estadística nacional de los países
4	Porcentaje de niños en escuelas sin acceso a una fuente de agua potable mejorada.	Informes y resortes Instituciones del estado Ministerios de Educación e instancias de estadística nacional de los países
5	Porcentaje estudiantes que tienen acceso a internet.	Informes y resortes Instituciones del estado Ministerios de Educación e instancias de estadística nacional de los países

Guatemala: La cifra PiN de Educación fue establecida con los datos disponibles al momento y su análisis se incorporará en el HRP.

3.8

Alojamiento de emergencia



POBLACIÓN EN NECESIDAD (PIN) TOTAL	POBLACIÓN EN NECESIDAD EL SALVADOR	POBLACIÓN EN NECESIDAD GUATEMALA	POBLACIÓN EN NECESIDAD HONDURAS	MUJERES	NIÑOS Y NIÑAS	PERSONAS CON DISCAPACIDAD
566,6k	23,2k	254,1k	289,2k	49%	42%	--

Problemas comunes por los grupos vulnerables

Las personas desplazadas en la región no solamente pierden acceso al emplazamiento físico de la vivienda: al tener que reubicarse forzosamente en otro lugar, pierden su patrimonio, el acceso de a redes de apoyo, medios de vida y deben afrontar nuevas barreras para adquirir una nueva vivienda.

En Honduras, las poblaciones que sufrieron las mayores pérdidas y los daños más severos a las viviendas habitan en los municipios más pequeños del país, específicamente en el Valle del Sula y sus inmediaciones. Habitan sobre todo en las áreas rurales y en aquellas periféricas de las ciudades grandes. Una situación similar se registró en Guatemala, donde las familias que vivían en condiciones ya vulnerables fueron las más afectadas.

Estas personas se encontraban ya en situaciones de vulnerabilidad, debido a la precariedad de las construcciones, la ubicación en zonas de riesgo, muchas veces no mitigable y muchas veces, una situación de tenencia incierta.

Del total de personas que perdieron completamente sus viviendas, un gran porcentaje se encuentra aun viviendo en albergues colectivos o alojadas con familias de acogida (33.541 en el caso de Honduras). Se han reportado además decenas de familias asentadas informalmente en los bordes

de la carretera, o que simplemente tienen que afrontar las inclemencias del tiempo a la intemperie. Estas familias se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema, en vista de los riesgos de protección y violencia preexistentes. De acuerdo con el Análisis Rápido de Género, el 73 por ciento de las mujeres entrevistadas manifestó que su vivienda sufrió un daño moderado o severo en Honduras, mientras que en Guatemala 81 por ciento indicaron que hubo daños de diferente magnitud en sus viviendas. En Honduras, un 16 por ciento de las mujeres dijo sentirse en "riesgo" se seguir viviendo en sus casas, pero con algún grado de riesgo por la posibilidad de derrumbe por saturación de los suelos, inundaciones cercanas, derrumbe de árboles o de otras viviendas. Por su parte, el 90 por ciento de las mujeres que se encontraban en albergues dijeron que habían perdido sus casas totalmente⁸⁹.

Varias familias optan por retornar a sus viviendas dañadas debido a la falta de soluciones de alojamiento de mediano y largo plazo, aunadas con los riesgos de protección que conlleva vivir en albergues colectivos. En Honduras, 81.228 personas cuyas viviendas sufrieron daños severos y leves, retornaron a sus viviendas y continúan viviendo en ellas, pese al riesgo que esto conlleva. En efecto, la falta de adecuada protección contra los elementos climáticos y la fragilidad de estas construcciones ante futuros choques sitúan a estas familias en una situación

89 ONU Mujeres y CARE, 2021, Análisis Rápido de Género en Honduras.

particularmente vulnerable, que puede afectar colateralmente sus condiciones de salud, acceso a educación, empleo, etc. Se evidencia además una carga adicional sobre todo en las mujeres, quienes además de sus tareas domésticas, las mismas que desempeñan ya sea de manera exclusiva o adicional al trabajo fuera del hogar, asumen labores adicionales de reparación y/o adecuación de las viviendas.

Finalmente, las familias que acogen actualmente a personas cuyas viviendas han sido destruidas, se exponen a condiciones de hacinamiento y deterioro de sus estándares de habitabilidad.

Además de la vulnerabilidad física, el hecho de no contar con una vivienda estable tiene repercusiones sobre el incremento de casos de violencia basada en género, el deterioro de los vínculos familiares y sociales, la incidencia de enfermedades físicas y mentales, particularmente en niños, niñas, mujeres y ancianos, y reduce la estabilidad financiera y el acceso a empleos seguros.

Análisis de las necesidades humanitarias

La insuficiencia de acceso a soluciones adecuadas de alojamiento temporal en la región aumenta las condiciones de vulnerabilidad de las personas en situación de movilidad humana.

En Honduras, seis meses después del paso de las tormentas tropicales Eta e Iota, las necesidades de alojamiento requieren soluciones de mediano y largo plazo: se estima que 88.741 personas requieren apoyo en alojamiento de emergencia.

- 5.000 familias requieren una reconstrucción total de sus viviendas. Para muchas de ellas, retornar a sus terrenos no es una opción segura, ya que éstos se encuentran en zonas de riesgo, por lo que las necesidades incluyen desde la disponibilidad de terrenos seguros, habilitación o construcción de viviendas nuevas que permitan mantener sus medios de vida y garantizar estándares mínimos de habitabilidad.

- En tanto una solución de largo plazo no sea posible, estas familias requieren alojamiento transitorio seguro, donde puedan hacer frente a las crisis futuras, apoyo a soluciones de alquiler y/o transferencias monetarias destinadas al alojamiento y vivienda.
- Más de 4.000 viviendas requieren reparaciones moderadas, apoyo a la reconstrucción segura, capacitación técnica y transferencias monetarias.
- Las familias de acogida requieren apoyo monetario o de otra índole, para hacer frente a las dificultades de habitabilidad causadas por la presencia de familias afectadas bajo el mismo techo.

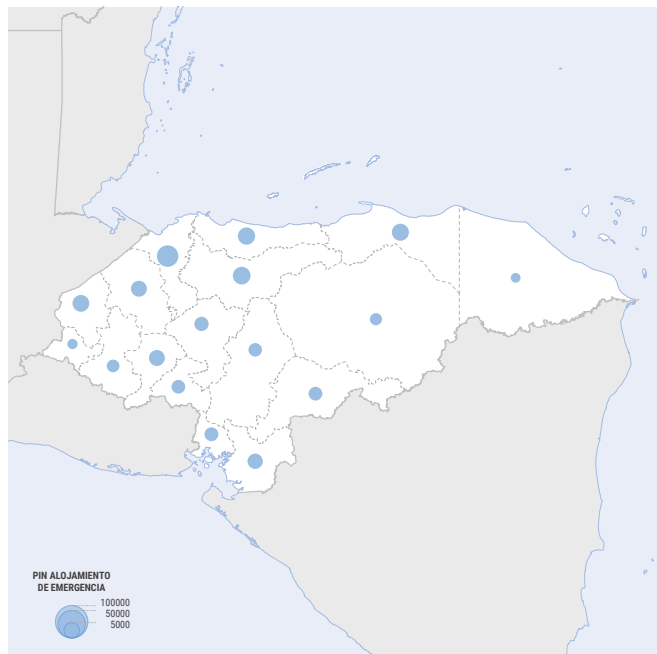
Proyección de las necesidades

Mientras que la etapa inicial de respuesta incluía sobre todo la distribución de insumos no alimentarios, la solución de mediano plazo continuará necesitando la provisión de alojamientos temporales y reparación de viviendas dañadas. A largo plazo, la solución a la crisis de vivienda ocasionada por las tormentas tropicales requerirá una coordinación con el aparato estatal de reducción del déficit de vivienda y mejora de las condiciones de habitabilidad de las poblaciones más vulnerables.

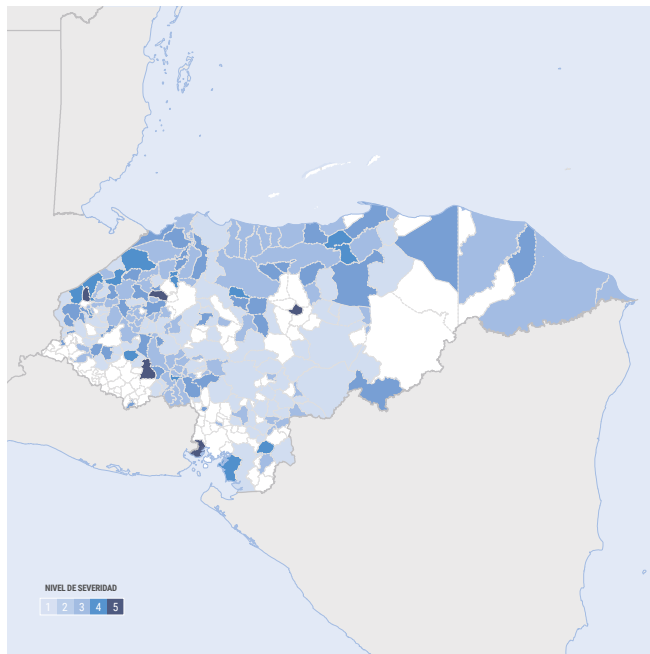
La coordinación con organizaciones no gubernamentales y gubernamentales, la sociedad civil, el sector privado y organismos internacionales es clave para construir el nexo con la etapa de recuperación y desarrollo de la vivienda digna.

Honduras

Personas en necesidad



Severidad



Monitoreo

Los informes de desempeño se actualizan a través de la plataforma de coordinación 345W administrada por OCHA, de acuerdo con los indicadores establecidos en dicha plataforma. Además, la jefatura de la mesa de

coordinación en Honduras efectúa de manera continua visitas de campo a las áreas afectadas y a las zonas de acción por parte de los socios de la mesa.

Indicadores

#	INDICADOR REGIONAL	FUENTE
1	Porcentaje de hogares que viven en viviendas dañadas por categoría de daños.	Gobierno
2	Porcentaje de hogares desplazados debido a riesgos comunitarios/regionales.	Gobierno

El Salvador y Guatemala: No cuentan con grupos de trabajo sectorial de Alojamiento de Emergencia, por lo cual las cifras PiN, se han establecido a nivel regional tomando en cuenta: 1) las personas desplazadas por cambio climático y eventos naturales y personas; 2) personas retornadas y las personas desplazadas internas por violencia (programas de reubicación interna, programa PTA), las personas en necesidad de protección internacional y las personas migrantes que mantienen necesidades de alojamiento de emergencia en la región.

3.9

Coordinación y Gestión de Albergues



En Guatemala la población con necesidad relacionada al sector de Coordinación y Gestión de Albergues y Alojamiento (albergues) ha sido incorporada desde la perspectiva de movilidad humana y sus necesidades están contempladas bajo los demás sectores.

Problemas comunes por los grupos vulnerables

El desplazamiento forzado tiene la capacidad de influir directamente sobre el goce de derechos fundamentales de la población afectada. El abandono repentino de sus bienes y sus oportunidades de educación y empleo, la modificación de vínculos sociales y familiares y los riesgos latentes de protección producidos por los hechos de violencia del que fueron víctimas, generan vulnerabilidades específicas para la población que pueden afectar sustancialmente su cotidianidad y estabilidad en diversos ámbitos de vida. Entre estas, la necesidad de contar con espacios de acogida para protección inmediata en situaciones de emergencia.

Problemas urgentes

Entre los problemas urgentes identificados en los albergues donde viven las personas internamente desplazadas por las tormentas Amanda, Cristóbal, Eta e Iota han sido las condiciones deterioradas de las infraestructuras de los albergues, sin un adecuado sistema de saneamiento, inadecuada ventilación, hacinamiento, y falta de espacio para implementar los protocolos de prevención de la COVID-19, con insuficientes equipamientos (camas, colchonetas, y kits de prevención de incendios, y otros), insuficientes mecanismos de protección para las mujeres, adolescentes y niñas (baños y duchas separados por género y la iluminación), seguridad y sumado a la falta de personal capacitado para hacer la gestión diaria de los albergues, aumentaron los desafíos para el acceso digno a la asistencia humanitaria de los desplazados internos

albergados. Otro grupo importante de desplazados internos por los desastres socio-naturales se auto evacuó en las familias de acogida que ya tenían sus recursos limitados generando crisis familiares. Con el cierre de los albergues sin una adecuada estrategia de cierre llevó a importante número de desplazados a instalarse en asentamientos espontáneos precarios sin una asistencia de las entidades de respuesta. En los albergues aumento los problemas de salud sexual y reproductiva debido a la ausencia de rutas de derivación y referencias a servicios especializados (ruta materna y manejo clínico de violencia sexual).

En Honduras todavía se encuentran en 35 albergues 1.824 personas desplazadas internas por los huracanes Eta e Iota. Según el reciente Análisis Rápido de Género (ARG), la situación de mujeres en albergue muestra múltiples desafíos. "Sólo el 13 por ciento de las mujeres entrevistadas contaban con acceso a agua potable en el albergue, solo un 9.4 por ciento de las mujeres tiene acceso a servicios sanitarios exclusivos para mujeres, el 50 por ciento de las mujeres dijeron que la cantidad de agua no es suficiente para cubrir todas las necesidades que tienen ellas y sus familias. Aunque la mayoría reconocen que sí existe un lugar para el aseo personal, consideran que éste NO es seguro, dado que la mayoría de los albergues son centros de estudios que no cuentan con la infraestructura para realizar este tipo de actividad. Del total de 19 albergues visitados en el marco del ARG, se evidenció que los servicios para mujeres con discapacidad prácticamente no existen, y el 22.3 por ciento que contestó que sí, lo asocian a la evaluación médica general que recibieron mujeres embarazadas

en los albergues. Al profundizar en los grupos focales, las mujeres dijeron que no hay servicios especializados para personas con discapacidad. En cuanto al acceso a medicamentos para enfermedades crónicas, un 65.5 por ciento respondió no haber recibido este apoyo en los albergues⁹⁰.

Además, las ONG identifican los albergues como una de las necesidades más prioritarias para la población LGBTIQ+, dada las brechas de protección existentes para estas comunidades, especialmente en contextos de emergencias y de movilidad.

- La mayoría de los retornados o deportados llegan en condiciones vulnerables durante la pandemia llegaron a los albergues convertidos en centros de cuarentena y después de cumplir el periodo de aislamiento enfrentaron dificultades para acceder a un medio de transporte hacia sus comunidades de origen o residencia por falta de dinero y cubrir sus costos durante el trayecto y al arribo a sus comunidades. Otros retornados no podían retornar a sus comunidades debido a la alta violencia e inseguridad que provocó la emigración.
- Los migrantes internacionales irregulares en tránsito por estos países con las medidas de restricción de movilidad por la COVID-19 quedaron varados en las comunidades fronterizas donde se abrieron albergues en condiciones muy precarias organizadas por las organizaciones de la sociedad civil. Estos migrantes no tienen acceso a los servicios esenciales de salud incluido de Salud sexual y reproductiva, en particular las mujeres y adolescentes debido al escaso conocimiento de servicios existentes, la poca oferta de los mismos, desabastecimientos y/o limitada oferta de insumos como anticonceptivos están expuestos a una alta vulnerabilidad, entre ellas a embarazos no deseados, mortalidad materna vinculada a las demoras de atención así como a las consecuencias en salud por la violencia sexual. Se estima que más del 25 por ciento de

las mujeres en movilidad cuenta con necesidades insatisfechas en planificación familiar, exponiéndose a embarazos no deseados.

Otro de los problemas en los albergues es la falta de medicamentos para las personas que sufren de enfermedades crónicas (diabetes, hipertensión, etc.) y de VIH-SIDA y de personal entrenado para el manejo de estas personas.

Problemas a medio plazo

- A mediano plazo los problemas que enfrentan los desplazados internos y o migrantes en necesidad de albergues son la falta de planes de contingencia que incluya evaluación de las infraestructuras existentes para la selección de albergues sin afectar seriamente la educación de los niños.
- Otro de los problemas son los desplazados internos que requieren de estadías prolongadas en los albergues porque no pueden regresar a sus casas, debido a que fueron destruidas o se encuentran en zonas de alto riesgo a desastres socio-naturales. El 37 por ciento (1.824) de personas albergadas en Honduras, requieren de reubicación en otros albergues o alojamientos.
- Falta de protocolos armonizados para la gestión adecuada de albergues, lleva a respuestas lentas y dificultades de coordinación entre las entidades del gobierno y los actores humanitarios.
- Falta de guías específicas sobre salud sexual reproductiva en los albergues genera atención retardada de la mujer o adolescente en situación de parto y dificulta el manejo de las consecuencias de la violencia sexual.
- Las comunidades de acogida con pocos recursos y escasos servicios básicos son sensibles a generar tensiones y xenofobia.

90 ONU Mujeres y CARE, 2021, Análisis Rápido de Género en Honduras.

- Escaso personal capacitado para la gestión de los albergues que enfrentan dificultades con el manejo de las personas de LGBTIQ+.

Análisis de las necesidades humanitarias

Las necesidades de contar con albergues colectivos seguros para la vida de las personas y para la protección de los grupos vulnerables, eso pasa por el mapeo, la evaluación, selección y reparación de la infraestructura existentes en las zonas de alto riesgo a los desastres socio-naturales y de movilidad de personas, priorizando aquellos donde hay desplazados internos.

Debido a las condiciones deterioradas de los albergues colectivos se requiere mejorar los espacios con ventilación, iluminación, saneamiento, acceso para silla de ruedas y equipamiento básico. Existe una necesidad de adecuación de albergues colectivos en las zonas con importante número de desplazados internos que se encuentran en asentamiento espontáneos en precarias y riesgosas condiciones.

Para las personas que viven en zonas de alto riesgo a desastres socio-naturales y en condiciones de vulnerabilidad se genera una necesidad de necesidad de albergues colectivos para las temporadas de tormentas y huracanes.

Para mejorar la coordinación de los albergues colectivos y proporcionar el acceso a todos los desplazados internos vulnerables y o migrantes hay una necesidad de una continua actualización de la información mediante el monitoreo de las necesidades. La necesidad de proporcionar productos no alimentarios o transferencia monetaria para cubrir sus necesidades básicas de retorno y sobrevivencia (transporte, comida, material de aseo e higiene) para los desplazados internos o migrantes albergados que deseen llegar a sus destinos.

Hay una necesidad de fortalecer los mecanismos de protección dentro de los albergues, tales como contar baños y duchas separadas por género, bien iluminadas y seguras, entre otros;

Mejorar los registros de manera más detallada sobre el perfil de las personas albergadas por sexo, edad, incluidas su situación o no de gravidez para dar respuesta de salud efectiva en los albergues.

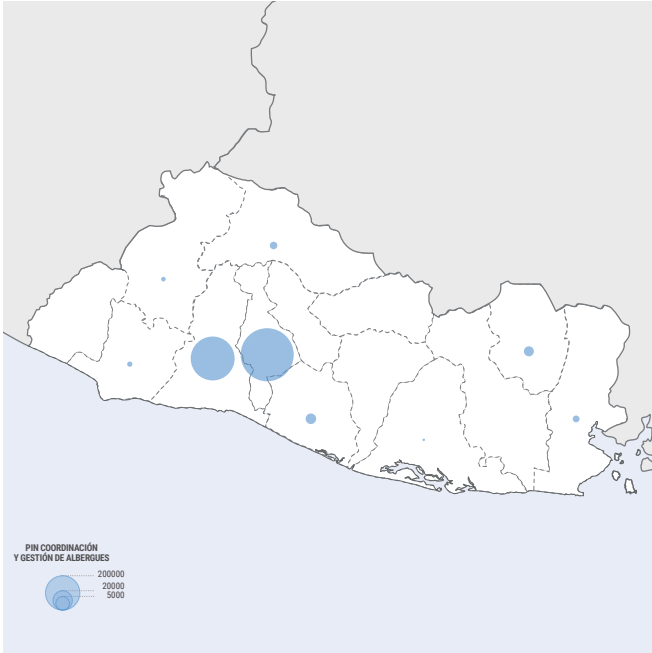
Contextualizar los protocolos y guías armonizadas para el efectivo manejo de los albergues, guías específicas de respuesta humanitaria en temas de salud sexual y reproductiva y VBG y capitalizar las experiencias tras los recientes desastres socio-naturales en estos documentos que permitan mejor adecuar la respuesta. De igual forma el entrenamiento del personal de los albergues a nivel comunitario para asegurar el adecuado uso de estas herramientas en la gestión de los albergues. La provisión de medicamentos para las personas albergadas con enfermedades crónicas y los que padecen de VIH-SIDA.

Proyección de las necesidades

- Sin una adecuada estrategia de cierre de albergues, registro y adecuación a soluciones duraderas, las personas y familias desplazadas se vuelcan a asentamientos espontáneos.
- Con tormentas y huracanes recurrentes y cada vez más intensos, en zonas de alto riesgo donde la población vive en viviendas precarias se generará una necesidad de monitoreo de las necesidades y de albergues temporales para evacuar a las personas.
- Los movimientos mixtos seguirán, así como el retorno de migrantes en estos dos años por lo que se requerirá de albergues colectivos bien gestionados y un mecanismo de coordinación efectivo.
- Con la complejidad de factores desencadenantes para el desplazamiento interno y la movilidad y la necesidad de albergues colectivos se requerirá de consolidar un proceso hacia la preparación y selección de albergues frente a emergencias, acondicionarlos hacia la mitigación de riesgos, formar al personal en la materia y establecer procesos de vinculación y referencia hacia los servicios esenciales.

El Salvador

Personas en necesidad

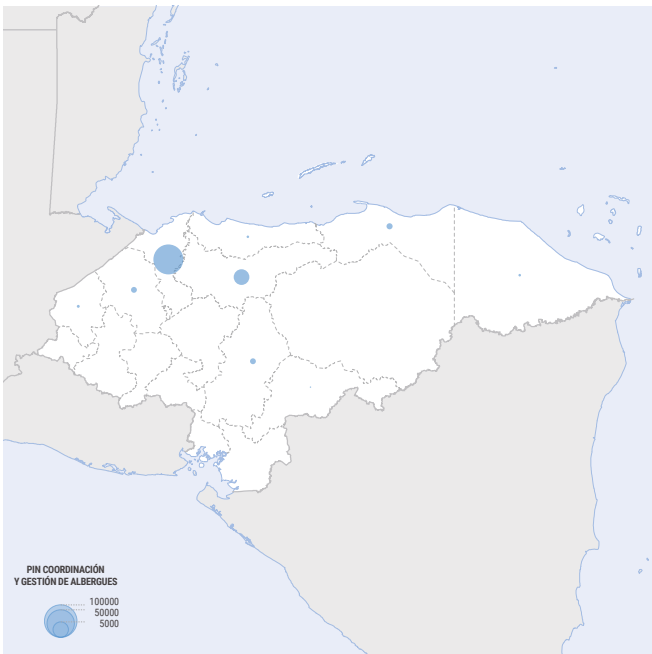


Severidad

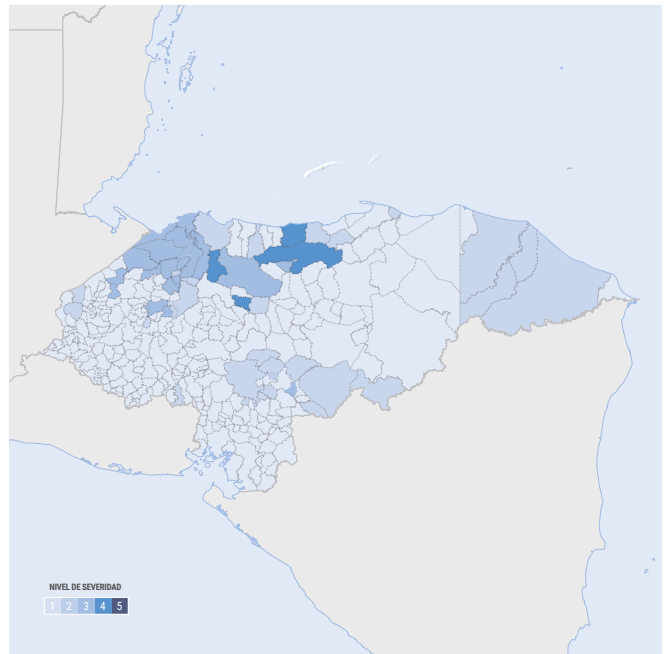


Honduras

Personas en necesidad



Severidad



- Para las mujeres y adolescentes abogar por la respuesta sexual y reproductiva tales como los cuidados del embarazo, parto seguro, anticoncepción prevención de ITS/VIH así como a servicios de manejo clínico de la violencia sexual.
- Con base a las lecciones aprendidas de las respuestas a emergencias previas establecer mecanismos de distribución de los medicamentos para las personas con enfermedades crónicas incluyendo VIH-SIDA.

Monitoreo

Se ha definido un indicador relativo a “Personas con necesidades de albergue temporal y otras necesidades humanitarias complementarias” que se articula a través de la combinación de las proyecciones basada en personas con esta necesidad entre i) personas afectadas por los desastres socio-naturales, ii) personas retornadas y deportadas, las personas migrantes y refugiadas en tránsito, y las personas extranjeras con necesidad de protección y iii) personas desalojadas forzosamente.

Indicadores

#	INDICADOR REGIONAL	FUENTE
1	Número de la población en sitios con servicios de gestión adecuados.	DTM y evaluaciones
2	Número de población en sitios con estructuras de gestión inclusivas y representativas.	DTM y evaluaciones
3	Número de la población con acceso a los servicios básicos.	DTM y evaluaciones

Guatemala: Durante los análisis preliminares para el HNO se determinó con la CONRED que ya no existían necesidades relevantes sobre el tema de albergues derivados de Eta/Iota. Por otro lado, se acordó, que las necesidades de albergamiento para los flujos mixtos de la movilidad humana se abordarían desde el Clúster de Protección como se ha venido haciendo según el Plan de Contingencia correspondiente.

Parte 4:

Análisis de necesidades por país

HONDURAS

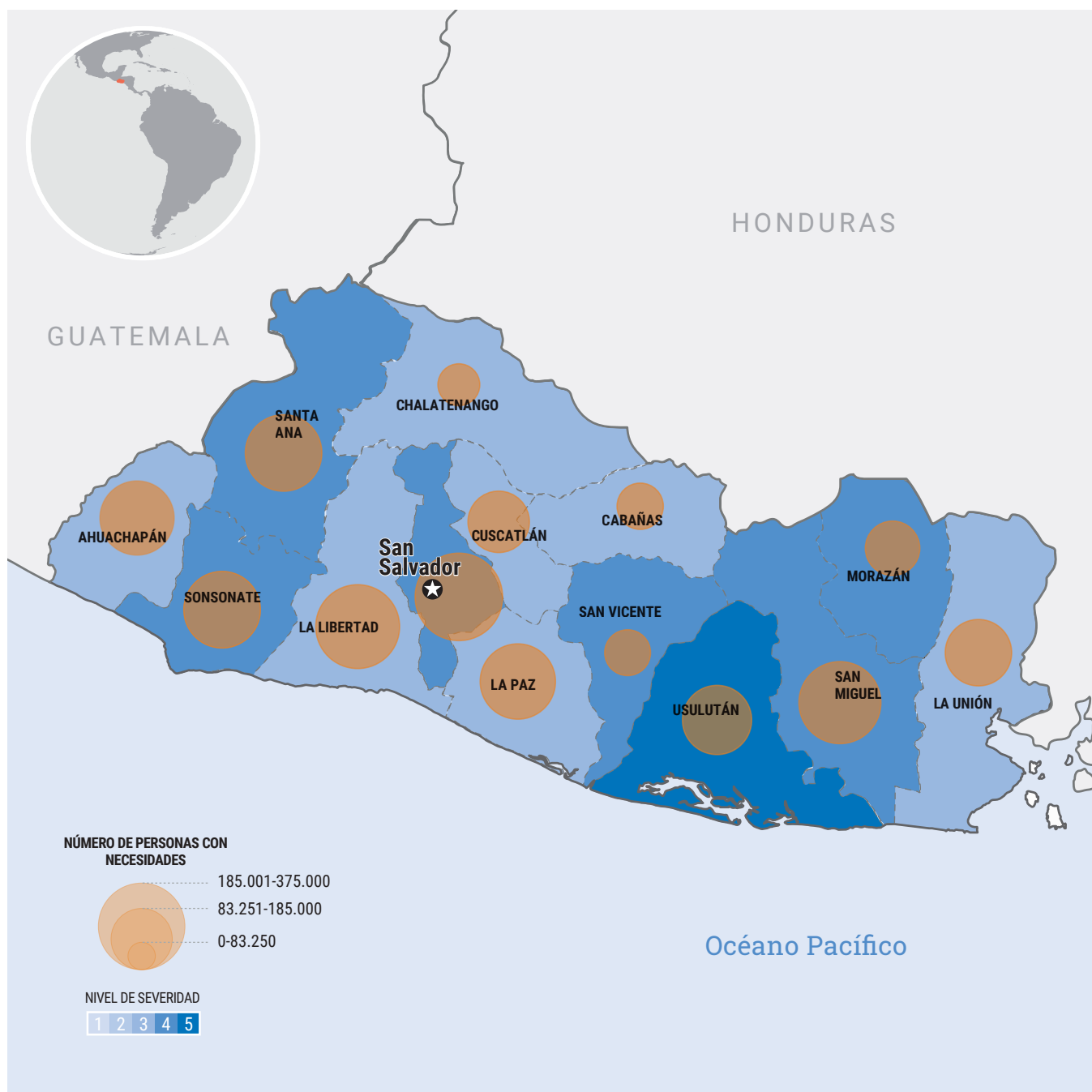
Niña leyendo.

Foto: Plan Internacional Honduras



4.1 El Salvador

Mapa de severidad y personas en necesidad



Las designaciones empleadas y la presentación del material en el informe no implican la expresión de ninguna opinión por parte de la Secretaría de las Naciones Unidas en relación con la condición jurídica de ningún país, territorio, ciudad o zona o de sus autoridades, ni en relación con la delimitación de sus fronteras o límites.

4.1.1

Contexto

A lo largo de 2020, El Salvador estuvo expuesto a múltiples emergencias, la primera debida a la pandemia de la COVID-19 y posteriormente por el impacto de las tormentas tropicales Amanda, Cristóbal, Laura, Eta e Iota y el deslave de gran magnitud en el municipio de Nejapa de San Salvador.

La combinación de la pandemia, la activa temporada de huracanes y los problemas estructurales del país ha exacerbado las necesidades humanitarias de las poblaciones más vulnerables, generando un aumento de la inseguridad alimentaria (de 620.000 personas en inseguridad alimentaria antes de la pandemia a 1.043.661⁹¹ después), altos niveles de desempleo, deterioro drástico de los medios de vida, falta de acceso a servicios esenciales como salud, educación, agua y saneamiento básico e incremento de los niveles de violencia. Mientras el Panorama de Necesidades Humanitarias de febrero 2020 indicaba que 642.000 personas necesitaban algún tipo de asistencia o protección humanitaria (PIN) en El Salvador, se estima que la cifra ascendió a 1,7 millones de personas en 2021, el equivalente a un 25 por ciento de la población salvadoreña. La nueva crisis ocurrió en un contexto

donde el 30.9 por ciento de una población total de 6,7 millones de habitantes vive en situación de pobreza multidimensional, y con un sistema de salud débil y de poca cobertura. En el 2020, el país registraba un 9.8 por ciento de personas en pobreza extrema, es decir un 4.2 por ciento más que en 2019.

Aunque las tasas de homicidios se han reducido significativamente desde 2019, la violencia endémica sigue presente con unas de las tasas de violencia y delincuencia más altas del mundo, incluyendo una tasa de prevalencia de la violencia contra las mujeres y las niñas muy por encima de la tasa global: 63 de cada 100 mujeres entrevistadas sufrieron violencia sexual.

El crimen y la violencia son las principales causas por las que la población sigue siendo víctima del desplazamiento forzado interno, así como catalizadores para la salida a otros países en búsqueda de protección internacional. En 2019, 54.300 personas salvadoreñas solicitaron asilo, elevando el número global de solicitantes de asilo de El Salvador a 136.292 y un número total de refugiados en el mundo de 41.850⁹².

4.1.2

Impacto y necesidades humanitarias de las crisis en personas y servicios

Impacto en el sistema económico

La implementación de medidas de restricción aplicadas para contener la COVID-19 redujo la actividad económica, generando una recesión. Según datos del Banco Central de Reserva (BCR), a fines de 2020 se registró una caída del PIB de -7.9 por ciento respecto a 2019, lo cual equivale a un retroceso de cinco años en el nivel de producción

nacional. A nivel gubernamental; los ingresos tributarios se vieron reducidos a un 25.8 por ciento de lo recaudado en otros periodos, impactando la capacidad del gobierno de invertir y sostener programas sociales⁹³.

En cuanto al empleo formal, según cifras del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) se calcula que se

91 DIGESTYC, Encuesta Nacional de Violencia Sexual, 2019.

92 ACNUR, Tendencias Globales del Desplazamiento Forzado en 2019, publicado en 2020.

93 Fusades 2021. Informe de coyuntura económica mayo 2021.

perdieron más de 67.000 empleos entre febrero y junio de 2020 debido a la crisis. Se calcula que más del 70 por ciento de las personas ocupadas trabajan en una micro o pequeña empresa (MYPES) y que la mayor parte de las MYPES pertenecen al sector informal, donde se ha reportado mayores afectaciones como cierre de negocio, reducción de actividad y personal, etc⁹⁴.

Impacto en sistemas de salud

Aunque El Salvador cuenta con cobertura de salud de primer nivel⁹⁵, enfrenta desafíos vinculados a la fragmentación del Sistema Nacional de Salud y a la insuficiente coordinación con el sector privado. Por otra parte, solo el 2.5 por ciento⁹⁶ del PIB se invierte en salud mientras que la OMS recomienda un 6 por ciento.

La emergencia por COVID-19 y la limitación de movilidad decretada en el país afectaron la provisión de servicios esenciales de salud (vacunación, atención de salud materno-infantil, de salud sexual reproductiva, provisión de medicamentos, atención de la violencia sexual, entre otras). Además, impactaron la cadena de suministro de insumos médicos, medicamentos y equipos para la atención de la pandemia.

La pérdida de empleo y el incremento en los costos de los alimentos por los problemas de interrupción de la cadena de suministros repercuten directamente en el estado nutricional y en la salud integral de las personas, en especial de los grupos en situación de vulnerabilidad como los menores de cinco años, las mujeres embarazadas y población de la tercera edad.

Por otra parte, la maternidad a edades tempranas representa un mayor riesgo en la salud de las jóvenes mujeres y en la de sus hijos. De acuerdo con las estadísticas del MINSAL, las muertes maternas por causas directas e indirectas ocurridas en el sistema de salud pasaron de 27 en 2019 a 46 en 2020; mientras que la reducción de los servicios de control de embarazo y de vacunación en menores de cinco años en tiempos

de pandemia debería de repercutir en los indicadores de morbimortalidad principales.

Impacto en seguridad alimentaria y medios de vida

Las medidas de contención implementadas para mitigar los efectos de la COVID-19 propiciaron una caída de los ingresos en los hogares, impactando de manera inmediata, directa y sostenida principalmente a los hogares en pobreza, que en su mayoría desempeñan actividades de subsistencia ganando un limitado ingreso. El estado proporcionó ayuda humanitaria estatal y de cooperación externa entre abril y junio 2020, evitando una mayor severidad de inseguridad alimentaria aguda en este período.

También, la influencia de las tormentas tropicales Amanda, Cristóbal, Eta e Iota generaron impactos adversos e incrementaron el número de hogares en inseguridad alimentaria severa, principalmente de sectores dependientes de la agricultura de subsistencia. Un 65 por ciento de hogares han visto disminuidos sus ingresos o reducidos al mínimo desde la pandemia, la falta de disponibilidad de recursos financieros y físicos volviéndose consecuentemente uno de los principales riesgos para la seguridad alimentaria y nutricional.

Según el análisis de la Clasificación Integrada de seguridad alimentaria en Fases (CIF) en su último informe (diciembre 2020), entre noviembre de 2020 a febrero de 2021, 684.000 personas (10 por ciento de la población) se encontraba en Crisis alimentaria o peor (Fase 3 o peor de la CIF). El departamento más afectado era Ahuachapán clasificado en Fase 3. Para el 2021 y según la primera proyección de la CIF, de marzo a mayo 2021, la población en condición de Crisis o peor (Fase 3 de la CIF o peor) sería de 985.000 personas (15 por ciento de la población) y para el período comprendido entre junio y agosto 2021, el número de personas en inseguridad alimentaria se incrementaría a 1.04 millones de personas (16 por ciento de la población).

94 "Informe sobre la situación de la empresa salvadoreña frente a la emergencia COVID-19" de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.

95 Primer nivel de atención cubierto con el modelo de instalación de los Equipos Comunitarios de Salud Familiar y Especializados, ECOS.

96 En el sitio del Banco Mundial para el 2018 fue de 7.2% <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=SV>

La escasez alimentaria puede conducir a estrategias de enfrentamiento peligrosas por parte de las mujeres, como viajar distancias más largas a fin de conseguir alimentos exponiéndose al riesgo de sufrir violación y otras agresiones sexuales o acudir al sexo transaccional a cambio de dinero para comprar alimentos, exponiéndose a explotación sexual, violencia y/o una mayor susceptibilidad al VIH y otras ITS.

Impacto en la nutrición de la población

El impacto de la pandemia COVID-19 y de las tormentas tropicales ha repercutido en el estado nutricional de las familias, en especial de los menores de cinco años y de las embarazadas. Previo a la crisis, el perfil nutricional de país indicaba la triple carga de malnutrición, que consiste en la coexistencia de condiciones de desnutrición, hambre oculta, sobrepeso y obesidad. Las emergencias han acentuado esta situación afectando a los más vulnerables, con mayor relevancia por tratarse de perturbaciones por un período sostenido, que afectan el desarrollo intrauterino con efectos a largo plazo (efecto conocido como “programación⁹⁷”), manifestándose como bajo peso en el recién nacido y enfermedades cardiovasculares, obesidad y diabetes en la etapa adulta. Una mujer embarazada con anemia -lo que indica una privación de nutrientes- también puede tener un bebé con bajo peso al nacer, parto prematuro y complicaciones.

En este sentido, durante las crisis destaca un aumento en el bajo peso al nacer, anemia en mujeres embarazadas, anemia y sobrepeso en menores de cinco años, así como la baja prevalencia de lactancia materna. Es urgente atender a estos grupos para reducir el impacto de la malnutrición tanto en su ciclo de vida como en la de su progenie, evitando así perpetuar el subdesarrollo humano.

Impacto en la protección y derechos

El país registra unos 71.500 desplazamientos internos causados por la violencia.

Las dinámicas del desplazamiento interno y de las deportaciones tienen un impacto en las comunidades receptoras. Muchas de estas ven incrementadas sus necesidades por la llegada de población en condiciones de vulnerabilidad y no tienen la capacidad para cubrir sus necesidades. Adicionalmente, se evidencia que los municipios receptores coinciden con aquellos con menor desarrollo económico y social.

El desplazamiento forzado tiene un efecto negativo multidimensional en el ejercicio de los derechos. A nivel comunitario, la falta de presencia estatal y el control social y territorial de las pandillas obstaculizan el acceso de las personas desplazadas internas a los derechos. Para mitigar los riesgos, las personas afectadas por la violencia suelen limitar sus movimientos, cayendo en una vulnerabilidad más profunda y afectando sus fuentes de ingreso. Una vez que huyen de su comunidad, las personas dejan atrás sus propiedades, pertenencias, trayectorias educativas y oportunidades de empleo. Además, el desplazamiento da como resultado la pérdida de las redes sociales, comunitarias y familiares, al tiempo que genera nuevos retos relacionados con el establecimiento de la familia en un nuevo lugar. La reubicación en ocasiones no es una solución duradera, ya que las pandillas tienen una red extendida en todo el país y pueden localizar fácilmente a una familia desplazada establecida en otro lugar. Las mujeres, las niñas, los niños y los adolescentes corren un mayor riesgo de ser blanco de esos grupos delincuentes. Esta situación crea un ciclo de desplazamiento que a menudo es difícil de romper. En algunos casos, los desplazamientos internos recurrentes llevan a la decisión de abandonar el país para buscar protección en otro lugar.

Los refugiados y solicitantes de asilo enfrentan desafíos prácticos en relación con el acceso a oportunidades de trabajo, financiamiento o crédito, licencias profesionales / educación y apoyo psicosocial, principalmente debido al no reconocimiento de su documento de identidad

97 <https://doi.org/10.1152/ajpregu.00418.2004> y <https://doi.org/10.1038/s41893-021-00684-9>

(residencia temporal y permanente) por parte de la población, instituciones y otros grupos de interés.

Impacto en la Violencia Basada en Género

En El Salvador las mujeres están constantemente expuestas a la VBG. El país registra una de las tasas de feminicidios más altas de América Latina⁹⁸ y a lo largo de la vida el 65 por ciento de las mujeres han sufrido por lo menos un caso de VBG⁹⁹.

Las consecuencias de las diferentes crisis como el desplazamiento forzado y la estadía en los albergues exponen mujeres y adolescentes a un creciente riesgo de VBG particularmente de la violencia sexual. La falta de servicios esenciales de respuesta a la VBG durante el desplazamiento, en las comunidades receptoras y en los albergues, pone en riesgo la vida de las sobrevivientes e incrementa el aislamiento, el estigma, y los códigos del silencio e incrementa el recurso a mecanismos de afrontamiento negativo.

A pesar del alto índice de VBG, solo el 17 por ciento de las sobrevivientes acude a servicios de atención o busca ayuda¹⁰⁰. Esto se debe a la desconfianza hacia los proveedores de servicios, a las brechas de los servicios de respuesta en término de calidad y cantidad, al alto índice de impunidad y al miedo de represalias para buscar ayuda. En término de impunidad, es suficiente notar que de las 4.590 denuncias de abuso y agresiones sexuales contra niñas, niños y adolescentes del 2018 tan sólo 444 (menos del 10 por ciento) recibieron una sentencia condenatoria¹⁰¹.

Impacto en Niñez y Adolescencia

El efecto del confinamiento a causa de la COVID-19 generó un aumento del estrés en las familias, incrementando la violencia doméstica y la violencia

sexual. Durante el 2020, se denunciaron 2.086 casos de violencia sexual, 9 de cada 10 víctimas siendo niñas. Los embarazos adolescentes superaron los 6.800 casos (PDNA, 2020). Durante el 2020 se identificaron 74 víctimas de feminicidio (70 por ciento menos que en 2019), de las cuales 11 eran menores de 18 años (FGR, 2020).

El desplazamiento forzado por violencia y las acciones de control, vigilancia e intimidación de las pandillas en los territorios donde se encuentran tienden a afectar a adolescentes, ya sea a través de la violencia de género y sexual que se ejerce sobre las mujeres adolescentes o por medio de amenazas y agresiones a los hombres jóvenes¹⁰². Sumado a ello, la demanda de apoyo psicosocial ha aumentado considerablemente entre los niños y niñas, estos perdieron un espacio de socialización esencial como es la escuela, presentando estados de ansiedad y cambios de comportamiento (PDDH, 2020).

El número total de retornados registrados entre enero y abril del 2021 en El Salvador¹⁰³, es de 1.381, de los cuales 415 son niños y niñas (268 niños y 147 niñas). Es esencial contar con espacios seguros y servicios integrales y especializados de atención para los niños y niñas en especial para retornados y desplazados y para víctimas de violencia con el fin de que se puedan reintegrar en la sociedad y crear mecanismos de denuncia y de gestión de casos efectivos.

Impacto en Agua, Saneamiento e Higiene

La provisión inadecuada de servicios de WASH refuerza las desigualdades e inequidades sociales, en particular para las poblaciones más vulnerables. Las mujeres y las niñas, quienes a menudo se encargan de asegurar el acceso al agua para sus familias, sufren en mayor medida la falta de agua y saneamiento, sobre todo por la necesidad básica de estos servicios durante

98 CEPAL 2020. <https://oig.cepal.org/es/indicadores/feminicidio>

99 DIGESTYC, Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres, 2017.

100 DIGESTYC 2019 Encuesta Nacional de Violencia Sexual.

101 Fiscalía General de República (FGR) 2018.

102 Informe: Desplazamiento forzado interno por violencia y las respuestas ante el fenómeno en El Salvador. El Estado, las organizaciones sociales y las víctimas, Servicio Social Pasionista, 2021.

103 OIM, ONU Migraciones "El Salvador, cifras oficiales de retornos: enero – abril 2021": <https://mic.iom.int/webntmi/descargas/sv/2021/4/SVabr2021mun.pdf>

la menstruación, el embarazo o la lactancia materna, especialmente en hogares monoparentales.

En El Salvador, más de 700.000 personas se abastecen de fuentes de agua no mejoradas y sin protección o no cuentan con el servicio de agua o saneamiento básico en sus viviendas. La diarrea constituye una de las principales causas de mortalidad de niños y niñas de cinco años en la red de establecimientos de salud del MINSAL¹⁰⁴.

En la medida que las emergencias impactan las fuentes de abastecimiento de agua, se acentúa el impacto en las familias albergadas, debido a una disminución tanto en la cantidad como en la calidad de agua, lo cual limita las prácticas de lavado de manos, disposición de excretas, limpieza de sanitarios, higiene de instalaciones y de los alimentos, lo que se verá reflejado en enfermedades o decremento de la salud.

Otro reto para el país es la calidad de los servicios de agua, saneamiento e higiene. Según el Informe sobre la calidad de agua superficial del MARN (2020), el 100 por ciento de las aguas superficiales no pueden ser potabilizadas por métodos convencionales, lo que dificulta que estas sean una fuente viable para ser utilizada por la población durante una emergencia, limitando aún más las fuentes de agua alternativas a ser usadas para abastecer a la población en necesidad y a incrementar la rigurosidad en el tratamiento de las aguas para consumo durante una emergencia¹⁰⁵.

Impacto en el acceso humanitario

Las restricciones generaron dificultades de acceso generalizado para la provisión de ayuda humanitaria. La temporada de lluvias representan un riesgo para el país en materia de inundaciones, las cuales afectaron los accesos a determinadas zonas afectadas e impactando la infraestructura vial, ocasionando retrasos en el traslado y entrega de los insumos cuando existen daños o se

presentan derrumbes, deslaves, anegamientos u otro tipo de contratiempos.

La violencia generada por el control territorial de pandillas, combinada con la falta de mecanismos efectivos de prevención y protección de parte de las autoridades, limita también el acceso a territorios dominados por estos grupos.

Impacto en la educación: El cierre de los sistemas educativos ha impactado directamente a 1,1 millón de estudiantes. El proceso de continuidad educativa implementado desde plataformas virtuales deja en evidencia la limitada capacidad de adaptación a sistemas de educación virtual/en línea, acceso a plataformas virtuales y/o dispositivos digitales (61 por ciento de los estudiantes tienen acceso.) La pandemia ha incrementado la exclusión y el rezago escolar, que en muchos casos ha terminado con el abandono escolar. En 2020 la deserción escolar entre 16-18 años fue de 38.2 por ciento. Además, por motivos del cierre de los centros educativos por COVID-19, los 6.6 años de aprendizaje efectivo se reducen a 5.7 años.

Con el cierre de las escuelas, las niñas, niños y adolescentes (NNA) pierden un espacio de protección, donde reciben la única comida del día y los controles de salud, donde desarrollan sus habilidades sociales al interactuar con sus pares y docentes, entre otros; situación especialmente crítica para aquellos NNA en situación de mayor vulnerabilidad, lo que genera impactos en la salud mental de los estudiantes, frustración y violencia intrafamiliar¹⁰⁶.

La falta de infraestructura destinada a albergar temporalmente a las personas afectadas por diversas emergencias hace que los centros educativos sean utilizados como albergues temporales, lo que suspende o retrasa la asistencia de niños y niñas y, por otro lado, ocasiona deterioros en la infraestructura escolar.

104 MINSAL - Informes de causas frecuentes y principales de consulta y mortalidad en la red de establecimientos de salud. 2020.

105 MARN. Informe de la Calidad de Agua en los Ríos de El Salvador. 2020.

106 MINEDUCYT (2017 y 2018). Estudiantes por causa de retiro del centro educativo. Dpto. Estadísticas Educativas, disponible en: <https://bit.ly/31STX67>

Impacto en la vivienda y el alojamiento

Las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal golpearon a El Salvador en rápida sucesión, causando lluvias, vientos fuertes y daños provocados por las inundaciones. Unas 12.154 personas tuvieron que ser evacuadas y buscar refugio en 210 albergues. Según fuentes gubernamentales y ONG internacionales, 83 viviendas fueron completamente dañadas, 407 con daños severos y 2.060 con daños leves¹⁰⁷. En noviembre de 2020, el paso de Eta ocasionó el desplazamiento de 2.264 personas hacia albergues colectivos.

Grupos más vulnerables

Entre los perfiles vulnerables se han identificado a los niños, niñas y adolescentes (NNA), mujeres embarazadas y lactantes, población LGBTQ+, personas adultas mayores, sobrevivientes de violencia de género y de otros tipos de violencia, personas con condiciones médicas precedentes, personas con discapacidad o diversidad funcional, deportadas, que salieron por motivos de violencia, privadas de libertad en centros penitenciarios y centros de detención juvenil. Se añaden personas migrantes y en movimiento, mujeres, jóvenes, adolescentes con discapacidad con poco acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.

En El Salvador, la niñez menor de 5 años presenta diferentes formas de malnutrición en todas sus formas: anemia (21 por ciento), desnutrición aguda (2.5 por ciento), retraso en el crecimiento (16.3 por ciento), bajo peso (5.9 por ciento), y sobrepeso (6.4 por ciento), que los expone a enfermedades que pueden poner su vida en riesgo. En niños y niñas menores de 6 meses, la práctica de lactancia materna exclusiva alcanza un poco menos de la mitad (46.7 por ciento) de estos, dejando a la otra mitad expuestas a un mayor riesgo de infección.

Las mujeres con desnutrición tienen más probabilidades de enfermarse durante el embarazo y tienen un mayor riesgo de parto prematuro, aborto espontáneo, muerte fetal e incluso su propia muerte. También son más propensas a contraer una infección, sufrir debilidad y tener menor productividad. En El Salvador, el 29 por ciento de mujeres embarazadas tiene anemia. El número de recién nacidos con bajo peso, que refleja la malnutrición en el embarazo, alcanzó 9.15 por ciento. Este número se duplicó en los recién nacidos de madres adolescentes (18.36 por ciento).

Evolución prevista de la situación

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que la crisis económica asociada a la pandemia de COVID-19 impactará a 1,3 millones de empleos en El Salvador, lo cual equivale al 46.6 por ciento del total de los trabajadores en el país. Aunque desde marzo de 2020 el país aplica medidas de protección social para la población en situación de pobreza y vulnerabilidad, existe incertidumbre ante la posible falta de solvencia económica para seguir atendiendo las necesidades, lo que afectará aún más a los más vulnerables.

De mantenerse o incrementarse la pobreza, el bajo acceso a alimentos en los hogares y otras condiciones de privación, se experimentará un incremento de bajo peso al nacer, partos prematuros y malnutrición tanto en la niñez como en las mujeres embarazadas, cuyas consecuencias permanecerán durante el ciclo de vida, incrementará significativamente el gasto público en salud y afectará la economía nacional.

Durante los próximos 12 meses, es probable que aumente el número de personas desplazadas internas y personas en riesgo de desplazamiento interno debido a las tendencias constantes de inseguridad y violencia, junto con factores socioeconómicos. Adicionalmente, en los próximos seis meses los riesgos y necesidades derivados

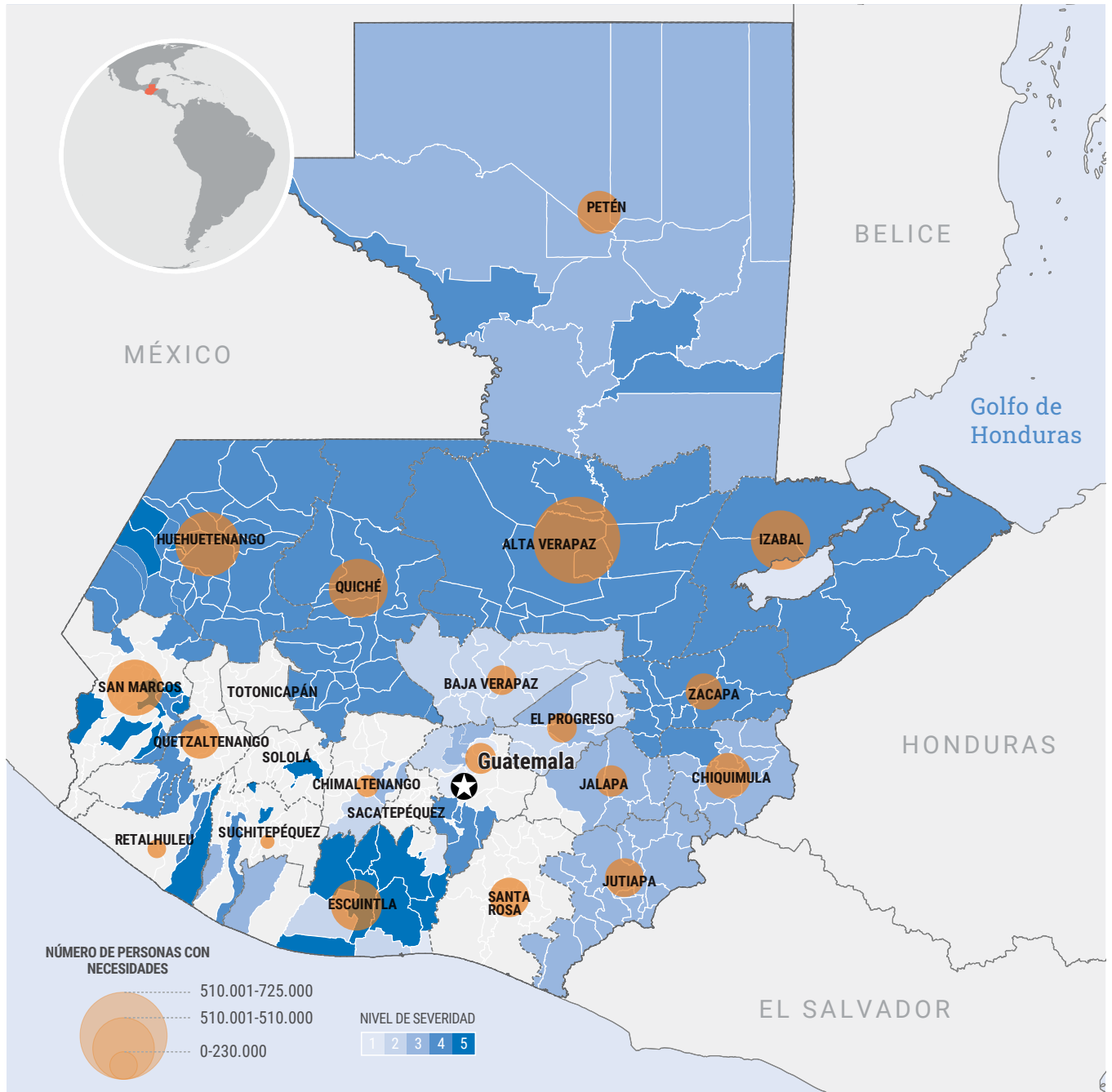
107 DREF Plan of Action. El Salvador: Tropical Storm Amanda. IFRC 9 de junio de 2020. <https://go.ifrc.org/emergencias/4450#reports>

del desplazamiento se verán exacerbados por el impacto de la temporada de tormentas y huracanes que se prevé serán de mayor intensidad que en 2020.

Con base en el análisis de las tendencias 2016-2019, ACNUR estima que en 2022 el número de deportaciones alcanzará aproximadamente 50.000, de las cuales 10.000 tendrán necesidades de protección (20 por ciento del número total de personas deportadas).

4.2 Guatemala

Mapa de severidad y personas en necesidad



Las designaciones empleadas y la presentación del material en el informe no implican la expresión de ninguna opinión por parte de la Secretaría de las Naciones Unidas en relación con la condición jurídica de ningún país, territorio, ciudad o zona o de sus autoridades, ni en relación con la delimitación de sus fronteras o límites.

4.2.1

Contexto

Guatemala es el país más poblado de Centroamérica con 17,1 millones de habitantes, de los cuales 8,7 millones son mujeres (50.8 por ciento) y 8,4 millones son hombres (49.2 por ciento). Se estima que un 53 por ciento de la población vive en zonas urbanas o periurbanas (Censo de Población, INE, 2018).

En la última década, Guatemala ha sufrido un considerable incremento en la recurrencia y magnitud de los desastres y crisis humanitarias. La inseguridad alimentaria se ha posicionado como una crisis permanente que afecta, ya no solamente a las familias vulnerables en el Corredor Seco, sino también a las familias empobrecidas del altiplano centro-occidental, específicamente familias indígenas de agricultura de subsistencia y jornaleros. Las evaluaciones EFSA y CIF han demostrado que a partir de 2014 ha habido un incremento sostenido de población afectada y con necesidades de 600.000 personas en 2013 a 3,5 millones en 2021.

Mientras tanto, el flagelo de la desnutrición aguda, en el marco de un país con la mitad de sus niños y niñas con desnutrición crónica, ha aumentado considerablemente de unos 13.500 casos anuales en 2013 a 28.000 en 2020, alcanzando 13.930 casos al 30 de mayo 2021 (Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, SIISAN).

El fenómeno de la migración también está generando una crisis humanitaria tanto en el país como a lo largo del corredor migratorio Guatemala-México y en la frontera sur de Estados Unidos. De acuerdo con estadísticas de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, el número de migrantes guatemaltecos aprehendidos anualmente en la frontera ha aumentado desde 17.338 personas en 2007 hasta 265.129 personas en 2019. Dentro de los flujos migratorios destacan la “niñez y menores no acompañados” con 8.567 de ellos aprehendidos en 2020, un número que se elevó a 30.376 en mayo de 2021.

Con el embate de la pandemia de COVID-19 en 2020, la capacidad de atención en los hospitales de Guatemala se vio rebasada, comenzando con la provisión de los servicios rutinarios de emergencias, enfermedad común y tratamientos médicos. Hasta la fecha de elaboración del presente HNO, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) reporta 271.703 casos acumulados y 8.455 personas fallecidas.

Adicionalmente, en noviembre de 2020 las tormentas tropicales Eta e Iota impactaron gran parte del territorio guatemalteco. Los reportes de CONRED contabilizaron casi 4.000 incidentes con 2,4 millones de personas afectadas y 1,8 millones de personas damnificadas. Las tormentas dañaron y destruyeron alrededor de 17.259 viviendas (99.338 personas) e infraestructura comunitaria (sistemas de agua, escuelas, puentes de hamaca, pozos artesanales), cultivos y medios de vida, infraestructura vial, así como infraestructura del sistema de salud. Los deslizamientos de tierra y rocas de gran magnitud cobraron la vida de al menos 61 personas y unas 100 desaparecidas. En su punto más álgido, las tormentas forzaron el desplazamiento de unas 300.000 personas, las cuales fueron albergadas en más de 400 albergues “oficiales”, unos 1.000 albergues “no-oficiales” y en un número indeterminado de casas de familiares y amistades (auto-albergue).

4.2.2

Impacto y necesidades humanitarias de las crisis en personas y servicios

Impacto en seguridad alimentaria y medios de vida

En Guatemala la población más vulnerable es la de pequeños productores y jornaleros ya que no cuentan con ningún tipo de protección social y dependen totalmente de circunstancias que no son controladas por ellos como el clima y precios de mercado entre otros.

Actualmente se estima que 174.000 personas necesitan asistencia alimentaria inmediata y de forma completa ya que no logran garantizar la Seguridad alimentaria, adicionalmente 3,3 millones de personas necesitaran asistencia complementaria en el transcurso del año.

En los departamentos de Alta Verapaz, Chiquimula, El Progreso, Huehuetenango, Izabal, Jutiapa, Petén, Quiché, Santa Rosa y Zacapa unas 300.000 familias vieron afectado su entorno habitacional y productivo. Se reportaron daños en cultivos de granos básicos, hortalizas y cultivos industrializables debido a lluvias y vientos provocados por las tormentas Eta e Iota. En estos departamentos, se estima un área dañada de 136,761.20 hectáreas y 204.500 familias afectadas. La estimación de la pérdida económica asciende a US\$115 millones. Los cultivos más afectados fueron maíz, frijol, plátano, banano, tomate, cebolla y brócoli, sumando daños en cardamomo y café.

Igualmente, se reportaron pérdidas en el sector pecuario en aves, bovinos, porcinos, equinos, pequeños rumiantes y acuícolas. Se estima un total de 1.124.076 animales muertos y 6.922 familias afectadas.

El Análisis Rápido de Género por afectación de Eta e Iota, realizado por ONU Mujeres y CARE, muestra que las mujeres perdieron medios de vida y capital físico que constituían parte de su patrimonio esencial para la sobrevivencia y para la generación de ingresos. Los daños para las mujeres fueron múltiples. Un 75 por ciento perdió siembras familiares las cuales eran el alimento familiar a mediano y corto plazo, sus animales de patio

fallecieron y un 57 por ciento indicó que perdieron los alimentos que tenían en sus viviendas al ser afectadas por las inundaciones. El 24.4 por ciento de hogares con mujeres jefas de hogar, estarán en riesgo debido a que estos son tradicionalmente monoparentales, lo que implica la ausencia de un segundo ingreso potencial, o de una persona que comparta los cuidados del hogar, de los niños y adultos mayores, por lo que en muchas ocasiones optan por consumir menos alimentos o tomar préstamos de dinero informales con altas tasas de interés.

Impacto en la nutrición

Las diferentes crisis que han afectado Guatemala (crisis migratoria, la sequía en el Corredor Seco, el efecto de tormentas como Eta e Iota, el cambio climático y los efectos de la pandemia por COVID-19) ha causado la pérdida de cultivos, empleos e ingresos causando una disminución de la disponibilidad y el acceso a los alimentos provocando que las familias utilicen estrategias de afrontamiento como el recorte de gastos en salud y nutrición, y una dieta mínima constituida básicamente por maíz, azúcar y algunas hierbas, entre otros. Más del 80 por ciento de los hogares indica depender de alimentos menos costosos y el 50 por ciento limitar el tamaño de la porción. Por otro lado, la falta de acceso a los servicios de salud y nutrición ha limitado el acceso a la suplementación en micronutrientes, especialmente en mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. También ha limitado el apoyo a las familias a adoptar prácticas adecuadas de alimentación de los lactantes y niñas y niños pequeños, especialmente la lactancia materna y la alimentación complementaria (en mayores de 6 meses).

Estos factores han resultado en una ingesta alimentaria reducida y un mayor riesgo de infecciones lo que conduce a la desnutrición aguda, y aumenta el riesgo de muerte, en particular en los más vulnerables del punto de vista nutricional: la niñez menor de 5 años, especialmente la menor de 2 años y las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. Esto se suma a la desnutrición

crónica, particularmente alarmante en Guatemala: el 46.5 por ciento de la población menor de 5 años tiene desnutrición crónica, ENSMI 2015, ocupando el primer lugar de la región. En la población escolar se encuentran porcentajes más altos en niños y niñas de origen indígena y en aquellos que habitan en áreas rurales, donde los índices de desnutrición crónica alcanzan el 80 por ciento (entre la población maya). Las poblaciones indígenas son las que están más afectadas por la desnutrición crónica (61 por ciento, llegando en algunos casos hasta 78 por ciento), y en consecuencia también tienen mayor probabilidad de presentar desnutrición aguda debido a un sistema inmunológico débil y poco desarrollado debido a la desnutrición crónica.

La desnutrición aguda es el resultado de reducciones repentinas en la ingesta de alimentos o la calidad de la dieta y enfermedades infecciosas recurrentes. Es usualmente utilizada como un indicador de la gravedad del impacto humanitario. Los niños con desnutrición aguda tienen una fisiología y un metabolismo severamente alterados y tienen un mayor riesgo de muerte por su condición. La desnutrición aguda severa incrementa hasta nueve veces el riesgo de mortalidad en la niñez menor de cinco años. En el año 2020, el Sistema de Información Gerencial en Salud (SIGSA), del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, reportó 27.913 casos acumulados de desnutrición aguda en menores de cinco años. En 2021, a la Semana Epidemiológica 20, el MSPAS reporta 13.387 casos acumulados de niñas y niños menores de 5 años, de los cuales el 26.4 por ciento corresponde a desnutrición aguda severa y el 73.6 por ciento a desnutrición aguda moderada; el 72 por ciento son menores de 2 años de los cuales el 9.3 por ciento corresponde a menores de 6 meses, indicando la severidad de la situación.

Impacto de protección y derechos

Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 151.201 personas fueron retornadas desde México y Estados Unidos entre 2019 y 2020. La mayor parte de estas personas pertenecen a los departamentos occidentales, con mayoría de población indígena, y a lo largo del cinturón de pobreza. La DTM elaborada por la OIM con 2.101 personas retornadas en el marco de la COVID-19, resalta que el 64.1 por ciento

ha migrado por razones económicas, un 9.1 por ciento por reunificación familiar, un 3.3 por ciento por algún tipo de violencia y un 0.4 por ciento por discriminación por diversidad sexual. Adicionalmente, la encuesta reporta que un 5.9 por ciento ha experimentado desplazamiento debido a la violencia generalizada y un 3.5 por ciento de las personas retornadas manifiesta que no puede regresar a su comunidad de origen ya que “sus vidas corren peligro”.

Desde finales de 2018 surgió una nueva forma de migrar hacia los Estados Unidos: las caravanas, que se han organizado principalmente en Honduras, y que a veces cuentan con participación de personas de El Salvador, Guatemala y otras nacionalidades.

Pobreza, desigualdad, violencia, conflictos sociales y por la tierra, así como la violencia doméstica y social contra mujeres, niñas y niños, se acentúan durante la ocurrencia de eventos socioambientales.

A pesar de la mejora registrada en ciertos indicadores de seguridad, el alcance, control y violencia ejercida por grupos de delincuencia organizada continúan planteando serios desafíos a la protección de la población. El crimen organizado es uno de los principales generadores de desplazamiento forzado en Guatemala, donde los principales hechos delictivos están relacionados con la violencia generada por el narcotráfico y bandas criminales. El fenómeno del desplazamiento forzado, en todas sus dinámicas, es un problema que repercute negativamente en el bienestar de las personas. Las poblaciones se ven obligadas a recurrir constantemente a mecanismos de afrontamiento negativos (trabajo infantil, mendicidad, sexo por supervivencia) y prácticas peligrosas que causan daño personal y familiar y generan una dependencia continua de asistencia humanitaria y protección.

En Guatemala, existe una profunda desigualdad de género, sustentada por una cultura patriarcal y conservadora y un sistema frágil de seguridad y respuestas judiciales que genera impunidad. La violencia y la exclusión contra las mujeres, particularmente contra mujeres indígenas y rurales, ha sido perpetuada como una herramienta de subordinación y control de la vida y cuerpo de las mujeres. Durante la pandemia, los registros de femicidios mostraron una tendencia a la baja, sin embargo se

incrementó exponencialmente el número de mujeres desaparecidas y los presuntos suicidios, lo que demuestra la fragilidad de la situación de las mujeres en contextos de crisis humanitarias.

El índice global de la brecha de género para Guatemala en 2020 debido a las crisis se situó en 0.666 colocando al país en el puesto número 113 de los 153 países del ranking, (puesto 107 en 2018). Este retroceso significa mayores brechas de desigualdad entre hombres y mujeres en términos de participación económica y oportunidades, salud, educación, economía y participación política, así como la forma en que se están distribuyendo sus recursos y oportunidades.

Impactos en la Protección de la Niñez y la Adolescencia

Se estima que al menos 796.000 niños, niñas y adolescentes tienen necesidades urgentes de atención humanitaria con un acceso a servicios especializados de protección de la niñez, quienes han sido afectados por la sequía, la migración y las tormentas. Eta e Iota dejaron una grave afectación en el país, siendo Alta Verapaz e Izabal los departamentos más afectados, con graves pérdidas. El 25 por ciento de la niñez de estos departamentos (175.000 personas) requieren seguimiento psicosocial, acciones de prevención del abandono, separación familiar, protección de la explotación y abuso sexual.

En materia de movilidad humana, durante el año 2020, a pesar de la pandemia por COVID-19, la migración de niñas, niños y adolescentes continuó. Durante este periodo más de 4.500 niñas, niños y adolescentes no acompañados fueron retornados de México y Estados Unidos y más de 2.100 acompañados. Aunado a ellos, en el año 2020 se dieron dos flujos masivos de personas en movilidad humana “Caravana” en enero y octubre y una en enero 2021, cada una con más de 4.000 personas, entre ellas un aproximado de 30 por ciento de niñas, niños y adolescentes, requiriendo atención psicosocial para la detección y prevención de violencia, explotación y abuso sexual, así como seguimiento en los procesos de

reunificación familiar y desarrollo de resiliencia, aunado al apoyo de atención médica, kits de higiene y kits lúdicos, equipos de Protección Personal para el personal que atiende, así como para las niñas, niños y adolescentes en los albergues.

En el año 2020 se evidenció una notable disminución en la denuncia de delitos contra la niñez, solicitudes de protección administrativa y judicial, así como de los reportes de niñez desaparecida; en algunos casos llegó hasta el 50 por ciento, lo que evidenció la dificultad de acceso a los servicios de protección durante la emergencia, y no una disminución real de la violencia contra la niñez y adolescencia.

Impacto en la Violencia Basada en Género

En Guatemala la violencia basada en género es un fenómeno alarmante, especialmente en los grupos de población más vulnerables (mujeres, indígenas, migrantes y personas con discapacidad). Las mujeres solicitantes de refugio y refugiadas se exponen a las formas más comunes de VBG, las mujeres y niñas migrantes huyen de sus países debido a los niveles de violencia sistemática y generalizada por grupos delictivos armados, la persecución de pandillas, la violencia sexual ejercida por maras y la violencia doméstica. La VBG afecta desproporcionadamente también a personas LGBTIQ+.

Frente a la pérdida de bienes, servicios y viviendas, se estima que las mujeres son mayormente afectadas, y esto las expone a mayores riesgos de VBG, tal como lo destaca el informe sobre el análisis rápido de género Eta/Iota¹⁰⁸, donde el 27 por ciento de mujeres entrevistadas considera que la violencia contra las mujeres se ha profundizado “mucho” con las tormentas en mención y el 34 por ciento que se ha profundizado “un poco”. Según el informe, los tipos de violencia que afectan más comúnmente a las mujeres han sido: violencia económica (19 por ciento), violencia psicológica 13 por ciento, violencia física 12 por ciento, acoso sexual 5 por ciento, agresión sexual 3 por ciento, violación sexual 1 por ciento¹⁰⁹.

108 <https://ministeriopublico.gob.pa/wp-content/uploads/2020/12/Como-afecto-el-ETA-e-IOTA-a-las-Mujeres.pdf>

109 <https://mic.iom.int/webntmi/descargas/2020/ronda1/DTMCOVID19R1GT.pdf>

Las mujeres en riesgo y sobrevivientes de VBG no cuentan con suficiente información sobre sus derechos, cómo acceder a las rutas de denuncias o cuáles son los mecanismos de protección existentes. Las niñas y adolescentes que, debido a la pérdida de sus hogares, están alojadas con familiares o vecinos están expuestas a mayores riesgos de VBG.

Una de las principales barreras de acceso a los servicios es la centralización de los servicios de atención a casos de VBG en la capital y en cabeceras de algunos departamentos, sin cobertura en las áreas más rurales. Además, los servicios existentes no responden a las necesidades y condiciones socioculturales, lingüísticas y de atención diferenciada por grupos de edad y de población LGBTQ+. Esta situación limita el acceso a la denuncia, la búsqueda de información, la referencia de casos y el abordaje integral de los mismos, agudizando la revictimización, los riesgos en la salud mental y prácticas nocivas contra niñas, adolescentes y mujeres con embarazos, uniones o matrimonios no deseados o forzados.

Impacto en salud y salud sexual y reproductiva

Las evaluaciones EDAN de salud diagnosticaron 237 centros de salud afectados (el 45 por ciento con daños menores, 43 por ciento con daños mayores y 12 por ciento con destrucción total), en su mayoría centros de salud que prestan servicios de salud primarios. Además, refiere que la población con dificultades de acceso a los servicios de salud de los departamentos más afectados por las tormentas fue de 1.195.536, el 50.35 por ciento (602.239) de esta población lo constituyen mujeres, la mayoría de ellas 55.85 por ciento (336.326) mujeres mayas, pobres, analfabetas y monolingües. Estas crisis han disminuido la posibilidad de acceso a la salud sexual y reproductiva en los departamentos afectados. Existe un descenso en servicios de planificación familiar del 58 por ciento; primera consulta de prenatal 14 por ciento, atención del parto institucional 10.8 por ciento. En los departamentos más afectados, se registró un aumento de embarazos en adolescentes (61 por ciento) y se registró más del 50 por ciento de la mortalidad materna en el país (184 de 336).

Impacto en educación

La situación generada a partir de la pandemia de COVID-19 y de las tormentas tropicales afectó a 429 establecimientos educativos y a más de 2.192.939 de niñas, niños y adolescentes que requerirán asistencia humanitaria para no abandonar la escuela. Esta asistencia también se refiere a la necesidad de materiales educativos y didácticos y de ampliar la oferta educativa mediante modalidades alternativas que permitan la reinserción educativa de aquellos que por diversas causas abandonaron su escolaridad desde el año 2020 y que en la mayoría de los casos provienen de los sectores más pobres a nivel nacional para reducir el abandono, la no promoción y/o fracaso escolar.

Durante el 2020 la educación se desarrolló de modo remoto, desde los hogares con el apoyo de material de aprendizaje a distancia. Estudios evidencian que sólo el 17 por ciento de los hogares tiene acceso a internet, equipo y conectividad evidenciando un problema de desigualdad en el acceso a la educación.

Impacto en Agua, Saneamiento e Higiene (WASH)

De acuerdo con el informe de daños de CEPAL, unos 41 municipios sufrieron afectaciones en sus sistemas de provisión de agua (información provista por la Asociación Nacional de Municipalidades, ANAM). El daño en la infraestructura de servicios de agua afectó al 75 por ciento de los sistemas y con diferentes grados de afectación. En el departamento de Quiché fueron afectados los municipios del área norte, incluida el área Ixil. La población que predomina en esa área afectada pertenece a 3 grupos étnicos como son k'iche, ixil, y uspanteco. En Izabal por ser el departamento más cercano al Atlántico, sufrió los embates de Eta e Iota de manera directa, afectando la infraestructura de los sistemas WASH. En este departamento, personas de población mestiza, q'eqchi' y garífuna se vieron impactadas severamente inundando grandes extensiones de tierra, colapsando sistemas de agua potable, y anegando los pozos de abastecimiento de agua domiciliarios y comunales. Estos impactos afectaron seriamente las condiciones de vida de la población. En relación con la población que tiene dificultad para acceder a servicios de agua en el área del Corredor Seco, se evidencia que las condiciones son precarias en cuanto

a acceso de agua. En el departamento de Jutiapa, como ejemplo, hay más de 25.000 personas que no tienen acceso a servicios de agua, de los que el 41 por ciento son NNA y el 52 por ciento son mujeres.

Impacto en el acceso humanitario

Según determinaciones satelitales realizadas por UNITAR/UNOSAT, en la zona del sur de Petén, Alta Verapaz y Quiché se estimó que unos 380 kilómetros cuadrados de territorio se encontraban inundados. Los datos de WorldPop, estimaron que unas 24.000 personas estaban potencialmente expuestas o viviendo cerca de estas áreas inundadas. En el caso de Izabal, se determinó que unos 150 kilómetros cuadrados fueron inundados y unas 8.600 personas expuestas a las inundaciones. Los municipios con mayor superficie de área inundada fueron Puerto Barrios (114 km²), Morales (24 km²), Livingston (6 km²) y El Estor (4 km²).

De acuerdo con visitas realizadas por personal de OCHA en terreno, se identificó que al menos 10 comunidades de los municipios de San Pedro Carchá, Chisec y Cobán quedaron completamente inundadas por más de 100 días con alturas de agua entre 5 y 20 metros. Las áreas más afectadas fueron las de Sesajal – Chibut y Campur en San Pedro Carchá. Esta última, fue ampliamente divulgada en medios de comunicación nacionales e internacionales. Estas comunidades perdieron toda su infraestructura, instituciones y activos comunitarios.

Esta inundación masiva impidió el acceso de la ayuda humanitaria a estas comunidades para lo cual se tuvo que implementar un puente aéreo desde las cabeceras municipales. Actualmente, aunque el nivel de agua ya ha bajado considerablemente, la red vial de caminos vecinales y carreteras se mantiene destruida.

Personas con mayores necesidades

Los impactos de las crisis de inseguridad alimentaria, la generada por Eta e Iota y de movilidad humana tienen un común denominador: afectan a familias pobres, sin acceso al sistema formal de salud y educación y ubicadas en regiones con predominancia de población indígena. Prácticamente todos los sectores resaltan las necesidades agudas y diferenciadas de las

mujeres, las adolescentes y las niñas, especialmente mujeres víctimas de violencia, mujeres cabeza de hogar, adolescentes abusadas y embarazadas y niñas migrantes y con desnutrición. La espiral negativa de la inseguridad alimentaria y la desnutrición aguda genera muertes de niños y niñas menores de 5 años, muerte materno infantil y se perpetúa el subdesarrollo físico y mental, principalmente en familias de agricultores de infra-subsistencia, subsistencia y jornaleros. Para este flagelo, se necesita una respuesta integral y coordinada que incluye asistencia alimentaria, recuperación de capacidades productivas, empoderamiento de las mujeres, atención en salud, salud sexual y reproductiva y mejoramiento de condiciones de agua, saneamiento e higiene. Dentro de la población en movilidad humana destacan las necesidades de las mujeres migrantes retornadas, refugiadas, solicitantes de asilo y refugio, las niñas y adolescentes, mujeres madres y personas de la comunidad LGBTIQ+ ya que sufren violaciones de sus derechos y abuso sexual. El número de menores migrantes no acompañados ha incrementado exponencialmente en los últimos años y requiere de acciones de protección especial.

Evolución prevista de la situación

Según las situaciones analizadas, se espera un deterioro de las condiciones debido a la falta de empleo, acceso a los alimentos, falta de cobertura de programas de protección social del gobierno, hambre estacional, pérdidas de cultivos, sin semillas para la siembra de este año y, en el caso de la COVID-19, por la ausencia de vacunación masiva, principalmente en zonas rurales y ciudades intermedias. Pese a la carga y restricciones frente a la pandemia, no ha habido una estrategia que contemple la atención de la demanda de salud para la población y sigue habiendo un vacío en llegar a los lugares más lejanos con grupos vulnerables (mujeres, niñez y pueblos indígenas).

Las estadísticas de violencia basada en género, violencia contra las mujeres, violencia sexual y otras prácticas nocivas han permanecido al alza en los últimos meses resaltando el repunte en los casos de embarazos en niñas y adolescentes. Las necesidades de protección frente a la violencia van a evolucionar en la medida que la población

enfrente otras situaciones de desastres socio-naturales o conflictividad social.

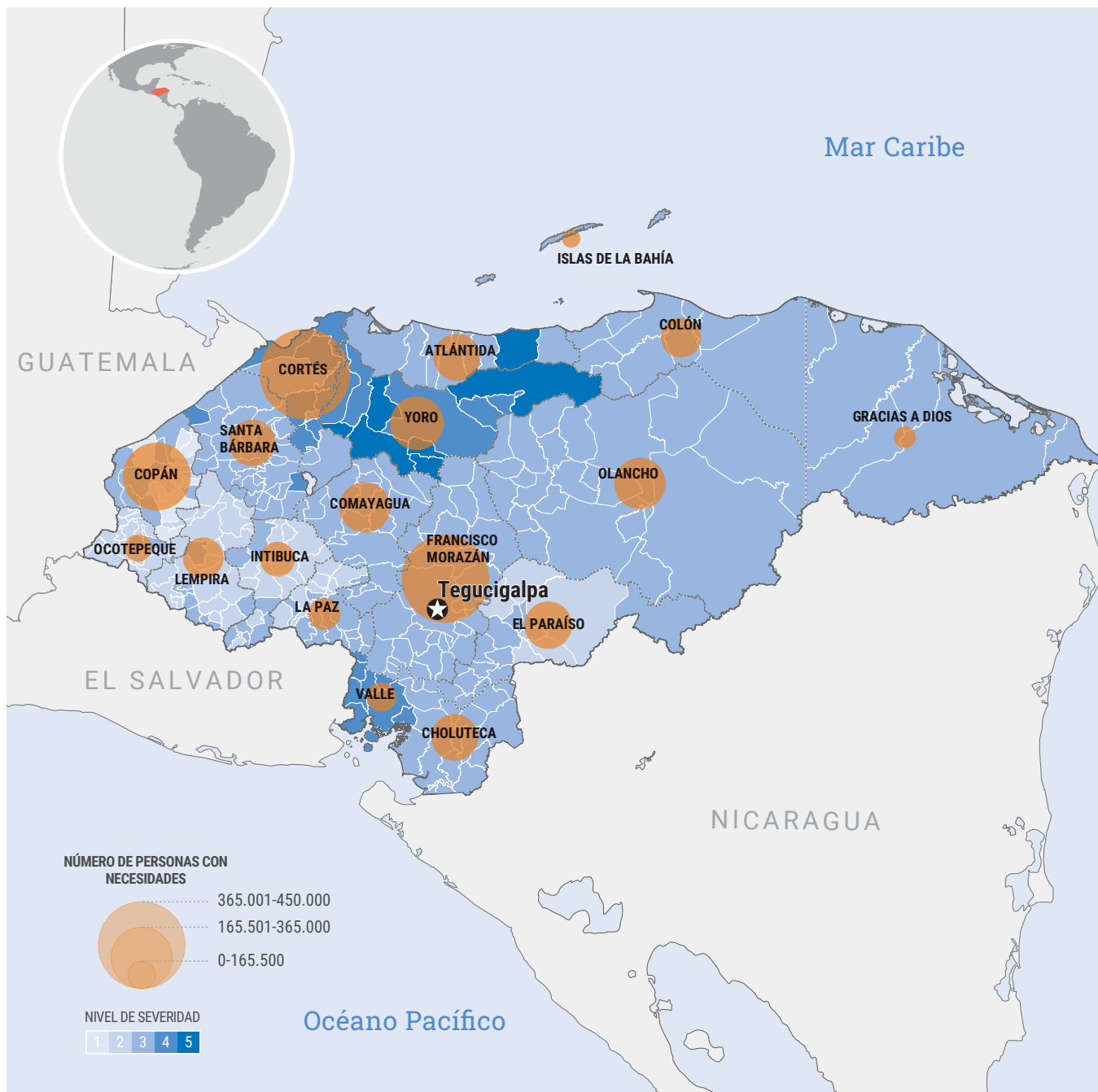
Los pronósticos climáticos indican que pueden generarse condiciones propicias para la cosecha de granos básicos y con ello reducir la inseguridad alimentaria. Sin embargo, las poblaciones urbanas y peri-urbanas que perdieron empleo, ingreso de la economía informal o su pequeño negocio podrían necesitar apoyo externo para

recuperarse. Los números de casos de desnutrición aguda a la fecha indican un pequeño incremento con respecto al mismo período de 2020 por lo que podría terminarse el año con un total cercano a los 30.000 casos en todo el país.

Las tendencias en el número de migrantes aprehendidos en Estados Unidos y retornados, así como de menores no acompañados, siguen en aumento.

4.3 Honduras

Mapa de severidad y personas en necesidad



Las designaciones empleadas y la presentación del material en el informe no implican la expresión de ninguna opinión por parte de la Secretaría de las Naciones Unidas en relación con la condición jurídica de ningún país, territorio, ciudad o zona o de sus autoridades, ni en relación con la delimitación de sus fronteras o límites.

4.3.1

Contexto

Honduras enfrenta crecientes riesgos multidimensionales superpuestos, en un contexto de extrema fragilidad, exacerbado por la pandemia de la COVID-19 y las tormentas tropicales Eta e Iota, agravando la realidad preexistente caracterizada por altos niveles de pobreza, desigualdad de género, baja capacidad institucional y violencia estructural. El país enfrenta una creciente desigualdad, con un 49 por ciento de la población en la pobreza y un 20 por ciento de los niños y las niñas con retraso en el crecimiento, en medio de una creciente inseguridad alimentaria y nutricional y altos niveles de discriminación de género y violencia basada en género, y altos riesgos de protección incluidos el reclutamiento, asesinatos y otras formas de violencia como el femicidio.

La pérdida de empleo, especialmente para mujeres y jóvenes, como consecuencia de la COVID-19 y de las tormentas Eta e Iota ha incrementado el trabajo de cuidados, trabajo infantil y la explotación sexual, la vinculación con maras, pandillas y actividades ilegales como mecanismos de afrontamiento negativos que se vuelven necesarios para sustentar a las familias. Miles de mujeres abandonaron el mercado laboral, por lo que no cuentan con medios de vida ni generación de ingresos, lo que ha afectado su supervivencia debido también a pérdidas vinculadas a alimentación, artículos no alimentarios y herramientas de trabajo. Las actividades realizadas por mujeres asociadas al sector agropecuario y de trabajo doméstico¹¹⁰ se han visto gravemente afectadas, especialmente por la pérdida de capital físico de trabajo.

En 2020, Honduras fue el tercer país de América Latina con la tasa de homicidios más alta, por debajo de Jamaica y Venezuela, y con una tasa de homicidios de hombres jóvenes de 64/100.000. Según fuentes oficiales, un 4.5 por ciento de las víctimas de los homicidios reportados en el 2020 eran niñas, niños y adolescentes¹¹¹. Además, Honduras tiene la mayor tasa de femicidios de la región¹¹² (CEPAL).

Las últimas cifras han demostrado un aumento de los movimientos de personas, alcanzando tendencias similares a las que se vivían previo a la pandemia. Las principales razones del desplazamiento forzado son la situación económica y falta de servicios básicos, la violencia, formas de control y vulneración de derechos en especial aquellas perpetrada por bandas criminales y redes de narcotráfico y finalmente los factores climáticos y ambientales. Mujeres, niñas y niños enfrentan riesgos de protección en la ruta migratoria y los países de destino como la trata de personas y violencia de género.

La violencia, la violencia sexual y el femicidio, así como la pobreza generalizada, la inseguridad alimentaria, choques climáticos, incluidos las tormentas tropicales Eta e Iota, y los efectos económicos de la pandemia COVID-19, han llevado a miles, entre ellos mujeres y niñas, a intentar huir a México y Estados Unidos incluidos migrantes extracontinentales e intrarregionales varadas en la zona sur y que transitan por el país hacia la misma ruta.

110 Análisis rápido de género en Honduras. Un panorama ante COVID-19 y Eta / Iota care.org/hn

111 Sistema Estadístico Policial en Línea SEPOL, [Comportamiento de los Homicidios en Honduras 2020](#)

112 <https://oig.cepal.org/es/indicadores/femicidio>

4.3.2

Impacto y necesidades humanitarias de las crisis en personas y servicios

Impacto en la salud y salud sexual y reproductiva (SSR)

El sistema de salud pública está sobrecargado, con capacidad limitada para manejar las necesidades en salud, emergencias por dengue y la pandemia de la COVID-19, que continúa evidenciado altas tasas de morbilidad, mortalidad y letalidad, alta ocupación de camas de hospitalización COVID-19, así como una baja cobertura de vacunación. La mortalidad materna aumentó debido al más alto número de embarazos tempranos y no deseados de adolescentes.

Se estimó que, del total de personas afectadas por las tormentas tropicales Eta e Iota, aproximadamente 250.000 tenían acceso limitado o carecían de servicios de salud, debido a daños de distinta magnitud e importancia en la infraestructura de la red de servicios de salud. Al menos 10 hospitales y 404 instalaciones de salud del primer nivel de atención presentaron daños o pérdidas totales como consecuencia de las lluvias e inundaciones. En 2021, más de 27 instalaciones de salud continúan inhabilitadas. En el reciente Análisis Rápido de Género, un 58 por ciento de las mujeres encuestadas afirmaron que no tenían acceso a servicios de SSR, mientras que el 94 por ciento señalaron que no tenían acceso a servicios de salud mental¹¹³.

Las medidas de control a la libertad de movimiento y territorial impuestas por maras y pandillas durante las restricciones COVID-19 así como durante Eta e Iota tuvieron un impacto en el acceso de las personas a servicios, incluidos los de salud. Así mismo, los servicios de atención y manejo clínico de la violación para las sobrevivientes de violencia sexual se vieron suspendidos y continúan enfrentando barreras.

El porcentaje de embarazos en adolescentes se incrementó de 25 a 30 por ciento. Las muertes maternas en las zonas afectadas por las tormentas tropicales, muchas de ellas evitables, se debieron a las demoras de los servicios y cuidados para la atención obstétrica de emergencia. El 40 por ciento de la mortalidad materna se presenta en población indígena. A esto se suman las dificultades de acceso a servicios de salud que enfrentan un 51.7 por ciento de las mujeres encuestadas, que deben recorrer unos 30 minutos para ir a un servicio de salud¹¹⁴. Las necesidades insatisfechas de planificación familiar se han incrementado de 15 a 23 por ciento, exponiendo a muchas mujeres, adolescentes y niñas a embarazos tempranos y no deseados.

Impacto en la seguridad alimentaria

En 2020 por lo menos 2,9 millones de personas (31 por ciento de la población clasificada; 51 por ciento mujeres, 49 por ciento hombres) se encontraba en crisis alimentaria o peor (Fase 3 o peor de la CIF). Para los hogares que no pudieron dedicarse al trabajo agrícola o cosechar sus cultivos, la temporada de escasez comenzó a principios de enero a febrero 2021 en lugar de marzo a mayo. Se espera que los hogares rurales en el Corredor Seco sean los más afectados por la inseguridad alimentaria debido a los ingresos acumulados, las pérdidas de activos y cultivos a causa de la sequía de 2019 y temporada de huracanes de 2020 (FEWS NET, diciembre de 2020).

Alrededor del 72 por ciento de los trabajadores y trabajadoras pobres dependen del sector informal, y una parte significativa de ellos vive en áreas urbanas (Estudio: PMA / OIT, julio de 2020). Este estudio encontró

113 ONU Mujeres y CARE. Análisis Rápido de Género en Honduras, 2021.

114 ONU Mujeres y CARE. Análisis Rápido de Género en Honduras, 2021.

que alrededor de 2,1 millones de trabajadores informales perdieron sus ingresos durante la pandemia, mientras que el 67 por ciento de los encuestados supuestamente estaban en suspensión laboral. Todos los departamentos del país cuentan con una combinación de desnutrición aguda global, crónica y carencia en micronutrientes en menores de cinco años y mujeres embarazadas y lactantes y prácticas inadecuadas de alimentación del lactante y del niño/a pequeño/a que lleva el número de personas en necesidad de apoyo a un nivel muy preocupante y jamás alcanzado en esta última década.

Impacto en nutrición

Según datos y estimaciones de la SESAL, del CIF y de las ENDESAS, la situación nutricional de los niños y niñas menores de cinco años y las mujeres embarazadas y lactantes se está deteriorando significativamente. De acuerdo con el Análisis Rápido de Género, el 47 por ciento de las mujeres participantes no tenían alimentos asegurados porque perdieron sus granos y cosechas, o no tienen dinero, por lo que se redujo considerablemente la disponibilidad y acceso a alimentos adecuados¹¹⁵.

En términos estructurales, la evaluación 2020 de la salud materno-infantil realizada por la región sanitaria de Cortés muestra que los indicadores de desempeño de la estrategia AIN-C (Atención Integral a la Infancia que cuenta con actividades en nutrición) han estado en constante descenso desde 2014 (fecha de inicio), llegando a su nivel más bajo después de las tormentas. Además, la SESAL no cuenta de momento con un protocolo de manejo de los casos de desnutrición aguda en los menores de cinco años a nivel comunitario por tiempo de COVID-19.

Es importante notar que varios de los departamentos más afectados del país en términos de desnutrición son los que también fueron los más afectados por las tormentas tropicales y sufren de la COVID-19, de migración y de violencia, dejando poca duda sobre la severidad de la

situación y la necesidad de implementar programas en nutrición de emergencia.

Impacto en los servicios de agua, saneamiento e higiene

En el país existe una falta de resiliencia climática y planes de seguridad del agua de los sistemas que han acarreado afectaciones para el acceso a agua potable, saneamiento e higiene, especialmente en cuanto a salud e higiene menstrual, para mujeres y niñas. Tan sólo el 35 por ciento de las mujeres participantes en el Análisis Rápido de Género afirmó tener acceso a agua potable permanentemente y un 58 por ciento tampoco tenían acceso a servicios de higiene, mientras que el 50 por ciento de las mujeres en albergues dijeron que la cantidad de agua no es suficiente para cubrir todas las necesidades que tienen ellas y sus familias¹¹⁶.

El impacto de las dos grandes tormentas tropicales Eta e Iota dejó una fuerte caída en el acceso a servicios de agua, saneamiento e higiene (WASH) y se ha registrado una capacidad limitada de los proveedores para restaurar rápidamente estos servicios.

Impacto en la protección y derechos

Honduras se encuentra en una crisis humanitaria compleja con un impacto diferenciado especialmente grave para mujeres, niñez, personas LGBTIQ+ y otros grupos de riesgos diferenciados como personas comerciantes, transportistas, líderes y educadores/as.

El desplazamiento forzado y sus detonantes continuaron como base de la crisis de protección, con un mayor impacto debido al impacto de COVID-19 y Eta e Iota. Un reciente estudio de caracterización indica que el impacto es mayor en mujeres (51 por ciento de personas desplazadas) por razones como la violencia sexual y el feminicidio¹¹⁷.

115 ONU Mujeres y CARE. Análisis Rápido de Género en Honduras, 2021.

116 ONU Mujeres y CARE. Análisis Rápido de Género en Honduras, 2021.

117 Ver: <https://gruposociedadcivilhn.org/investigacion-violencia/>

Por otro lado, los movimientos mixtos generan un choque e impacto que van desde las causas, hasta el movimiento, la recepción y las diferentes formas de retorno, todo con un profundo impacto en la crisis de protección general del país. La dinámica del movimiento y las respuestas también se vieron afectadas por el impacto de la COVID-19 y Eta e Iota, incluida la incapacidad del estado para responder y proteger.

Impacto en la Niñez

La niñez y la adolescencia (38 por ciento de la población total de Honduras según datos del INE) representa una de las poblaciones en condición de vulnerabilidad más afectadas por emergencias, por la violencia y la criminalidad, particularmente quienes viven en municipios donde el acceso y disponibilidad de servicios de protección y justicia son limitados o inexistentes.

Sumado a ello, el cierre de las escuelas, que a la fecha permanece, ha significado para los niños y las niñas la ausencia de un entorno protector frente a la violencia familiar y otras formas de violencia a nivel comunitario con un mayor impacto en niñas y adolescentes. De las 122 muertes violentas de mujeres, registradas por el observatorio del Centro Derechos de Mujeres- Honduras (CDM), a 31 de mayo 2021, aproximadamente el 25 por ciento eran niñas menores en edad escolar, lo que se suma al incremento del embarazo temprano y mayor riesgo de deserción escolar.

Después de seis meses tras Eta e Iota, siguen existiendo niveles altos de estrés en niñas, niños y adolescentes (NNA), pero también en personas adultas con estrés postraumático, angustia, depresión, ansiedad y pensamientos suicidas.

A su vez una de las consecuencias de la pérdida de medios de vida y el incremento de violencia es la decisión de migrar en busca de nuevas oportunidades. Los NNA son particularmente vulnerables a los abusos y violaciones durante la ruta migratoria, y los NNA no acompañados se encuentran particularmente en riesgo extremo de violencia de género y trata de personas en

sus diversas modalidades, así como de reclutamiento por grupos del crimen organizado con presencia en la ruta migratoria. De enero a mayo de 2021, la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia ha reportado un total de 3.112 NNA retornados (3.500 para todo 2020), de los cuales el 2.149 no estaban acompañados/as.

Consideraciones de Género

Tanto la pandemia de COVID-19 como las tormentas Eta e Iota han profundizado esta desigualdad de género preexistente en Honduras. Entre los efectos adversos y preocupantes evidenciados por el Análisis Rápido de Género están la feminización de la pobreza, el desempleo y la migración, así como el empeoramiento de la calidad de vida y bienestar de mujeres, niñas y personas LGBTIQ+. La pérdida de ingresos y medios de vida viene afectando la autonomía económica de las mujeres, sumada al incremento del trabajo de cuidados no remunerado, inseguridad alimentaria y la pérdida de empleo, especialmente para quienes se encuentran en el sector informal y las trabajadoras domésticas, que son más de 116.714 mujeres (87 por ciento) y niñas (12.4 por ciento, 14.527 niñas entre 12 a 18 años) representando el 87 por ciento del total de las personas que se dedican a este trabajo¹¹⁸.

La suspensión o debilitamiento de servicios como salud, salud sexual y reproductiva, educación, justicia y protección se suman a las limitaciones de acceso a agua, saneamiento e higiene, albergues y vivienda que enfrentan mujeres y niñas. Tanto los niveles de violencia de género como los femicidios han aumentado con graves consecuencias para su salud y bienestar, convirtiéndose en factores que las obligan a desplazarse. En los albergues, además de haber perdido sus viviendas, medios de vida y familiares, se acentuó la violencia de género, la sobrecarga de trabajo de cuidados y las limitaciones de acceso a servicios. Se han incrementado también los riesgos de desprotección de derechos que enfrentan mujeres y niñas refugiadas y migrantes tanto en la ruta migratoria como en los países de destino. Niñas, adolescentes y jóvenes enfrentan mayor violencia sexual, violencia física, reclutamiento forzado y deserción escolar.

118 ONU Mujeres y CARE. Análisis Rápido de Género en Honduras, 2021

Para mujeres y niñas con discapacidad y viviendo con VIH las barreras de acceso a servicios y desprotección son mayores. La violencia y la discriminación es ahora mayor contra personas LGBTIQ+ en Honduras.

Impacto en la VBG

Honduras se encuentra dentro de los países más violentos contra las mujeres, niñas y personas LGBTIQ+, con un promedio de una mujer asesinada cada 27 horas. El mayor porcentaje de femicidios se encuentra localizado en los departamentos de Francisco Morazán, Cortés y Olancho¹¹⁹.

Las cifras del Ministerio Público reflejan que el tercer delito cuantificado con relación al número de denuncias es la violación sexual, siendo además el principal delito sexual denunciado en cuanto a violencia contra las mujeres¹²⁰.

El riesgo de violencia de género se incrementó durante la pandemia de COVID-19 y aún más con el impacto de las tormentas. Las medidas de aislamiento decretadas por el estado influyeron directamente en un aumento alarmante de las denuncias por violencia de pareja íntima doméstica. Entre 2020 y abril 2021 el Sistema Nacional de Emergencia 911 contabilizó un incremento del 49 por ciento de llamadas por razones asociadas a violencia de pareja íntima, mientras que la respuesta estatal, en particular el acceso a las medidas de protección y acceso a la justicia se vieron reducidas para las sobrevivientes. Así mismo, el acceso a servicios de salud física y sexual, como a medios de vida y albergues seguros y dignos se han visto limitados.

Impacto en la educación

El sector educativo es uno de los sectores más afectados por la pandemia. La suspensión de clases presenciales ha dado lugar a la falta de acceso a servicios complementarios como alimentación escolar, apoyo psicosocial, servicios de salud, sumado a la falta de recursos económicos que impiden el acceso a internet (solo el 42 por ciento de la población) y por ende a la

continuidad educativa propuesta a través de plataformas digitales y otras como radio o televisión. La suspensión de clases ha interrumpido los procesos educativos y formativos de los NNA. En medio de este escenario, Honduras muestra una inclusión educativa baja, mediada por las desigualdades económicas exacerbadas por el impacto de las tormentas tropicales y la presencia de la COVID-19. La inequidad educativa se expresa en el 41.3 por ciento de NNA que no acceden a la educación. Niñas y adolescentes han perdido la escuela como espacio protector e incrementado el riesgo de enfrentar embarazo temprano, violencia de género y deserción escolar.

Impacto en personas viviendo en albergues, alojamientos de emergencia y recuperación temprana debido a las tormentas tropicales Eta e Iota

Aún hay casi 10.000 familias viviendo en condiciones precarias en pequeñas carpas, en casas de alquiler o con familiares cuyas viviendas han sido totalmente destruidas o las condiciones en sus colonias aún son inhabitables. Principalmente mujeres, niños y niñas (75 por ciento) de un total de 1.824 personas (925 mujeres) siguen aún viviendo en albergues o centros de alojamiento colectivos. Estas familias que han perdido sus viviendas, por la destrucción parcial o total de las mismas debido a los estragos de Eta e Iota, habitan en los municipios más pequeños del país, del área rural y en las áreas periféricas de las ciudades grandes. Son familias con alta vulnerabilidad económica y social, cuyo medio de vida, previo a Eta e Iota, estaba basado en el comercio y la agricultura.

Mujeres y niñas, además de estar más expuestas a la VBG, asumen una mayor carga de trabajo de cuidado en los albergues. Una reciente evaluación de necesidades realizada por la Red Humanitaria en Honduras (RHH) identificó que las mujeres y niñas son quienes se encargan en los albergues de las actividades de aseo, cocina, cuidado de niñez y de traer el agua. Así mismo, identificaron la falta de duchas y áreas de aseo personal seguras, privadas y diferenciadas por sexo, así como la adecuada iluminación como aspectos clave a

119 Observatorio Nacional de Violencia IUDPAS de UNAH, Boletín nacional 2020. Observatorio de Violencia contra la Mujer del Centro de Derechos de la Mujer-CDM.

120 Informe de veeduría social sobre la calidad en los servicios de atención en las instituciones de acceso a la justicia Intibucá, La Esperanza, Yamaranguila, Gracias y Distrito Central, CEM-H, 2020.

mejorar en cuanto a la seguridad de los albergues. La principal preocupación para las mujeres identificada fue el retorno seguro a sus casas y la falta de seguridad, especialmente frente a la VBG. Frente a niveles muy altos de vulnerabilidad estructural y mecanismos débiles de recuperación, los impactos adversos tienden a aumentar las brechas de pobreza y desigualdad, especialmente para mujeres y niñas y niños. De acuerdo a la UNAH, la crisis sanitaria y eventos climatológicos han aumentado el nivel de pobreza en Honduras de un 59.3 por ciento en 2019 a un 70 por ciento en 2020. A pesar de los esfuerzos de movilización financiera por parte de la cooperación internacional y gobierno, ha sido difícil satisfacer las múltiples demandas para atender la gran necesidad humanitaria y de recuperación. Los esfuerzos han estado también limitados por la débil coordinación entre las diferentes instancias de gobierno haciendo que la cobertura sea ineficiente, incluso generando mayores necesidades.

Personas con mayores necesidades

Entre las personas más afectadas están aquellas que viven en condiciones de marginalidad y pobreza extrema en el área urbana y que se dedican a empleos no formales con pago de jornal diario (no agrícola), no percibiendo ingresos y gastando sus limitados ahorros tales como rubros de construcción, transporte, textil entre otros; así como los agricultores de subsistencia afectados por la sequía, que se encuentran más expuestos a contraer el coronavirus.

Mujeres, sobre todo embarazadas y lactantes, niñas, niños, indígenas, personas mayores y personas con discapacidades, se encuentran entre las personas en situación de mayor inseguridad alimentaria y nutricional ante las dificultades de disponibilidad y acceso a alimentos, de prácticas inadecuadas de alimentación de las y los niños pequeños y de la prevalencia de enfermedades infecciosas, especialmente para quienes se encuentran en albergues y alojamientos de emergencia.

El personal de la salud, las mujeres embarazadas, migrantes retornadas, mujeres desplazadas, vendedoras informales, mujeres privadas de libertad, mujeres rurales, niñas, niños y adolescentes, así como también los adultos mayores (mayores de 60 años), personas

con enfermedades crónicas, viviendo con VIH u otros síndromes de inmunodeficiencia, personas LGBTIQ+ y los pueblos indígenas y afro-descendientes son especialmente vulnerables a la COVID-19 dado que con frecuencia tienen difícil acceder a centros, bienes y servicios de salud de calidad.

Las personas desplazadas y en movilidad, migrantes en tránsito, personas retornadas y los líderes y lideresas comunales y personas defensoras de derechos humanos requieren también asistencia diferenciada.

Evolución prevista de la situación

Existen varios desafíos que el país debe resolver para mejorar la situación de salud como por ejemplo gestionar las vacunas contra la COVID-19, que reduzcan las altas tasas de morbilidad y mortalidad. Si continúan los efectos de la pandemia sobre las rutas de acceso a servicios, se agudizarán las enfermedades prevalentes y crónicas no transmisibles, así como las complicaciones en la salud sexual y reproductiva y se incrementará más la carga de trabajo de cuidados para mujeres y niñas.

De julio a septiembre de 2021, se espera que la inseguridad alimentaria del país, en general, continúe en Crisis (Fase 3 de la CIF). La crisis económica sin precedentes provocada por la pérdida de medios de vida debido a la pandemia y las tormentas tropicales hace prever un aumento en la feminización de la pobreza de las familias y pobreza infantil, aumento de violencia, violencia de género y de actividades ilícitas, así como un aumento de los movimientos migratorios y/o de desplazamiento en búsqueda de una vida mejor. Las necesidades derivadas de los desplazamientos por violencia continúan en aumento, siguiendo la tendencia en los últimos años.

La polarización política en el período previo a las elecciones puede conducir a una mayor inestabilidad, episodios de violencia y un aumento de las violaciones graves de derechos humanos, dada la impunidad generalizada y consecuente incremento en los desplazamientos internos y flujos migratorios mixtos, ya que las personas no están encontrando soluciones efectivas y a largo plazo ante sus necesidades. Los indicadores nos dicen que 2021 puede ser un año de mayores deportaciones, incluyendo deportaciones de

NNA. El Observatorio Consular y Migratorio de Honduras, indica un incremento del 6.6 por ciento de deportaciones hacia Honduras respecto a 2020 en los primeros 5 meses de 2021.

En incremento de la desigualdad de género y de la VBG se evidenciará en mayores necesidades de las mujeres, niñas, niños y personas LGBTIQ+ como el desempleo, pobreza extrema, migración y diversas formas de violencia que afecta de manera diferenciada a las personas. En las zonas rurales, en las comunidades indígenas y garífunas la brecha en el acceso a servicios con enfoque diferenciado, de género e interseccional seguirá profundizando.

En materia de vivienda, la evolución de las necesidades estará condicionada por el alcance de la respuesta humanitaria, y esta se desarrollará en función del financiamiento que tengan las agencias y ONG que operan en las comunidades más afectadas.

Finalmente, es importante anotar que la evolución de las necesidades en los próximos meses dependerá del grave potencial impacto de eventos relacionados con la temporada de huracanes, que se prevé más activa de lo normal, lo cual podría agravar las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres, hombres, niños, niñas y personas LGBTIQ+ que aún no han superado los estragos marcados por Eta e Iota.

Parte 5:

Anexos

SAN SALVADOR, EL SALVADOR

Los desprendimientos de tierra provocados por la tormenta Amanda y las fuertes lluvias dañaron gravemente las casas de las afueras de San Salvador.

Foto: PMA El Salvador/David Fernández



5.1

Fuente de los datos

El Salvador (28 indicadores de 8 sectores y 1 Área de Responsabilidad)

SECTOR	INDICADOR	FUENTE
CCCM	Número de la población en sitios con servicios de gestión adecuados.	Displacement Tracking Matrix, 2020
CCCM	Número de población en sitios con estructuras de gestión inclusivas y representativas.	Displacement Tracking Matrix, 2020
CCCM	Número de la población con acceso a los servicios básicos.	Displacement Tracking Matrix, 2020
Educación	Porcentaje de niñas, niños y adolescentes que han desertado del sistema educativo.	Ministerio de Educación, 2020
Educación	Porcentaje de estudiantes que no tienen acceso a internet.	Ministerio de Educación, 2021
Educación	Porcentaje de de niñas, niños y adolescentes que estudian en centros educativos con 4 o más condiciones de vulnerabilidad a desastres.	Ministerio de Educación, 2020
Nutrición	Lactancia materna exclusiva para bebés de 0 a 5 meses.	Ministerio de Salud/ INS
Nutrición	Prevalencia de anemia Hb <11g/dl en niños de 6 a 59 meses.	Ministerio de Salud/ INS /SIMMOW
Nutrición	Prevalencia de anemia Hb <11g/dl en mujeres embarazadas.	Ministerio de Salud/ INS /SIMMOW
Nutrición	Prevalencia de sobrepeso basada en el peso por altura Z-score (WHZ)>2 entre los niños de 0-59 meses.	Ministerio de Salud/ INS
Nutrición	Prevalencia de sobrepeso basada en el peso por altura Z-score (WHZ)>2 entre los niños de 0-59 meses.	Ministerio de Salud/ INS /SIMMOW
Protección	Porcentaje de de mujeres y niñas que han experimentado algún tipo de violencia en los últimos 12 meses.	Encuesta Nacional de Violencia contra la Mujer, DYGESTIC
Protección	Personas víctimas de homicidios y lesiones por violencia generalizada.	Policía Nacional Civil
Recuperación Temprana	Hogares que son en viviendas dañadas por categoría de daños.	EHP, 2019
Recuperación Temprana	Personas en condición de pobreza monetaria y pobreza multidimensional.	EHP, 2019
Salud	Cobertura de DPT3 (DPT3 / PENTA3) en < 1 año.	Ministerio de Salud, 2020
Salud	Incidencia de COVID-19.	Ministerio de Salud, 2020
Salud	Número de casos de violencia sexual atendidos en los establecimientos de salud.	Ministerio de Salud, 2020
Salud	% de atenciones preventivas en mujeres embarazadas, usuarias activas de PF, niños y niñas menores de 1 año en establecimientos de salud que cuentan con cuidados obstétricos e infantiles.	Ministerio de Salud, 2020
Salud	Número de SIBASI en condiciones de responder ante una emergencia en salud (epidemias, desastres socio-naturales, etc.).	Ministerio de Salud, 2020

SECTOR	INDICADOR	FUENTE
Seguridad Alimentaria	CIF Proyección a agosto 2021	PMA
Seguridad Alimentaria	Perdidas en Producción de Alimentos.	CIF/ Encuesta Nacional de Indicadores de Seguridad Alimentaria y Agricultura 2020
VBG	Porcentaje de Niñas y Adolescentes embarazadas.	Ministerio de Salud
WASH	Porcentaje personas con acceso a agua mejorada.	EHPM, 2019
WASH	Porcentaje personas con acceso a saneamiento mejorado (servicio sanitario).	EHPM, 2019
WASH	Porcentaje Hogares con acceso a tratamiento de aguas grises.	EHPM, 2019
WASH	Porcentaje de personas con servicios de gestión de residuos disponibles.	EHPM, 2019
WASH	Número de estudiantes que asisten a escuelas sin acceso a agua.	Ministerio de Educación, 2020

Guatemala (19 indicadores de 5 sectores)

SECTOR	INDICADOR	FUENTE
Nutrición	Porcentaje de población vulnerable (Niños y niñas <5 años, mujeres embarazadas y en lactancia, personas mayores) en municipios del Corredor Seco (en función a la tasa de desnutrición aguda).	Proyecciones Censo Poblacional, Instituto Nacional de Estadística, INE
Nutrición	Porcentaje de población retornada de Estados Unidos y México.	OIM 2021
Nutrición	Porcentaje de niñez migrante no acompañada respecto a la población total.	OIM, 2021
Nutrición	Porcentaje de niñas y adolescentes madres de 10 a 19 años.	Observatorio de Salud Reproductiva, 2021
Nutrición	Porcentaje de niñas y adolescentes embarazadas de 10 a 19 años.	Observatorio de Salud Reproductiva, 2021
Nutrición	Porcentaje de niños <5 años con desnutrición aguda.	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 2021
Protección/VBG	Porcentaje de mujeres de 15-49 años con disponibilidad de servicios esenciales para la atención de violencia basada en género.	INE, 2021, Censo, 2018, ENSMI, 2014 y 2015
Protección/VBG	Porcentaje de mujeres de 20 a 39 años que han tenido su primer hijo antes de cumplir 19 años.	INE, 2021, Censo, 2018
Protección	Porcentaje de personas víctimas de incidentes de protección en menores de 18 años.	Ministerio Público
Protección	Porcentaje de denuncias no presentadas por menores de 18 años.	Ministerio Público
Protección	Población en riesgo de movilidad externa	Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Feb.-Mar. 2021
Recuperación Temprana	Porcentaje de población según daño global de la vivienda.	CONRED, 2021

SECTOR	INDICADOR	FUENTE
Recuperación Temprana	Porcentaje de personas que necesitan recuperar sus medios de vida agropecuarios.	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, 2020
Salud	Porcentaje de población con limitado acceso a los servicios por daño a la infraestructura de salud.	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 2021
Salud	Porcentaje de establecimientos de salud rehabilitados que mejoran en al menos un 5% su seguridad, capacidad y acceso a la atención.	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 2021
Salud	Porcentaje de establecimientos de salud con personal capacitado y que cuentan con recursos, incluyendo insumos, equipamiento esencial y procedimientos para la atención de las y los adolescentes, mujeres en edad fértil, gestantes, parto seguro, salud de la niñez, violencia basada en género, violencia sexual e ITS y VIH.	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 2021
Salud	Porcentaje de direcciones de áreas departamentales y municipales de salud que cuentan con salas de situación y herramientas de coordinación, manejo de información y toma de decisiones de manera oportuna en el contexto de emergencias sanitarias y desastres.	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 2021
WASH	Hogares por fuente principal de agua por consumo.	INE, 2021, Censo 2018
WASH	Número de personas con saneamiento mejorado.	INE, 2021, Censo 2018

Honduras (30 indicadores de 8 sectores y 3 Áreas de Responsabilidad)

SECTOR	INDICADOR	FUENTE
Alojamiento de Emergencia	Porcentaje de hogares desplazados debido a riesgos comunitarios/regionales.	SEDIS
Alojamiento de Emergencia	Porcentaje de hogares que viven actualmente en zonas inseguras/insalubres afectadas por las amenazas de la comunidad.	SEDIS
CCCM	Porcentaje de la población en lugares con acceso a mecanismos de reclamación y retroalimentación que funcionan.	Evaluaciones COPECO. Mayo 2021. DTM Dic.2020
CCCM	Porcentaje de la población con acceso a los servicios básicos a poca distancia a pie.	Evaluaciones COPECO. Mayo 2021. DTM Dic.2020
CCCM	Porcentaje de la población en sitios que son física y socialmente adecuados.	Evaluaciones COPECO. Mayo 2021. DTM Dic. 2020
Educación	Número de escuelas no funcionales como resultado de las crisis/tormentas tropicales Eta e Iota.	Secretaría de Educación
Educación	Porcentaje de niños que no asisten a la escuela por sexo y nivel escolar (como resultado de crisis).	Secretaría de Educación
Educación	Porcentaje de niñas, niños y adolescentes que estudian en centros educativos con 4 o más condiciones de vulnerabilidad a desastres.	Secretaría de Educación
Nutrición	Lactancia materna exclusiva para bebés de 0 a 5 meses.	ENDESA
Nutrición	Prevalencia de la desnutrición global aguda (GAM) basada en el peso por altura Z-score (WHZ)<-2 y/o edema bilateral entre los niños.	ENDESA
Nutrición	Prevalencia de anemia Hb <11g/dl en mujeres embarazadas y lactantes.	ENDESA

SECTOR	INDICADOR	FUENTE
Nutrición	Dieta mínima aceptable en niños de 6 a 23 meses.	ENDESA
Nutrición	Prevalencia del retraso en el crecimiento basada altura para la edad Z-score (HAZ) <-2 entre los niños de 0 a 59 meses.	ENDESA
Nutrición	Prevalencia de anemia Hb <11g/dl en niños de 6 a 59 meses.	ENDESA
Protección	Población víctima de un hecho violento contra la integridad humana y la propiedad.	CENISS (2016-2019), ACNUR (2020), ACI (2020), IUDPAS-UNAH, 2020
Protección	Incidentes de protección identificados en el municipio (desplazamientos por violencia, agresiones a defensores por conflictos de tierra, homicidios múltiples y feminicidios) 2020.	CENISS (2016-2019), ACNUR (2020), ACI (2020), IUDPAS-UNAH, 2020
Protección de la Niñez	Acceso a/ Disponibilidad de servicios básicos de protección de la infancia por área.	DINAF Y PODER JUDICIAL
Protección de la Niñez	Cuidadores necesitando apoyo humanitario.	Proyección Metodológica
Protección de la Niñez	tasa de incidencia de violencia hacia la niñez sobre 10,000 de población.	CENISS 2019-2020
Salud	Cobertura de DTC3 (DPT3 / PENTA3) en < 1 año, por unidad administrativa.	PAI/SESAL
Salud	Porcentaje de niños de seis meses a 18 meses que han sido vacunados contra el sarampión.	PAI/SESAL
Salud	Porcentaje de la población que puede acceder a la atención sanitaria primaria a menos de una hora a pie de las viviendas.	OPS/OMS
Salud sexual y reproductiva	Porcentaje de centros de salud que proporciona, planificación familiar, anticoncepción de emergencia, profilaxis posterior a la exposición y tratamiento de infecciones de transmisión sexual.	Secretaría de Salud
Seguridad Alimentaria	CIF Proyección julio a septiembre 2021	PMA/FAO
VBG	Disponibilidad de servicios básicos especializados para la violencia de género por cada 5,000 personas (gestión de casos de violencia de género, apoyo psicosocial individual (PSS), atención médica especializada para la violencia sexual, servicios médicos para la VPI/otra violencia física, salud mental), asesoría legal, apoyo para medios de vida, servicios de protección.	Registro administrativo proveniente de Encuesta directa a Oficinas Municipales de la Mujer (OMM), 2021
VBG	Mujeres que reportan barreras para el acceso a ingresos económicos.	Encuesta Permanente de Hogares de propósitos múltiples
VBG	Disponibilidad de servicios básicos especializados con enfoque diferenciado para las personas LGBTIQ+ (Apoyo psicosocial, Atención médica.	Registro administrativo proveniente de Mapeo de Servicios a nivel nacional del Subcluster de VBG, 2021
VBG	Tasa de incidencia de violencia contra las mujeres.	Sistema Nacional de Emergencias-911, 2020-2021
WASH	Población sin acceso a una instalación de saneamiento mejorada.	INFORM
WASH	Población sin acceso a una fuente de agua mejorada.	INFORM
WASH	Población en municipios que presentan redes de agua dañadas por una catástrofe natural.	Matriz de priorización

5.2

Metodología para el cálculo del PIN

El cálculo del número de personas en necesidad (PIN) intersectorial para el Panorama de Necesidades Humanitarias (HNO) 2021 se hizo usando el Marco de análisis intersectorial conjunto (JIAF, por sus siglas en inglés), una nueva metodología global en la que se analizan los eventos o choques que afectan las condiciones humanitarias en la población a partir de tres pilares: i. Estándares de vida, ii. Mecanismos para afrontar el shock y iii. Bienestar Físico y Mental. Con el marco analítico se realizó una selección de “Drivers”, o desencadenantes, que determinan las necesidades humanitarias en el país que requieren asistencia (afectaciones por movilidad humana, afectaciones por desastres socio-naturales, afectaciones por COVID-19), definiendo para cada uno de ellos los indicadores que determinen el impacto de los grupos vulnerables, asignando una carga poblacional según los niveles de severidad del 1 al 5, en donde 1 son estándares mínimos aceptables y necesidades básicas satisfechas y 5 corresponde el colapso total de los estándares de vida, de parte de cada clúster.

El Salvador

El análisis del grupo poblacional tomó en cuenta la ubicación y las vulnerabilidades de las personas en cuanto a los impactos de la pandemia COVID-19, la violencia y los eventos de desastres socio-naturales sobre el bienestar de las personas, basado en 28 indicadores en los 14 departamentos.

El proceso metodológico se coordinó con los líderes sectoriales y el grupo de trabajo de manejo de información (GTMI), para el cual se hizo un análisis de la identificación de necesidades, indicadores y datos oficiales disponibles a nivel departamental.

Según la experiencia y conocimiento técnico de cada sector, se evaluaron los indicadores y sus niveles de severidad establecidos por la metodología, analizando

posibles ajustes acorde al contexto del país o tipo de información disponible. El proceso de obtención de información se efectuó mediante consultas y solicitudes de información actualizada a instituciones de gobierno.

Para la construcción del HNO se utilizaron datos poblacionales de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2019 (EHPM), ya que algunos indicadores se tomaron de fuentes de datos asociados con esa población.

Guatemala

En Guatemala, el análisis de la información se realizó a nivel intersectorial y a nivel sectorial. En primera instancia el Grupo Intersectorial identificó las crisis que más inciden en las condiciones humanitarias de la población guatemalteca, tomando como unidad de análisis el nivel municipal. Las crisis priorizadas son: siete departamentos afectados por los efectos de los huracanes Eta e Iota; ocho departamentos afectados por los efectos de la sequía y la inseguridad alimentaria en el corredor seco. Entre ambas crisis hay cuatro departamentos en común, totalizando 11 departamentos de 22 que componen la geografía del país. Se priorizó también la crisis de movilidad humana, que no cubre un área específica.

Posteriormente, cada sector realizó el análisis de la situación humanitaria, la selección de indicadores, escalas de severidad y la recolección de datos. Para determinar el número de personas en necesidad (PIN) cada sector aplicó sus propias metodologías y herramientas. Los resultados sectoriales fueron luego analizados con enfoque intersectorial utilizando la metodología global de JIAF para obtener un PIN total nacional. Este último análisis fue realizado por OCHA. Los datos que no fueron desagregados a nivel municipal no fueron agregados, aunque sí se tomaron en cuenta en el análisis sectorial.

Honduras

La recolección, procesamiento de la información ha sido realizada por el Grupo Técnico de Manejo de Información (GTMI) mediante el análisis de un promedio de 3 indicadores por Sector o Área de Responsabilidad. Sin embargo, se han enfrentado

importantes desafíos por la falta de disponibilidad de los datos o por la relevancia de esta en el tiempo, por ejemplo, información de necesidades humanitarias a nivel de comunidades, especialmente para temáticas como la sequía crónica, violencia extrema y migración entre otras.

5.3

Vacíos de Información y Limitaciones

La nueva metodología utilizada para la construcción del HNO, enfocada en la magnitud y la severidad de las necesidades de los grupos poblacionales más afectados, constituyó un reto en términos de indicadores, fuentes de datos y lineamientos, más que todo por el tiempo muy limitado para familiarizarse con la nueva herramienta y hacer el análisis.

El Salvador

La falta de acceso a fuentes de datos implicó un reto para la obtención de dicha información. También, se dificultó la obtención de información a nivel municipal, por lo que se optó por trabajarlos a nivel departamental. No se levanta información relacionada al acceso, calidad o estado de infraestructura para el lavado de manos y el acceso a insumos de higiene básico; un tema muy relevante para la prevención de enfermedades en poblaciones vulnerables, como la diarrea o la COVID-19, tanto a nivel domiciliario como en escuelas o establecimientos de salud. Lo que representa un gran reto para tener una visualización de la situación local

Guatemala

Una de las limitantes más importantes en el proceso de elaboración del HNO fue el poco tiempo disponible de 29 días calendario. Debido a ello, se tuvo que utilizar principalmente información secundaria (estudios, encuestas, censos de población, plataformas de información, bases de datos, 345W, etc.) y, en menor proporción, algunos sectores recién habían completado análisis sectoriales estacionales

(el estudio CIF de SAN; la actualización del EDAN de Salud; el estudio de Impacto Humano del PNUD y CONRED o el Análisis Rápido de Género). No fue posible organizar ningún proceso de consulta en el nivel territorial analizado.

No todas las bases de datos o información secundaria estuvieron disponibles a la escala municipal.

Los sectores que no pudieron aplicar procesos metodológicos sectoriales utilizaron indicadores que no necesariamente estaban actualizados al 2020. Las proyecciones poblacionales del censo 2018 solo estuvieron disponibles a la escala municipal. Las bases de datos georreferenciadas de centros poblados aún no están disponibles.

Por dichas razones, se generó una limitación al no contar con herramientas comunes para el uso de indicadores, severidad y PIN, lo que ocasionó que cada sector anteponga la determinación de la PIN al análisis e identificación de los indicadores como evidencia de la situación que estaban describiendo. OCHA facilitó espacios de análisis con cada sector para afianzar los resultados, la metodología y el PIN. Algunos sectores tuvieron la posibilidad de identificar indicadores a partir de evaluaciones (encuestas) a profundidad.

El entrenamiento y la orientación sobre la metodología global del JIAF para los sectores debe ratificarse para contribuir a una mejor comprensión del proceso y a la importancia de seleccionar indicadores adecuados para el análisis sectorial.

La imposibilidad metodológica de desagregar algunos indicadores a nivel municipal limitó la posibilidad de incorporar los en el análisis del JIAF y que puedan aportar en el cálculo del PIN total, aunque sí se hayan incorporado en el análisis sectorial.

Honduras

A pesar de que se ha contado con múltiples evaluaciones por la emergencia Eta e Iota, la falta de estandarización para cumplir con los requerimientos de la metodología JIAF ha limitado su usabilidad.

Es importante destacar que el país cuenta con un análisis CIF que fue actualizado post COVID-19, Eta e Iota (diciembre 2020), no obstante, existen limitaciones debido a que solamente llega a niveles

departamentales (nivel administrativo 1) dificultando precisar las necesidades humanitarias en temas de seguridad alimentaria a niveles comunitarios, así como también la identificación clara de áreas geográficas con impacto humanitario que deben ser priorizadas.

Se recomienda el EHP/ICCG/GTMI aborde un plan de evaluaciones multisectoriales a nivel de hogares para ciertos indicadores seleccionados que puedan llenar estas brechas de información en la próxima actualización del HNO y a través de del mismo proceso de la implementación del HRP. Las evaluaciones multisectoriales permitirán identificar las zonas geográficas más críticas en necesidades humanitarias evitando priorizaciones de manera dispersa.

5.4 Acrónimos

ACNUR	Alto Comisionado para los refugiados	MIRPS	Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones
ARG	Análisis Rápido de Género	MYPES	Medianas y Pequeñas Empresas
BCR	Banco Central de Reserva	NCA	Comisión Nacional de los Estados de Centroamérica
BID	Banco Interamericano de Desarrollo	NNA	Niñas, Niños y Adolescentes
CEPAL	Comisión Económica para América Latina y el Caribe	NRC	Norwegian Refugee Council (Consejo Noruego para Refugiados)
CIF	Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases	OCHA	Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios
CONRED	Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres	ODS	Objetivos de Desarrollo Sostenible
DTM	Displacement Tracking Matrix (Matriz de Seguimiento de los Desplazamientos)	OIM	Organización Internacional para las Migraciones
DRC	Danish Refugee Council (Consejo Danés para los Refugiados)	OIT	Organización Internacional del Trabajo
EDAN	Evaluación de Daños y Necesidades	OMM	Organización Meteorológica Mundial
EHP	Equipo Humanitario de País	OPS/OMS	Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud
EPP	Equipo de Protección Personal	PIB	Producto Interno Bruto
GTMI	Grupo Técnico de Manejo de la Información	PIN	People in Need (Personas en necesidad)
HNO	Humanitarian Needs Overview (Panorama de las Necesidades Humanitarias)	PMA	Programa Mundial de Alimentos
IASC	Inter-Agency Standing Committee (Comité Permanente entre Organismos)	PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
ICCG	Inter-Cluster Coordination Group (Grupo intersectorial de coordinación)	REDLAC	Grupo Regional sobre Riesgos, Emergencias y Desastres para América Latina y el Caribe
IRI	International Research Institute for Climate and Society (Instituto Internacional de Investigaciones para el Clima y la Sociedad)	RHH	Red Humanitaria en Honduras
ITS	Infección de Transmisión Sexual	UNAH	Universidad Nacional Autónoma de Honduras
JIAF	Joint Intersectoral Analysis Framework (Marco de análisis intersectorial conjunto)	VBG	Violencia Basada en Género
LGBTIQ+	Lesbiana, Gay, Bisexual, Trans, Travesti, Intersexual, Queer y otras identidades	VIH-SIDA	Virus de la Inmunodeficiencia Humana- Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida
MHPSS	Mental health and psychosocial support (Salud mental y apoyo psicosocial)	WASH	Water, Sanitation and Hygiene (Agua, Saneamiento e Higiene)

PANORAMA DE NECESIDADES HUMANITARIAS

EL SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS